

# SODALITUM

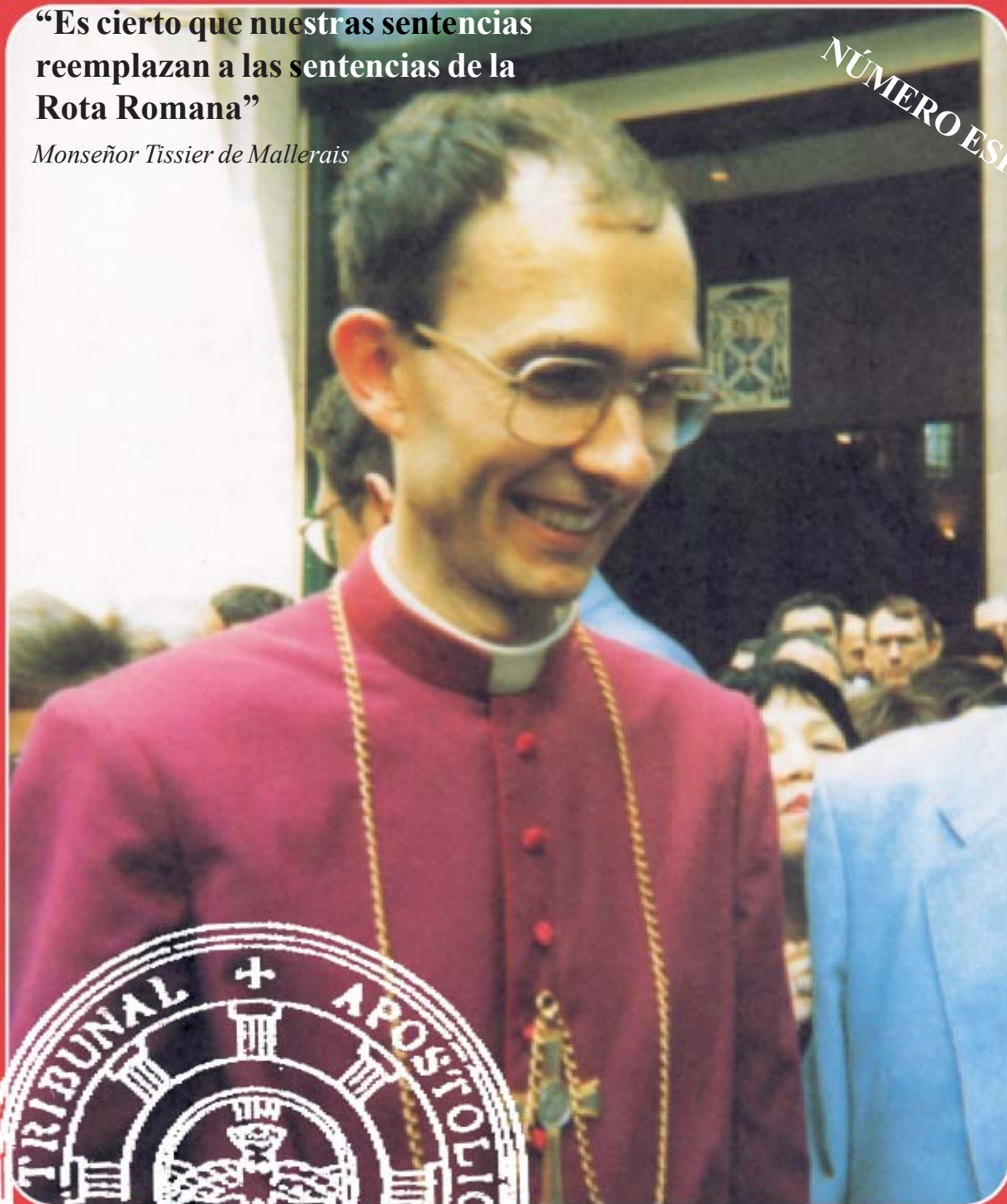
N° 51

Enero 2001

**“Es cierto que nuestras sentencias  
reemplazan a las sentencias de la  
Rota Romana”**

*Monseñor Tissier de Mallerais*

NÚMERO ESPECIAL



**DOSSIER SOBRE LA “CO-  
MISIÓN CANÓNICA” DE LA  
FRATERNIDAD SAN PÍO X**

"Sodalitium" Périodique  
n° 51, Anno XVI - n. 3 Dicembre 2000  
SPEDITO: GENNAIO 2001  
Editore: Centro Librario Sodalitium

Loc. Carignano, 36. 10020 VERRUA SAVOIA TO Italia  
Tel.: 0161.839335 Fax: 0161.839334 - CCP 36390334  
INTERNET: [www.sodalitium.it](http://www.sodalitium.it)  
email: [info@sodalitium.it](mailto:info@sodalitium.it)

Direttore responsabile: don Francesco Riossa Autorisation  
Autorizzazione Tribunale di Ivrea n. 116 du 24-2-1984  
Tipografia: Ages - Torino

**En tapa:** Mons. Tissier de Mallerai, presidente de la  
Comisión Canónica de la F.S.S.P.X. Sello de la Sacra  
Rota Romana.

## Editorial

**E**n el último número de *Sodalitium* habíamos anunciado a los lectores la publicación de un voluminoso dossier sobre los Tribunales canónicos de la Fraternidad San Pío X, cuya preparación estaba en curso. Cumplimos la promesa: el presente dossier se compone de dos partes. En la primera, se publican ciertos documentos internos de la Fraternidad San Pío X (documentos que no están pues a disposición del público, ni incluso a la de los fieles de la Fraternidad); estos conciernen a la creación, en 1991, de una Comisión canónica investida de vastos poderes de jurisdicción, la *Comisión canónica San Carlos Borromeo*. Para suplir la autoridad del Papa y la de la Santa Sede, la Fraternidad instituyó -como ustedes van a leer- verdaderos tribunales eclesiásticos autorizados -por las mismas autoridades de la Fraternidad- para conceder dispensas, anular matrimonios, etc... La publicación de estos documentos quizás podrá ser considerada como una indiscreción inaceptable; no obstante eso nos hemos sentido autorizados, ya que por una parte, los fieles tienen derecho a conocer la existencia de estos tribunales a los que deben recurrir y que pueden juzgarlos, y por otra parte, estarán así en capacidad de evaluar las razones con toda objetividad.

Es entonces a las mismas autoridades de la Fraternidad que vamos a dar la palabra, publicando por ejemplo lo que Mons. Tissier de Mallerai ha escrito para defender y justificar la existencia de estos tribunales.

La segunda parte de este dossier, consiste en el estudio crítico de estos documentos. Algunos lectores cercanos a la Fraternidad San Pío X, nos han manifestado legítimamente su desagrado ante el tono considerado rayano en lo agresivo de nuestro último editorial respecto de la Fraternidad y sus tribunales.

Nos excusamos, e invitamos a nuestros contradictores a leer con atención y sin prejuicio lo que sigue. Todo esclarecimiento, toda crítica de la crítica, toda objeción, serán consideradas por nosotros con la más grande seriedad.

Esta parte crítica comporta, es verdad, graves acusaciones respecto de la Fraternidad San Pío X, pero siempre pronunciadas, al menos nos lo parece,

en los límites de la corrección, y con pruebas irrefutables en apoyo. En la conclusión nos dirigimos con sinceridad a los superiores, así como a los simples miembros de la Fraternidad San Pío X, para invitarlos a abrir una discusión (solo interna o también abierta a otros) sobre este (u otros) puntos de doctrina de su congregación que plantean, en nuestra opinión, serias dificultades. De este examen sincero la Fraternidad saldrá fortalecida, si tiene el coraje de dejar de lado una institución como la *Comisión Canónica*.

Este número, enteramente consagrado a esta temática interna del mundo “tradicionalista”, no incluye los artículos habituales. Es pues posible que interese menos a una parte de nuestros lectores, y nos excusamos; un nuevo número de *Sodalitium* que incluye las rúbricas habituales está ya en preparación.

Queremos que este dossier no sea visto como una provocación o como una polémica estéril, sino como una contribución a la verdad y a la unión de todos los católicos que se oponen a la herejía modernista.

## Sumario

|   |         |
|---|---------|
| Editorial   | pág. 2  |
| Introducción  | pág. 4  |
| PRIMERA PARTE: DOCUMENTOS INTERNOS DE LA FRATERNIDAD SAN PÍOX   | pág. 4  |
| I. “ORDENANZAS” sobre los poderes y facultades de que gozan los miembros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X | pág. 5  |
| II. Extracto de “Cor Unum”, boletín interno de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, nº 61, octubre de 1998      | pág. 11 |
| Carta de S.E. Mons. Lefebvre del 15 de enero de 1991 sobre la constitución de comisiones canónicas              | pág. 12 |
| Legitimidad y estatuto de nuestros tribunales matrimoniales (Mons. Tissier)                                     | pág. 13 |
| III. Formularios de dispensa (Padre Pivert)   | pág. 18 |
| SEGUNDA PARTE: COMENTARIO DE SODALITIUM   | pág. 17 |
| APÉNDICE  | pág. 45 |
| Editorial de “Roma felix” (Padre Simoulin)  | pág. 46 |
| Respuesta al editorial del Padre Simoulin   | pág. 46 |



### Nota de la redacción:

Para mejor comprensión, los textos de la Fraternidad San Pío X han sido impresos en carácter **Arial**.

Los textos y comentarios de *Sodalitium* han sido impresos con el carácter habitual **Times**.

*San Carlos Borromeo. ¿Puede proteger el santo a la comisión que lleva su nombre?*



## DOSSIER SOBRE LA “COMISIÓN CANÓNICA DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X”

### Introducción

Hace un cierto tiempo que recibimos un pequeño boletín peruano titulado *Resistencia Católica*, dirigido por un fiel de la Fraternidad San Pío X, el Sr. Julio Vargas Prada.

Fue con estupor <sup>(1)</sup> que leímos (nº 187, nov.-dic. de 1999) una denuncia de la creación por la Fraternidad San Pío X, de verdaderos tribunales canónicos. El peruano Vargas Prada y el brasileño Orlando Fedeli, que sin embargo en su momento, sostuvieron a Mons. Lefebvre en la decisión de consagrar obispos, ven ahora en estos tribunales cuya existencia conocieron gracias a una alusión que hizo la revista argentina de la Fraternidad *Jesus Christus* (nº 43, enero-febrero 1996, pág. 17), un peligro concreto de cisma.

Era necesario controlar la veracidad del hecho. Hemos finalmente conseguido dos documentos de una gravedad excepcional: las *Ordonnances concernant les pouvoirs et facultés dont jouissent les membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X* (Ordenanzas sobre los poderes y facultades de que gozan los miembros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X), de 1997, y ciertos documentos de la Fraternidad que pretenden justificar estas novedades publicadas en *Cor Unum*, nº 61, octubre de 1988, págs. 33-46. *Cor Unum* es el boletín interno de la Fraternidad San Pío X, está reservado únicamente a sus miembros, y la publicación de estos documentos se hace sin ninguna autorización por parte de la revista. Pero nos parece un deber proceder a esta publicación. Según los textos en cuestión, los fieles de la Fraternidad San Pío X, los religiosos y los sacerdotes amigos de esta sociedad, e incluso potencialmente todos los católicos, son “súbditos” de estos tribunales, que les son desconocidos, así como sus jueces. Estos súbditos que lo ignoran, tienen el derecho de conocer la existencia de un tribunal de este género, de sus jueces, de sus justificaciones doctrinales; un tribunal semisecreto es, en nuestra opinión, incompatible con la moral católica, sin hablar de la moral natural.

### PRIMERA PARTE: DOS DOCUMENTOS INTERNOS DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X

El primer documento en cuestión es un pequeño volumen de 79 páginas titulado “Ordenanzas sobre los poderes y facultades de que gozan los miembros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X”, promulgado en 1997 por el Superior General de la Fraternidad, Mons. Bernard Fellay, para reemplazar a un análogo compilado de “Ordenanzas” publicado bajo la autoridad de Mons. Lefebvre, en 1980. Las “Ordenanzas” se componen de “preliminares”, seguidos de ocho capítulos: del ayuno y de la abstinencia (cap. I), de las obligaciones de los clérigos (cap. II), de algunas obligaciones particulares (cap. III), delegación de poderes e indulgencias (cap. IV), impedimentos de matrimonio (cap. V y VI), de los delitos y de las penas (cap. VII). En este dossier publicamos solamente lo que mira estrictamente a nuestro tema, es decir, los preliminares (que dan los principios generales seguidos por la Fraternidad), los capítulos V y VI sobre los impedimentos matrimoniales, así como un breve fragmento del capítulo VII. Las intervenciones de la redacción se insertan entre paréntesis: breves comentarios, omisiones de parte del texto señaladas con puntos suspensivos, o incluso la página de las “Ordenanzas” de donde se extrae el texto. Para la inteligencia del texto, recordamos al lector que la Iglesia enumera una serie de obstáculos (llamados “impedimentos”) que pueden hacer ilícito el matrimonio (“impedimentos prohibentes”), o inválido (“impedimentos dirimentes”). Allí donde el impedimento no es de derecho divino positivo o natural, la Iglesia (el Papa mediante las Congregaciones romanas) tiene el poder de dispensarlos. En las “Ordenanzas”, la Fraternidad precisa para sus miembros cuales son los impedimentos a considerar

1) Un estupor relativo. Ya desde hacía un tiempo, se escuchaban voces sobre la existencia y actividad de una Comisión canónica de la Fraternidad San Pío X. En 1995 publicamos en *Sodalitium* una Carta circular a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, en la cual el Padre Berger, un sacerdote que salía de la Fraternidad, denunciaba “el hecho de establecer un oficio paralelo para las cuestiones matrimoniales”, juzgando “muy grave” tal institución: ¿no se constituye la Fraternidad San Pío X -escribía- en iglesia paralela? ¿Autocéfala? (nº 38, pág. 71). Pero ni el Padre Berger ni otros sacerdotes que dejaron la Fraternidad por razones análogas, proporcionaron nunca documentación en apoyo que demostrase la naturaleza “legal”, y no solo consultiva de la Comisión.

*en vigor (del antiguo o del nuevo código), y atribuye a las autoridades de la Fraternidad el poder de dispensar que pertenece como propio a la Santa Sede. La importancia de la cuestión convencerá al lector de proseguir una lectura a veces difícil por el uso de términos canónicos y teológicos que pueden parecer desechables a quien no es experto en materia eclesiástica.*

## **I. PRIMER DOCUMENTO:**

### **ORDENANZAS sobre los poderes y facultades de que gozan los miembros de la FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X**

[Utilizamos la traducción española realizada por la misma Fraternidad para todas las citas, n.d.t.]

[pág. 3]

*Estimados cofrades,*

*Monseñor Lefebvre, al considerar las necesidades de nuestro apostolado, tan parecidas a las de las misiones de África, nos dio en 1980 una recopilación de las facultades tal como estaban en uso desde hacía varias décadas en los países de misión.*

*Desde hace 15 años ciertas circunstancias cambiaron, como la posibilidad de tener una visita episcopal más frecuente, o, al contrario, la casi imposibilidad de recurrir a Roma para obtener dispensa o juicio equitativo sobre los matrimonios. Esto justifica esta edición reajustada de las ordenanzas.*

(...)

*Estas nuevas ordenanzas entran en vigor el 18 de mayo de 1997, en la fiesta de Pentecostés.*

(...)

*En la fiesta de la Presentación de Jesús en el templo, 2 de febrero de 1997.*

*† Bernard Fellay, Superior general*

[pág. 4]

## **PRELIMINARES**

### **Objeto de la ley**

- El fin y el objeto de las leyes eclesiásticas, y por el hecho mismo de los poderes y de las facultades, no es otro que lo que concierne el culto de Dios y la salvación de las almas (Cf. León XIII, encíclica Inmortale Dei, cf. Prümmer, t. I, n. 181).

- El nuevo código de derecho canónico, promulgado el 25 de enero de 1983, imbuido de ecumenismo y de personalismo, peca gravemente contra la finalidad misma de la ley. Por eso nosotros seguimos en principio el código de 1917 (con las modificaciones introducidas posteriormente).

Sin embargo, en la práctica y sobre puntos precisos, podemos aceptar del nuevo código lo que corresponde a un desarrollo homogéneo, a una mejor adaptación a las circunstancias, a una simplificación

útil; aceptamos también en general lo que no podemos rechazar sin ponernos en una situación de disconformidad con la legislación recibida oficialmente, cuando está en juego la validez de los actos. Y en este último caso, reforzamos nuestra disciplina para aproximarla de la del código de 1917 (Cf. Cor Unum, n. 41, pp. 11-13).

[pág. 5]

### **Jurisdicción de suplencia**

- El derecho prevé ciertos casos en que la Iglesia suple al defecto de jurisdicción del sacerdote: «la razón por la que la Iglesia suple la jurisdicción no es un bien privado, sino el “bonum animarum commune”» (Capello, I, n° 252). La Iglesia suple expresamente en la jurisdicción en tres casos: el peligro de muerte (can. 882), el error común (can. 209) y la duda positiva y probable de derecho o de hecho (can. 209) (Cf. Noldin, III, n° 346-347; Capello, I, n° 254-258).

- Por el hecho de que la jerarquía (Cf. can. 108 § 3) se aleja en gran parte de la fe católica, los fieles no pueden generalmente recibir de ella los socorros espirituales sin peligro en la fe. En estos casos no se puede dudar de que la Iglesia extienda ampliamente en su favor lo que ella concede en el peligro de muerte y en otros casos de urgencia, y que así, en razón de la analogía iuris (can. 20) y de la æquitas canonica, supla al defecto de jurisdicción de los sacerdotes fieles (Cf. can. 209, 2261...) cuando éstos son injustamente privados de la jurisdicción que tendrían en tiempo normal, ya sea por el derecho (Por ejemplo NCIC 967 § 2), ya sea por delegación.

*Tapa de la edición española de las «Ordenanzas» de 1997*

## **ORDENANZAS**

**sobre los poderes y facultades  
de que gozan los miembros  
de la**

**Fraternidad Sacerdotal  
San Pío X**

- *Características de esta jurisdicción suplida:*

Ella es: 1º más bien de tipo personal que territorial; 2º no es habitual, sino que se ejerce 'per modum [pág. 6]

actus' (Cf. Capello, I, nº 252); 3º depende de la necesidad de los fieles, dada la situación de necesidad (Cf. Conferencia a los Círculos de la Tradición, París, 10 de marzo de 1991), pero 4º existe incluso en el caso en que, de hecho, no haya necesidad; en efecto hay una presunción de peligro común y por lo tanto una analogía con el canon 21, permitida por el canon 20, y como habrá en general duda probable de hecho, habrá suplencia según el canon 209.

- *Quiénes poseen la jurisdicción de suplencia*

Son todos los obispos y todos los sacerdotes fieles a la tradición (incluso excomulgados, cf. can. 2261, esto dicho como argumento 'ad hominem'), para el ejercicio lícito o válido de los actos del ministerio episcopal o sacerdotal.

- *Jerarquía en la jurisdicción suplida*

En sí mismo, respecto a los fieles, los simples sacerdotes no tienen menos poder de suplencia que un prior o que un superior de distrito. Pero por disposición práctica, a fin de conservar el sentido jerárquico que pertenece al espíritu de la Iglesia, y de remitir los casos más graves a una instancia más elevada, ciertos poderes son reservados a la autoridad superior, en virtud de una analogía con la jerarquía normal, según las reglas siguientes:

\* Los priores y sacerdotes responsables de capillas son equiparados a párrocos personales, como los capellanes militares.

[pág. 7]

\* Los superiores de distrito, seminario y de casa autónoma, como el Superior general y sus Asistentes, aunque no tengan en principio jurisdicción sino sobre sus súbditos (sacerdotes, seminaristas, hermanos, oblatas, familiares), son equiparados a Ordinarios personales, como los Ordinarios militares, en relación a los fieles cuya cura de alma tienen sus sacerdotes.

\* Los obispos de la Fraternidad, desprovistos de toda jurisdicción territorial, tienen sin embargo la jurisdicción supletoria necesaria para ejercer los poderes ligados al orden episcopal y a ciertos actos de la jurisdicción episcopal ordinaria.

**Comisión canónica - Obispo encargado de los religiosos**

Estas dos instancias fueron creadas en 1991 para continuar después de su muerte el oficio que Monseñor Lefebvre cumplió de manera supletoria, en estas materias, desde 1970 hasta 1991. Monseñor mismo previó y precisó el papel de estas instancias, por su carta del 15 de enero de 1991 al Superior general:

[omitimos aquí el texto de esta carta, para volverla en el documento siguiente].

[pág. 8]

**Poderes y facultades delegados**

- *Delegaciones anteriores concedidas por la Santa Sede:*



*Mons. Fellay (a la izquierda), actual superior de la F.S.S.P.X, con Mons. Lefebvre y el Padre Laroche, uno de los miembros de la comisión canónica*

Desde hace tiempo, y últimamente en 1950 y 1960, la Sagrada Congregación de la Propaganda concedió a los Ordinarios de lugar de los países de misión amplias facultades llamadas "facultades decenales", en particular la facultad de delegar varios de sus poderes a los sacerdotes de su territorio.

Monseñor Lefebvre, entonces arzobispo de Dakar, promovió su aplicación en 1961 por medio de un pequeño libro que tenía ya el título de «Ordenanzas, etc.». El texto de las facultades decenales se encuentra en la obra *Veinticinco años de pastoral misionera*, del Padre Greco (1958), prefaciado por Monseñor y especialmente recomendado por él.

El Papa Pablo VI, el 30 de noviembre de 1963, por su carta apostólica *Pastorale munus*, comunicó facultades algo análogas a todos los obispos residenciales.

- Monseñor Lefebvre, como obispo y Superior [pág. 9]

rior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, aunque no era ya Ordinario de lugar como lo era en Dakar, estimó gozar de una suplencia que le permitía, a favor de los fieles, conceder a sus sacerdotes facultades análogas. Las promulgó por sus Ordenanzas para uso de la Fraternidad, el 1 de mayo de 1980, según la formula facultatum decennialium de 1960.

- La presente edición de las Ordenanzas retoma el texto anterior pero con subdivisiones más desarrolladas y teniendo en cuenta la existencia de los obispos auxiliares de la Fraternidad.

- Se han añadido además los poderes y facultades relativos a los casos de matrimonio (Cf. Cor Unum, nº 42, pp. 44-56), la dispensa de los votos y la absolución de las censuras, con las precisiones útiles sobre los casos de peligro de muerte y el caso urgente.

- Las facultades concedidas a los sacerdotes, lo son no solo a los sacerdotes miembros de la Fraternidad, sino también a todos los sacerdotes que residen de una manera prolongada en nuestras casas. [...]

**CAPÍTULO 4 - DELEGACIÓN DE PODERES E INDULGENCIAS**

[págs. 20-28. Por brevedad omitimos este capítulo, así como los tres precedentes. No obstante, señalamos que entre otras "facultades" concedidas

por las Ordenanzas a los sacerdotes de la Fraternidad, se halla incluso la de conferir el Sacramento de la Confirmación (I, 3, pág. 20; I, 4 y 5, págs. 20 y 21; III, 36, pág. 26), lo cual es particularmente grave, ya que, como lo ha demostrado el Padre Hervé Belmont, en estas circunstancias el Sacramento es administrado inválidamente <sup>(2)</sup>]

## **CAPÍTULO 5 - IMPEDIMENTOS DE MATRIMONIO. Poderes de dispensa en LOS CASOS ORDINARIOS [págs. 29-48]**

### **I - PRINCIPIOS [pág. 29]**

I - No podemos aceptar del nuevo código las normas que se oponen más o menos al derecho natural o al derecho divino sobrenatural.

II - Cuanto a las demás normas, para todo aquello que compromete la validez del matrimonio, seguimos el nuevo código, a fin de no tener que declarar nulo un matrimonio reconocido como válido por el nuevo código y viceversa. Pero para lo que mira a la licitud, adoptaremos una disciplina propia; con el fin de asegurar lo más posible los tres bienes del matrimonio reforzamos las exigencias del nuevo código reduciéndolas a las del antiguo.

III - A grandes rasgos, la comisión canónica es competente para la mayor parte de lo que el derecho reserva a la Santa Sede, y los superiores de distrito para aquello que es competencia del Ordinario del lugar.

### **II - LISTA DE IMPEDIMENTOS, PODERES DE DISPENSA, COMPETENCIAS RESPECTIVAS, EN DETALLE [pág. 30]**

**1. Aetas** [pág. 30. Se trata de la edad por debajo de la cual se prohíbe el matrimonio].

- Ad validitatem (can. 1067 § 1, n. can. 1083 § 1): 16/14 años, dispensa muy rara: comisión canónica. Ad liceitatem (n. can. 1083 § 2): seguimos la edad mínima fijada por las Conferencias episcopales o, en su defecto, 18/18 años. Dispensa: comisión canónica.

- Can. 1034 (n. can. 1071 § 1, 6º): no se puede asistir a un matrimonio de menores que no tengan el permiso de sus padres, sin permiso del Ordinario: permiso del superior de distrito. Por "menores" entendemos en este caso los menores de 21 años y no de 18 (mayoría fijada por el nuevo código). Pero esto no significa que rechacemos en otros casos la mayoría de 18 años.

#### **Edad:**

**Comisión canónica** (dispensa - menos de 18/18 años).

**Superior de distrito** (permiso - menos de 21 años cuando falta el permiso de los padres).

**2. Impotencia (dirimente)** [en caso de impotencia no es posible la dispensa. Omitimos lo que dicen las "Ordenanzas" al respecto]

[pág. 31]

**3. Ligamen (dirimente)** [es el caso de una persona ya casada]

Can. 1069 (n. can. 1085).

- En los casos de MATRIMONIOS EVIDENTEMENTE INVÁLIDOS (por ejemplo el matrimonio puramente civil de dos católicos) y de matrimonios evidentemente válidos, no hay que recurrir a la comisión canónica, pero es necesario el nihil obstat del superior de distrito. [...]

- Todos los casos de primer matrimonio dudosamente válido, o de declaración de nulidad de matrimonio, incluidos los matrimonios declarados nulos por los tribunales oficiales, son de competencia de la comisión canónica. Se debe observar el procedimiento siguiente: hay que dirigirse al superior de distrito, el cual recogerá el máximo de elementos y podrá resolver así en favor de la validez del matrimonio precedente (con posibilidad de apelar ante la comisión canónica); si estima serias las razones a favor de la nulidad del matrimonio, transmitirá el expediente para que la co-

[pág. 32]

misión canónica juzgue el caso, a no ser que disponga de un tribunal de distrito para la primera instancia.

- PRIVILEGIO PAULINO

Can. 1122 § 1 (n. can. 1145 § 1): interpelaciones al cónyuge que permanece en la infidelidad: deben ser hechas por el Ordinario; para nosotros, por el superior de distrito: - si hay que conceder una dispensa de la interpelación, el can. 1121 § 2 la reserva a la Santa Sede, el n. can. 1144 § 2, al Ordinario del lugar; para nosotros, habrá que dirigirse a la comisión canónica.

- Otros casos de dispensa del vínculo matrimonial

• PRIVILEGIO PETRINO

• DISPENSA SOBRE "RATUM NON CONSUMMATUM".

Los poderes dados por el código (can. 1125, n. can. 1148-1149) permanecen, pero su aplicación será sometida a la comisión canónica para su control, porque esos casos son graves y comprometen la validez.

Corresponderá a la comisión canónica dispensar, si hay lugar, de las interpelaciones.

La dispensa de otros matrimonios de paganos, como la dispensa del "super ratum non consumatum", no puede ser concedida más que por el Papa en persona. Se deberá por tanto utilizar la vía oficial, pero no sin la autorización del superior de distrito, que

2) PADRE H. BELMONT, *¿Son válidas las confirmaciones dadas por sacerdotes de la Fraternidad San Pío X?*, en *Cahiers de Cassiciacum*, n° 6, 1981, págs. 1-11.



controlará previamente la legitimidad de la dispensa a pedir.

#### - MATRIMONIO NO CANÓNICO DE APÓSTATAS

Hasta examen más profundo, seguimos la norma del nuevo código, que considera válido el matrimonio no canónico (civil por ejemplo) de los católicos "que han

[pág. 33]

abandonado la Iglesia Católica por un acto formal": ellos no están más obligados a la forma canónica del matrimonio (n. can. 1117). [Notar que los matrimonios en cuestión son por el contrario inválidos para el código de 1917, que sin embargo es para la Fraternidad - en principio - la ley a que hay que referirse. ¿Cómo podrían los fieles no tener dudas sobre la validez de su unión?]

#### Vínculo:

*Simple sacerdote* (casos evidentes).

*Comisión canónica* (primer matrimonio dudoso, o declarado nulo. A través del superior de distrito).

#### Privilegio Paulino:

*Superior de distrito* (interpelación del cónyuge no católico).

*Comisión canónica* (dispensa de las interpelaciones).

#### Privilegio petrino y dispensa sobre *ratum non consumatum*:

*Santa Sede* (con permiso del superior de distrito y control de la comisión canónica).

Matrimonio no canónico de los apóstatas (nueva disciplina).

#### 4. Disparitas cultus (matrimonio entre bautizado católico y no bautizado)

- Es un impedimento dirimente de derecho eclesiástico (can. 1070), y prohibente de derecho divino si existe peligro de pervisión de la fe para el cónyuge católico o para los hijos (can. 1060 in fine, n. can. 1124:

[pág. 34]

¡nada!).

La dispensa pertenece a la comisión canónica, en razón de la gravedad de estos casos.

- Se observará que el nuevo código (n. can. 1086 § 1), contrariamente al antiguo (can. 1070 § 1) no somete más al impedimento a aquellos que han abandonado la Iglesia Católica "por un acto formal".

Ya hemos dicho lo que se debía, a propósito del defecto de forma canónica del matrimonio (nº 3). Observemos simplemente aquí que, si se trata de un matrimonio a celebrar entre un no bautizado catecúmeno y un apóstata de la Iglesia Católica, hay que dirigirse a la comisión canónica.

- Las exigencias del nuevo derecho (n. can. 1086 § 2; 1125-1126) son, por su debilidad, más o menos contrarias al derecho divino (protección de la fe, *bonum proles*); conservamos, por consiguiente, las del antiguo derecho (can. 1071; 1060-1064).

- Dada la particular gravedad de los casos de disparidad de cultos, que ponen en juego la fe, la Iglesia ha sido siempre muy severa. Por eso los sacerdotes prestarán una especial atención a no pedir jamás la dispensa sin comprobar anteriormente con seriedad la realidad de las causas alegadas y las garantías otorgadas (can. 1061). Un error en esto o una falta de sinceridad pueden invalidar la dispensa y por lo tanto el matrimonio (can. 84, n. can. 90). Un sacerdote prudente y prevenido no deberá aceptar jamás la unión, ni requerir la dispensa, cuando se trata de un musulmán o de un judío; era el parecer de Monseñor Lefebvre, y Naz dice que la Iglesia concedía raramente tales dispensas.

[pág. 35]

#### Disparidad de culto:

*Comisión canónica* (dispensa; matrimonio de los catecúmenos y de los apóstatas).

*Superior de distrito* (ad cautelam, cuando el bautismo es dudosamente válido).

#### 5. Ordo Sacer (can. 1072, n. can. 1087) (dirimente)

El derecho siempre reservó la dispensa a la Santa Sede [...] y para el sacerdocio, aún en el caso de peligro urgente de muerte [...]. "La dispensa propiamente dicha no es concedida sino difícilmente, y solamente a los subdiáconos y diáconos" [...]. Pero existe la posibilidad de obtener el indulto de reducción al estado laical.

- Para nosotros, la dispensa será de competencia de la comisión canónica que, sin embargo, seguirá la práctica de la Santa Sede, de manera que el impedimento proveniente del sacerdocio deberá ser considerado como no susceptible de dispensa, aún en peligro de muerte. En cuanto a los subdiáconos y diáconos, la dispensa será difícilmente otorgada, salvo en el caso de peligro de muerte, por el confesor o el sacerdote que asiste al matrimonio [...].

#### Orden Sagrado:

*Comisión canónica* (dispensa a conceder a subdiáconos y diáconos).

[pág. 36]

#### 6. Professio religiosa - Vota

[...] [La Fraternidad sigue el nuevo código para los votos públicos perpetuos - todos dirimientes - y el antiguo para el voto privado de castidad y los votos públicos temporales]. [Disciplina para los casos ordinarios:]

[pág. 37] [...]

\* *Votos públicos perpetuos* (dirimientes): Su dispensa va anexa ipso iure al indulto de secularización [...] que es de competencia de la Santa Sede para los institutos de derecho pontificio, y del obispo diocesano de la casa para los institutos de derecho diocesano (n. can. 692). Para nosotros, parece más práctico no hacer esta distinción y confiar



todos los casos al obispo encargado de los Religiosos.

\* *Votos públicos temporales* (prohíbentes para nosotros)

[...] Para nosotros, dejando de lado a la Fraternidad San Pío X, que consideramos equiparada a un instituto de derecho pontificio, será el obispo encargado de los Religiosos quien otorgará el indulto (que contiene ipso iure la dispensa del voto).

[pág. 38]

\* *Votos privados reservados a la Santa Sede por el código de 1917*

El nuevo código ha suprimido la reserva realizada por el antiguo (can. 1309) para la Santa Sede respecto de los dos votos privados especiales de castidad perfecta y perpetua y de ingresar en un instituto de votos solemnes; no obstante, mantenemos esta reserva, que será de competencia de la comisión canónica. Sin embargo los superiores de distrito y de casa autónoma tienen la facultad delegada de dispensar de ellos o de conmutarlos (Cf. nuestras fac. n° 35 y n° 41).

\* *Todos los demás votos privados* contrarios (o no) al matrimonio son, según el nuevo código (n. can. 1196), de la competencia del Ordinario del lugar o del párroco. Nosotros les equiparamos el superior de distrito y el prior, como también el sacerdote, simple responsable del centro de misa o capilla (Cf. nuestra fac. n° 35).

#### **Profesión religiosa:**

Votos públicos perpetuos: *obispo encargado de los religiosos* (secularización).

Votos públicos temporales: - FSSPX: *Superior general*. - Otros: *Obispo encargado de los religiosos*.

Votos privados contrarios al matrimonio: fac. n° 35 y 41.

[pág. 39]

#### **7. Raptus (can. 1074, n. can. 1089) (dirimente)**

No se otorga habitualmente la dispensa.

- Será competencia de la comisión canónica.

#### **8. Crimen (dirimente)**

- El n. can. 1090 suprime las dos primeras formas de impedimento de crimen (can. 1075 § 1): adulterio con promesa de matrimonio y adulterio con atentación de matrimonio aunque sea sólo civilmente. Monseñor Lefebvre decía que esta supresión se justifica por la evolución de las costumbres [...]

- Las dos otras formas de crimen [...] han sido simplificadas [...]. Estas dos formas de impedimento están reservadas a la Santa Sede [...] [pág. 40]. Para nosotros será competencia de la comisión canónica.

[pág. 39]

#### **Crimen:**

*Superior de distrito* (control de las obligaciones hacia los hijos del matrimonio anterior).

*Comisión canónica* (dispensa, si hay conyugicidio).

[pág. 40]

#### **9. Consanguinidad (can. 1076, n. can. 1091) (dirimente)**

[...] El nuevo código cambió el modo de cómputo, y en el nuevo modo reduce el impedimento en la línea colateral al cuarto grado de parentesco. [...] La reducción del impedimento por el nuevo código es pues justificada, según el parecer de Monseñor Lefebvre. [...] [pág. 42]

Todas las dispensas son competencia de la comisión canónica. [...]

**10. Affinitas (con los consanguíneos del cónyuge fallecido)** [...] [La Fraternidad procede a una “armonización” de las dos legislaciones, la antigua y la nueva, según la experiencia de Mons. Lefebvre. Damos simplemente el cuadro sinóptico:]

[pág. 43]

#### **Afinidad:**

- No hay dispensa en línea directa.

- *Superior de distrito* (permiso para control, en el 1er y 2º grado colaterales, según el *cómputo canónico antiguo*).

#### **11. Honestas publica (dirimente)**

[...] [También en este caso la Fraternidad procede a una “armonización de las legislaciones”. Damos solo el cuadro sinóptico de pág. 44:]

#### **Honestidad pública:**

*Comisión canónica* (dispensa en el 1er grado).

*Superior de distrito* (permiso en el 2º grado).

[pág. 45]

#### **12. Cognatio spiritualis**

[...] [El nuevo código suprime el impedimento de parentesco espiritual; pero la Fraternidad dice: “nosotros mantenemos la necesidad de un permiso del superior de distrito”]

#### **13. Cognatio adoptiva**

[...] [Para el parentesco adoptivo la Fraternidad sigue el nuevo código]

[pág. 46]

Dispensa del impedimento: el superior de distrito (n. can. 1078 § 1: Ordinario del lugar) [...].

#### **14. Religio mixta (entre bautizado católico y bautizado no católico)**

- La disciplina del nuevo código es, por su debilidad, más o menos contrario al derecho divino (protección de la fe católica); por consiguiente, nosotros la rechazamos, reteniendo la disciplina anterior.

- Can. 1060: prohibición muy severa, y de derecho divino si existe el peligro de perversión de la fe. Respecto a los apóstatas notorios o miembros de sectas, la Iglesia lleva a “detestar” el matrimonio con ellos (c. 1065), y el párroco no puede asistir a ellos, salvo autorización del Ordinario.

Para nosotros: lo exigiremos como impedimento prohibente propiamente dicho para el matrimonio

con apóstatas, incluso simples, con miembros de sectas cristianas o no; para el matrimonio con *católicos conciliares* exigimos la autorización del superior de distrito. En efecto, en todos estos casos hay presunción de peligro común para la fe del cónyuge católico y de los hijos por nacer.

- Condición de la dispensa: c. 1061. promesas [pág. 47]

(requeridas para la validez de la dispensa) y certeza de que los compromisos serán cumplidos.

Si después de haber obtenido la dispensa, los futuros cónyuges desean presentarse ante un ministro no católico, es necesario consultar al Ordinario (c. 1063), que para nosotros será el superior de distrito.

- Autoridad que concede la dispensa: la gravedad del caso sugeriría la intervención de la comisión canónica, pero su frecuencia, por ejemplo en los países anglosajones, exige que el superior de distrito pueda conceder la dispensa. Es a él, pues, que queda reservado el concederla.

- Dispensa *ad cautelam* del impedimento de disparidad de culto: no solamente es permitido sino aconsejable que el superior de distrito la agregue siempre a la dispensa del impedimento de religión mixta. Se supone inexistente si no se agrega *expressis verbis*.

#### Religión mixta:

*Superior de distrito* para dispensa, o para permiso para matrimonio con católico conciliar.

### 15. Desacuerdo con las leyes civiles

[...] Todos estos casos serán sometidos a la autorización del superior de distrito, más al tanto de la legislación civil que la comisión canónica. [...]

[pág. 48]

## III - CONVALIDACIÓN DEL MATRIMONIO Y SANATIO IN RADICE (casos ordinarios) [...]

[pág. 49]

### c) Poderes

- Convalidación simple: superior de distrito para el control. Pero si hay disparidad de culto: comisión canónica, e igualmente si hay otros impedimentos que son de la competencia de esta última.

- Sanatio in radice: es una gracia concedida por la Santa Sede solamente, según el código de 1917 (can. 1141). Pero como el nuevo código comunica este poder a los obispos diocesanos (n. can. 1165 § 2), estimamos

[pág. 50] que nuestros superiores de distrito y de casa autónoma gozan supletoriamente de este poder, dadas también las fac. 30 y 31 de la Form. Facultatum decennialium.

#### Convalidación y sanatio in radice:

Convalidación simple: *Superior de distrito* (control).

Sanatio in radice: *Superior de distrito* (gracia).

[pág. 51]

## CAPÍTULO 6

### IMPEDIMENTOS DE MATRIMONIO

#### Poderes de dispensa en EL PELIGRO DE MUERTE Y EL CASO URGENTE

### Preliminares

1. El nuevo código, al lado de algunos detalles que pueden ser ventajosos, complica las cosas y omite las condiciones necesarias para la dispensa según la ley divina. Por eso nos atenemos al código de 1917, con las siguientes adaptaciones:

- A los Ordinarios de lugar son equiparados los *superiores de distrito y de casa autónoma*, pero no los superiores de seminario. Pueden delegar.

- Los poderes concedidos por el código a los párrocos y sacerdotes que asisten al matrimonio lo son, para nosotros, concedidos a todos los sacerdotes beneficiarios de las presentes ordenanzas.

[omitimos el resto de la página 51 y las páginas 52-54, que aplican los mencionados “principios”]

[pág. 55]

## CAPÍTULO 7 - De los delitos y de las penas

### I - PRINCIPIOS

#### Norma general

Seguimos los sabios principios del código de 1917 expuestos en los cánones 2195 a 2313, pero por las razones indicadas (p. 3) nos atenemos a las penas *latae sententiae* lanzadas por el nuevo código. [...]

[en el capítulo II, las “Ordenanzas” exponen las “censuras *latae sententiae* en vigor” - en pág. 56 - a saber, las excomuniones *latae sententiae* - págs. 56-57 - los entredichos *latae sententiae* - pág. 57 - las suspensiones *latae sententiae* - pág. 57-58, según el nuevo código].

[pág. 58]

## III - REMISIÓN DE LAS PENAS

### 1. Prænotamina

[...] 3º Dado que pueden resultar graves inconvenientes por dirigir los penitentes a las instancias previstas por el código (Sagrada Penitenciaría, obispo, canónigo penitenciario), se aconseja utilizar las facultades que siguen en el n° 2, relativas a los casos ordinarios.

[pág. 59]

### 2. Casos ordinarios

1º Las penas RESERVADAS a la Santa Sede pueden ser sometidas al Superior general de la Fraternidad o al presidente de la comisión canónica.

2º Una pena INFLIGIDA por un superior es sometida al mismo, pero si se trata de un superior “novus ordo”, puede ser sometida al superior de rango equivalente en la Fraternidad, por quien corre la cuenta de consultar a su cofrade “novus ordo” si lo juzga útil.

3º Todas las DEMÁS PENAS pueden ser sometidas

al superior de distrito, que consultará, si llega el caso, al superior de distrito donde el delito fue perpetrado.

4º Cuanto a la censura incurrida por ABORTO oculto, todo sacerdote tiene la facultad de absolver de él, sin obligación de recurrir, imponiendo una penitencia proporcionada y la eventual reparación.

[Las “Ordenanzas” hablan finalmente de la absolución de penas en los casos extraordinarios: peligro de muerte (punto 3, pág. 59); caso urgente (punto 4, pág. 60) y recurso imposible (punto 5, pág. 60-61). Con esta enumeración concluyen las “Ordenanzas”].



## II. SEGUNDO DOCUMENTO:

### Extracto de “*Cor Unum*”, boletín interno de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, n° 61, octubre de 1998

*El segundo documento es un extracto del boletín “Cor Unum” de octubre de 1998. La institución de la “Comisión canónica” por la Fraternidad San Pío X, no podía sino provocar - tanto dentro como fuera de la Fraternidad - dudas, perplejidad y críticas, al menos en la medida en que la actividad de esta Comisión era conocida. Las autoridades de la Fraternidad consideraron entonces oportuno justificar la institución de la “Comisión canónica” y, en particular, las nulidades matrimoniales decretadas por ese Tribunal. Es por esto que “Cor Unum” publica dos documentos, aquí reproducidos íntegramente: la carta de Mons. Lefebvre del 15 de enero de 1991 al superior general de entonces, Franz Schmidberger, sobre la constitución de una Comisión canónica, y el texto de una intervención realizada en Ecône el 24 de agosto de 1998, por el presidente de la Comisión canónica, Mons. Bernard Tissier de Mallerais, sobre la legitimidad y el estatuto de los tribunales matrimoniales de la Fraternidad. Recordamos que estos documentos (la carta de Mons. Lefebvre y la intervención de Mons. Tissier) son documentos internos de la Fraternidad, que sepamos nunca publicados por ninguna revista de la Fraternidad dirigida al público. Finalmente, para una mejor comprensión del texto, señalamos que la sigla “FSSPX” indica Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que “n. can.” significa “nuevo canon”, y que “n.o.” sustituye a “novus ordo” (o sea, todo lo que se refiere a Juan Pablo II).*

[pág. 33]

## COMISIÓN CANÓNICA

### Carta de S.E. Mons. Lefebvre del 15 de enero de 1991 sobre la constitución de comisiones canónicas

*He aquí un extracto de una de las últimas cartas de S.E. Mons. Lefebvre al entonces Superior General, Padre Franz Schmidberger, en la que nuestro venerado Fundador concibe claramente la institución y el funcionamiento de nuestra actual “Comisión Canónica San Carlos Borromeo”, teniendo un presidente, “siempre que sea posible, un Obispo”, puesto que esta instancia supletoria ejerce poderes que pertenecen normalmente al Obispo, y que estará encargada en particular de:*

1. Conceder las dispensas de los impedimentos del matrimonio.
2. Juzgar las nulidades del matrimonio.
3. Absolver de las censuras.

*Nuestras ordenanzas de 1997 precisaron las autoridades supletorias respectivas de la Comisión de los diversos Superiores y de los simples sacerdotes, como también la disciplina que hemos adoptado frente al nuevo código de derecho canónico, con relación a los puntos 1 y 3.*

*En cuanto al punto 2, la Comisión canónica, por diversos tribunales instituidos ad casum, ya ha juzgado actualmente numerosas causas que se han definido como sigue:*

*En primera instancia:*

- non constat de nullitate: numerosas causas
- constat (proceso del sumario): algunas causas

*En segunda instancia:*

- non constat: 0
- constat: algunas causas

*En tercera instancia:*

- non constat: 0
- constat: algunas causas

[pág. 34]

*Nuestra jurisprudencia, que se inspira en la jurisprudencia tradicional de la Rota romana y guarda lo que puede ser bueno en una jurisprudencia reciente, se elabora a medida que se va ejerciendo nuestro poder supletorio, según la prudencia.*

*Los demás casos previstos por Monseñor Lefebvre se distribuyen de esta manera:*

*\* Dispensa de los votos de religión: el Obispo encargado de los religiosos, actualmente Mons. De Galarreta (después de Mons. Fellay, ordenanzas de 1997, pág. 37).*

*\* Autorización de exorcismos: los Superiores de Distrito, seminarios y casas autónomas (ordenanzas de 1997, pág. 28, facultad 46).*

*\* Consultas: el presidente o los miembros de la Comisión canónica (actualmente Monseñor Tissier de Mallerais, presidente, Padre Laroche y Padre Pivert, miembros).*



*Nuestros compañeros en el ministerio podrán comprobar nuestra fidelidad a la línea que trazara Monseñor Lefebvre en su carta, de la que extraemos un fragmento escogido.*

Ecône, 15 de enero de 1991

Estimado Padre Schmidberger:

Muchas gracias por sus votos y sus oraciones con ocasión de la fiesta de San Marcelo [...]

En cuanto al problema de las Comisiones, supliendo en cierto modo a la defección de las Congregaciones romanas, dirigidas por prelados imbuidos de los principios revolucionarios del Concilio, me parece que sería necesario comenzar, en forma muy modesta, según las necesidades que se presenten, y ofrecer esta institución como un servicio para ayudar a los sacerdotes en su ministerio y a las religiosas, para los casos difíciles de resolver o para autorizaciones que reclaman un poder episcopal de suplencia.

Roma no sólo tiene imperfecciones, sino que juzga según principios falsos, ¡como en el caso de los matrimonios mixtos, nulidades de matrimonio!...

[pág. 35]

Yo aconsejaría, por el momento, una primera Comisión especialmente canónica formada por un presidente, de ser posible Obispo, por dos consejeros y un secretario, a la que podría darse el nombre de un santo canonista: Comisión San Pío V, o San Belarmino, o San Carlos Borromeo, y a la cual serían enviadas las consultas, los pedidos.

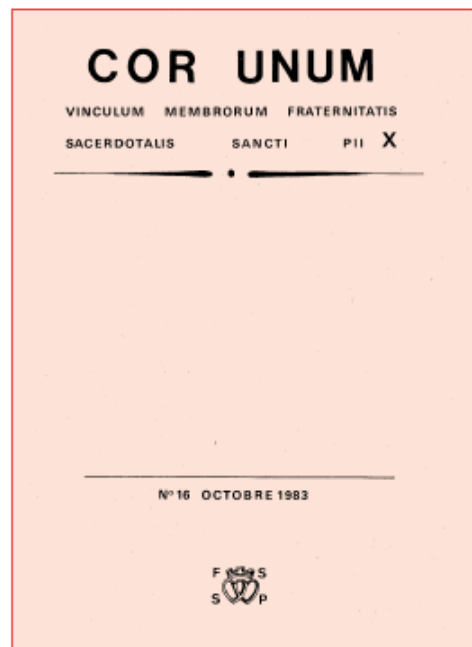
El secretario recibe, expone los casos y somete a juicio o al menos al estudio de 3 jueces, que se reúnen cada 3 meses o más, según el pedido del presidente, y estudian y responden a los casos.

Esta Comisión será nombrada por el Consejo General, aunque puede convocar a un dominico experto o a un experto conocido, sea de manera permanente como consejero, sea en forma ocasional.

Este sería un primer paso y la experiencia mostrará lo que sea oportuno hacer en el futuro.

La Comisión rendirá cuenta de sus trabajos al Consejo General, una o dos veces por año.

Esta Comisión debería anunciarse por medio de una carta comunicada a todos los sacerdotes de la Tradición que permanecieron católicos, y a todas las



*Tapa de un número de «Cor Unum»*

sociedades de la Tradición, hombres y mujeres.

No hay inconveniente en que los fieles conozcan la existencia de esta Comisión.

Mientras las autoridades romanas actuales estén imbuidas de ecumenismo y modernismo y que el conjunto de sus decisiones y el nuevo derecho canónico, estén influenciados por estos falsos principios, será preciso instituir autoridades de suplencia, guardando fielmente los principios católicos de la Tradición católica y del derecho canónico. Es el único medio de permanecer fiel a Nuestro Señor Jesucristo, a los Apóstoles y al depósito de la fe transmitida a sus sucesores que permanecieron fieles hasta el Vaticano II.

Algunos ejemplos de los casos que hay que someter:

- matrimonios mixtos - dispensas
- nulidades de matrimonio
- levantamiento de excomuniones en el foro externo

\* para todos los que participan en el aborto, sea físicamente, sea legalmente

\* por otros motivos

[pág. 36]

- dispensas de los votos de religión
- autorización para exorcismos
- consultas

Es importante la elección del secretario permanente, residente en la Casa Generalicia, aunque no tenga poder de decisión.

Esperando haberle sido útil con estas respuestas, quedo a su disposición.

En Jesús y María.

Marcel Lefebvre

[pág. 37]

## LEGITIMIDAD Y ESTATUTO DE NUESTROS TRIBUNALES MATRIMONIALES

*Encontrarán aquí el texto de la intervención de Monseñor Tissier de Mallerais, presidente de la Comisión canónica, con motivo de la sesión de procedimiento canónico, llevado a cabo el 24 de agosto de 1998 en Ecône, revisado y corregido por él mismo.*

*Esta exposición podrá ayudar a los padres a comprender mejor lo bien fundado que están los tribunales matrimoniales, que son una de las "autoridades de suplencia" concebidas por Monseñor Lefebvre.*

### Status questionis [sic]

Las declaraciones de nulidad de los tribunales eclesiásticos "Novus Ordo" son, frecuentemente, dudosas. ¿Tenemos el derecho de suplir en estos casos, por medio de tribunales que funcionen en el seno de la Fraternidad San Pío X?

Monseñor Lefebvre (cfr. documento precedente - ordenanzas, ed. 1997, págs. 7-8) ha previsto la creación de la *Comisión canónica*, para resolver en particular los casos matrimoniales después de un primer juicio hecho por el Superior de Distrito. La autoridad de nuestro Fundador es suficiente para que nosotros aceptemos estas instancias, de la misma manera que aceptamos las consagraciones episcopales de 1988. Pero esto no nos dispensa de intentar justificar doctrinalmente la existencia de nuestros tribunales matrimoniales.

Vamos a ver que la razón central es, al igual que para las consagraciones, la situación de necesidad de los fieles de la tradición.

*Mons. Lefebvre con su primer sucesor,  
el Padre Franz Schmidberger*



## I. La nueva legislación matrimonial

### 1. Nueva definición del matrimonio

a) Objeto del consentimiento matrimonial: Ya no es más estrictamente definido como "jus in corpus, perpetuum et exclusivum in ordine ad actus per se aptos ad proles generationem" (can. 1081 § 2), sino vagamente descripto como "mutua traditio et acceptatio viri et mulieris ad constituendum matrimonium" (cfr. n. can. 1057 § 2). El objeto del consentimiento se encuentra así indebidamente extendido a los elementos secundarios, aunque integrantes, del matrimonio, a saber el "totius vitæ consortium" (n. can. 1055):

b) Inversión de los dos fines del matrimonio: Código de 1917: "finis primarius procreatio et educatio prolis; secundarius, mutuuum adiutorium et

[pág. 38] remedium concupiscentiæ" (can. 1013 § 1). Nuevo código: "...ad bonum conjugum atque proles generationem et educationem" (n. can. 1055 § 1).

En consecuencia, la comunidad de vida entra, según la nueva legislación, como parte, y parte principal, del objeto del consentimiento matrimonial, y con ella la relación interpersonal entre los esposos, es decir su cohabitación, buen entendimiento, su desarrollo mutuo.

Ahora bien, esto está, según la concepción tradicional, fuera del objeto del pacto matrimonial, como lo reafirma Pío XII contra los innovadores en 1944, haciendo incluir en las Acta Apostolicæ Sedis una sentencia de la Sagrada Rota Romana [AAS 36 (1944), 172-200], que recuerda la jerarquía de los dos fines del matrimonio y recuerda que "la cohabitación del lecho, de habitación y de mesa, no pertenecen a la substancia del matrimonio", incluso si ella forma parte de la integridad de la vida conyugal (cfr. "Les Enseignements Pontificaux, Le mariage", Solesmes, Desclée, 1960, apéndice nº 24-29).

### 2. Nuevos defectos de consentimiento hacen nulo al matrimonio:

Está claro que si el "bonum conjugum" y el "totius vitæ consortium" está dentro del objeto del pacto matrimonial, los defectos que, ab initio, hacen imposible a la comunidad de vida entre esposos - y ya no solamente el dar el jus ad corpus - hacen nulo el pacto matrimonial. De ahí, la introducción en la nueva legislación de nuevas inhabilidades para contraer matrimonio.

Por supuesto, la Iglesia puede añadir siempre, por disposiciones positivas, nuevos impedimentos al matrimonio, pero son: 1) disposiciones positivas y no un cambio de la naturaleza de las cosas, y en consecuencia, de la substancia del matrimonio; 2) disposiciones que determinen de manera muy precisa las inhabilidades, de suerte que sea fácil emitir el juicio sobre la presencia de tales impedimentos, sin temor de abusar. Pues bien, aquí no es ese el caso; precisamente, hay un cambio de la substancia del matrimonio y la puerta abierta a todos los abusos, como se verá.

\* n. can. 1095 § 2: "Sunt incapaces matrimonii contrahendi: (...) 2º qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa jura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda".

Tradicionalmente, sólo hacen nulo el matrimonio, desde el punto de vista de la inteligencia:

- *La ignorancia* de que el matrimonio es "una sociedad permanente entre varón y mujer para engendrar hijos" (can. 1082 § 1); y esta ignorancia no se presume después de la pubertad.

- *El error* sobre "la unidad o indisolubilidad o dignidad sacramental del matrimonio", si ella determina la voluntad (n. can. 1099, que codifica una jurisprudencia tradicional).

Eso es todo y queda claro, mientras que el "defectus discretionis iudicii", es decir, la inmadurez del juicio, recae necesariamente sobre el desarrollo personal, o interpersonal de las obligaciones esenciales del matrimonio, lo cual está fuera del objeto tradicional del pacto matrimonial. Sin embargo, la inmadurez creciente de los jóvenes hacen, a menudo, poco viables los matrimonios e imprudente su conclusión, pero establecer una inhabilidad por inmadurez es invocar una concepción personalista, subjetiva, del pacto matrimonial y abrir la puerta a los abusos. Sólo un impedimento de edad más severo sería un remedio objetivo...

\* n. can. 1095 § 3: "sunt incapaces (...) 3º qui ob causas naturæ psychicæ obligationes matrimonii essentialia assumere non valent".

Tradicionalmente, la Iglesia no reconoce más que la incapacidad física: impotentia (can. 1068 § 1), que hace imposible el dar el "jus in corpus in ordine ad actus per se aptos..." (can. 1081 § 2). La amentia vel dementia es la única incapacidad mental, que hace al sujeto radicalmente inhábil para contraer matrimonio (cfr. can. 1081 § 1: "inter personas jure habiles").

Cierto es que son frecuentes ahora los casos de desequilibrio, debidos a la destrucción de la familia, que vuelven aleatoria la permanencia de la unión, pero ¿quién determinará qué grado de desequilibrio la hace radicalmente imposible? El mismo Juan Pablo II tuvo que recordar a los canonistas que tales desórdenes psíquicos deben ser "a serious form of anomaly which (...) must substantially undermine the capacity of understanding and/or willing of the contracting party" (dirigida a la Rota Romana, 5 de febrero de 1987, AAS 79 (1987), 1457).

Queda por decir que el canon 1095 § 3, en su formulación, deja las puertas abiertas a los abusos.

\* n. can. 1098: "Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrat, circa aliquam alterius partis qualitatem, quæ suapte natura consortium vitæ conjugalitatis graviter perturbare potest, invalide contrahit".

Hasta el nuevo código, el dolo no fue jamás admitido como causa de nulidad del matrimonio; es para proteger el bien de la permanencia del lazo conyugal.

[pág. 40]

Pero los autores admiten que la Iglesia podría introducirlo (por una disposición del derecho positivo). Esto sería por lo menos ilegítimo, cuando el error doloso pone en juego el fin primario del matrimonio, por ej. dolo sobre la esterilidad de uno de los cónyuges; y es esto lo que hace el nuevo código: "sterilitas, non dirimit, sed dolus circa sterilitatem" (cf. n. can. 1084 § 3). Pero el n. can. 1098 es mucho más amplio: el dolo que esconde la embriaguez, la adicción a la droga, o incluso el carácter irascible, ¡sería causa de nulidad! Se puede ver aquí la inspiración personalista conciliar de este nuevo canon. Y no nos incumbe el reformularlo en un sentido católico.

### 3. Consecuencias prácticas

a) el 80% de las nulidades declaradas por los tribunales novus ordo ¡descansan en el n. canon 1095! Luego, son *juicios nulos*, pues descansan en una regla incapaz de regular. Es tan fácil obtener tales juicios, que hay comentaristas que hablan de "divorcio católico".

b) Y en los casos en que hay un motivo serio de nulidad pero difícil de probar, el tribunal elige el n. can. 1095 como solución fácil.

Se puede objetar entonces: sí, pero justamente en estos casos el matrimonio es realmente nulo, entonces ¿por qué no aprovechar la sentencia de nulidad incluso si no es correcta? Hay que contestar: para comprobar el libre estado de una persona (para que pueda volver a casarse) es necesario un juicio válido, ¡no la apreciación privada más un juicio inválido!

## II - Situación de los fieles

1. *Ellos no tienen derecho a ir a los tribunales novus ordo*, ya que es correr un gran riesgo de recibir una declaración de nulidad nula y de volver a casarse fácilmente y de vivir así en pecado, ¡en concubinato canónico!

2. *Ellos no pueden*, para volver a casarse, juzgar por sí mismos sobre la nulidad de su matrimonio, o *contentarse con el juicio privado de un sacerdote amigo*: esto sería la puerta abierta al subjetivismo y al desorden, exponiendo el lazo matrimonial al desprecio y a aumentar el mal.

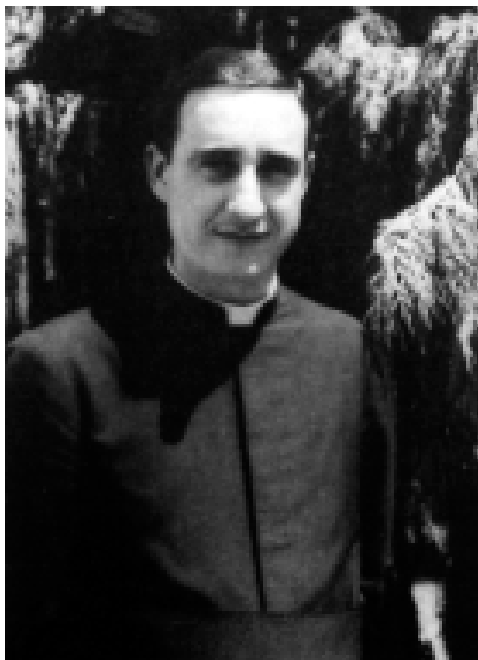
[pág. 41]

3. *Tienen el derecho en justicia de estar seguros de la validez* del sacramento recibido una segunda vez y, por lo tanto, de la validez de la sentencia de nulidad, y a estar protegidos contra los errores personalistas que invalidan estas sentencias. ¿Quién, pues, les hará justicia?

4. *Los sacerdotes y los obispos fieles tienen el deber de defender y proteger el lazo matrimonial*, puesto en peligro por la nueva legislación. ¿Cómo cumplir con este deber?

En resumen: los fieles, al no encontrar a quién recurrir, están en un estado de necesidad, y por otra parte, los sacerdotes y obispos fieles tienen el deber de socorrerlos.





*Mons. A. de Galarreta, actual obispo encargado de los religiosos después de Mons. Fellay. Es él quién dispensa de los votos de religión*

En esta situación, los obispos fieles (Mons. Rangel en Campos) y nuestra Comisión canónica, fundados en los principios generales del derecho que regulan la vida de la Iglesia, tienen los poderes de suplencia para juzgar los casos matrimoniales.

### III - Base doctrinal de nuestros poderes de suplencia

1. Can. 20 (n. can. 19): Si falta una determinación del derecho, hay que resolver el caso tomando la norma “a legibus latis similibus; generalibus iuris principiis cum æquitate canonica servatis; jurisprudentia et praxi Curiae Romanæ; communi constantique doctorum sententia” (Wernz-Vidal: “jus ergo suppletorium est jus applicandum in particularibus casibus, cum circa illud non habeatur in codice prescriptum quod peculiari illi casuit sit applicandum” nº 180).

2. Aplicación - intervienen tres cosas:

a) Lugares paralelos, es decir, práctica de la analogía legalis (Wernz-Vidal, nº 181): “per quam iuris dispositio pro aliis casibus applicatur in casu simili de quo lex non disponit”.

Aquí, el lugar paralelo es el caso del recurso imposible al obispo para dispensar de un impedimento dirimente de derecho eclesiástico: ante el “peligro de muerte” o “quando omnia sunt parata ad nuptias”, el párroco o el confesor pueden dispensar (can. 1044-1045). Lo que significa que la Iglesia les da, por suplencia, jurisdicción ad casum.

b) Estilo (jurisprudencia) de la Curia romana: Una respuesta de la Comisión de interpretación del código del 29 de junio de 1942 (AAS, 34, 241) permite extender la disposición del canon 1045 al caso de urgente necesidad en el que haya “periculum in mora” (cfr. can. 81).

c) Epiqueia y opinión de los doctores a propósito de los cánones 1043 y siguientes, pero vale también para otros casos:

Capello, Tractatus, De Sacramentis, III, nº 199: “Si finis legis cesset contrarie pro communitate, i.e.

si damnum commune inde sequatur, lex non urget, quia merito censetur suspendi ex benigna mentis legislatoris interpretatione”. Ahora bien, es el caso de la obligación de recurrir a tribunales modernistas. Pero si esta obligación cesa, ¿no cesa la obligación de recurrir a algún tribunal!

3. *De la conjunción de estos elementos, inferimos que nuestra comisión canónica, en el caso actual de recurso imposible a los tribunales oficiales, tiene el poder de juzgar los casos matrimoniales* (se puede decir que la Santa Sede, si no fuese tan modernista como los tribunales, nos daría ese poder por equidad canónica).

Es incluso más grave dispensar de un impedimento dirimente (lo que hace cambiar la condición de la persona, la cual de inhábil, llega a ser hábil para contraer), que declarar nulo un matrimonio (cosa que *no cambia el estado* de la persona, sino comprueba un estado ya existente ab initio); es un poder de jurisdicción declarativo solamente. Si entonces la suplencia nos da poder de dispensar, ella nos da a fortiori poder de juzgar.

4. *La institución de los tribunales matrimoniales en el orbe de la tradición, está especialmente justificada por el hecho de que:*

a) su autoridad será más fácilmente aceptada que la de una opinión privada;

b) de esa manera no será necesario dirimir las opiniones privadas dudosas o divergentes;

c) es necesario tener varios jueces y varias instancias para proceder prudentemente según el espíritu y la letra del derecho;

d) en la situación de necesidad actual, el sacerdote secular recibe la suplencia para lo que un sacerdote puede hacer normalmente por sí mismo y no para lo que no puede hacer normalmente. Así, pues, juzgar las causas matrimoniales no es normalmente asunto de un sacerdote solo, sino del obispo o de las autoridades que él delegue.

En todo esto, vale la regla “tanto cuanto, no más que”. La Iglesia suple en favor de los fieles la jurisdicción que falta a las instancias supletorias, tanto cuanto sea necesario y no más que lo necesario.

[pág. 43]

### IV - Ejercicio del derecho de juzgar las causas matrimoniales (por nuestra Comisión canónica y los sacerdotes designados por ella)

Nuestra jurisdicción, en estos casos, como se ha dicho, es una jurisdicción supletoria. He aquí sus propiedades:

1. *No es habitual*, sino que se ejerce ad casum, per modum actus. En consecuencia, nuestros tribunales no se reúnen habitualmente, sus miembros no son nombrados ad universas causas, sino al contrario, cada vez ad hoc, por la Comisión canónica; incluso si por razones de comodidad sean siempre los mismos jueces, los mismos defensores del vínculo que intervienen, puesto que se necesitan personas competentes.

2. *No es territorial, sino personal.*

3. *Depende de la necesidad de los fieles*, es decir que vale tanto cuanto dure el estado de necesidad común, e incluso si, por un imposible, se pudiese encontrar uno u otro tribunal oficial que juzgase los casos matrimoniales según las normas tradicionales.

4. *Es una verdadera jurisdicción* y no una exención del derecho y de la obligación que los fieles tienen de recibir una sentencia. Así, pues, tenemos poder y deber de dar verdaderas sentencias, teniendo *potestatem ligandi vel solvendi*. Ellas tienen, pues, valor obligatorio. La razón próxima es que nosotros debemos poder decir a los fieles lo que deben seguir, *quod debent "servare"*.

Nuestras sentencias no son simples opiniones privadas, ya que esto no es suficiente en el caso que el bien público esté en juego; pues el bien público está en juego en cada causa en la que el lazo matrimonial está en discusión. Para zanjar esta duda, hay que tener un poder en el foro externo público.

5. *Esta jurisdicción no usurpa ningún poder de derecho divino del Papa.*

Es cierto que nuestras sentencias en tercera instancia reemplazan a las sentencias de la Rota Romana, que juzga en nombre del Papa como tribunal en tercera instancia. Pero no es una usurpación de poder de derecho divino del Papa, ya que la reserva de esta tercera instancia al Papa ¡es solamente de derecho eclesiástico!

6. Por fin, *nuestras sentencias*, como todos nuestros actos de jurisdicción de suplencia, y como las mismas consagraciones episcopales de 1988, 1991, etc., *deberán ser confirmadas ulteriormente por la Santa Sede.*

[pág. 44]

## **REGLAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS DECLARACIONES DE NULIDAD DEL MATRIMONIO**

*La caridad pastoral apunta a la santificación de las almas: prima lex salus animarum; mas la prudencia pastoral, evita imponer a las almas cargas insoportables (cf. Mt. 23, 4).*

*Por consiguiente, el pastor busca poner a las almas en la verdad, con relación a la ley de Dios y la validez del matrimonio, pero él prefiere, a veces, dejar a las almas en buena fe, si yerran de buena fe sobre su situación matrimonial, cuando es de temer que no aceptarían regularizarla y vivirían entonces en la mala fe.*

*Por otra parte, las sentencias de nulidad del matrimonio dadas por tribunales oficiales (diríamos, sentencias "novus ordo") no pueden ser consideradas como nulas ipso facto, ni como válidas sin examen. De aquí emanan las reglas siguientes:*

1. Una sentencia novus ordo no puede ser ni admitida ni rechazada a priori. Su validez depende de los criterios utilizados. La sentencia debe, pues, ser examinada *in jure*.

2. El sacerdote no aconseja nunca a nadie ir a un tribunal n.o., por temor a que la sentencia sea nula, por estar fundada *in jure* sobre criterios erróneos o dudosos del nuevo código.

3. Si la persona no se volvió a casar, pero duda o denuncia la validez de un primer matrimonio, o anuncia que la causa de nulidad fue introducida ante un tribunal n.o., o que éste último ha dado ya una sentencia ejecutoria de nulidad, el sacerdote le advierte que una sentencia n.o. no es una prueba suficiente de la nulidad del matrimonio y que no se puede volver a casar sin haber sometido su causa al examen de nuestra Comisión canónica.

4. Si la persona, después de una sentencia de nulidad n.o., ya se volvió a casar, el sacerdote la deja en la buena fe, si ya está en buena fe. En este sentido:

1) no habla jamás públicamente de las sentencias n.o.;

2) no interroga jamás a los fieles a este respecto;

3) interrogado por una persona que tiene solamente una duda negativa, él la tranquiliza.

5. Si la persona, vuelta a casar después de una sentencia de nulidad n.o., tiene una duda positiva, el sacerdote debe ayudarla a resolver su duda. Para ello:

1) advertirá a la persona de la posibilidad de nulidad de la sentencia n.o.;

[pág. 45]

2) explicará que, por esta razón y según nuestra práctica, la causa debe ser sometida a la Comisión canónica.

6. A fin de presentar toda causa al examen de la oficina canónica, el sacerdote

1) se hace explicar someramente el caso;

2) se hace comunicar, si es el caso, la sentencia n.o. o al menos un documento del tribunal indicando el caput nullitatis;

3) comunica la exposición del caso (y eventualmente la sentencia n.o.) a la oficina canónica, que envía al sacerdote el cuestionario destinado a establecer el libelo introductorio de la causa;

4) pero no toma ningún partido, ni en un sentido ni en el otro.

7. La causa no puede ser introducida si la parte interesada no acepta estar moralmente obligada por la decisión. Es por eso que el sacerdote le hace jurar y firmar la siguiente promesa:



El abajo firmante... en el momento de someter la causa de mi matrimonio con... a la Comisión canónica de la FSSPX, promete:

1) (si es el caso) no atentar ningún matrimonio ni incluso ninguna unión civil antes de la sentencia definitiva;

2) conformarme con la sentencia del tribunal y por consiguiente, si es negativa, de no volver a casarme, o (si es el caso) no considerar ya a mi segundo cónyuge como cónyuge;

3) no acercarme a un tribunal eclesiástico oficial para hacer examinar o juzgar mi causa.

Todo esto, lo prometo y lo juro sobre los Santos Evangelios que toco con mi mano.

Dado el... en...  
firma

[tachar lo que no corresponda]

8. Mientras el tribunal designado por la oficina canónica no haya dado sentencia ejecutoria de "*constat de nullitate matrimonii*", el matrimonio contraído después de una sentencia de nulidad n.o. (si es el caso) se presume válido y por consiguiente, los cónyuges en la segunda unión pueden

[pág. 46] solicitar y dar el débito conyugal y no se les puede rehusar los sacramentos.

9. Pero si un procedimiento en nulidad se inicia con nosotros y, advertida de no volver a casarse antes de una sentencia nuestra que se lo permita, una parte se vuelve a casar o contrae una simple unión civil, le son rehusados los sacramentos y el procedimiento puede ser suspendido a juicio del superior que ha constituido el tribunal.



## SEGUNDA PARTE: COMENTARIO DE SODALITUM

Por el Padre Francesco Ricossa

Con los documentos arriba publicados, la Fraternidad San Pío X intenta ofrecer una solución a un problema real; pero la solución propuesta es peor que la dificultad que se quería remediar.

### Un problema real: ejercer el ministerio sin jurisdicción.

#### Breve historia de las dificultades y soluciones propuestas

El drama que vivimos comenzó en el Concilio Vaticano II, cuando la doctrina de la Iglesia Católica fue abandonada -en varios puntos- a favor de una nueva doctrina. Siguió reformas disciplinarias que pusieron en aplicación los principios del Vaticano II; recordamos en particular la reforma litúrgica con su punto culminante, la promulgación de un nuevo misal en 1969 y la reforma canónica, realizada con el nuevo código de 1983.

#### La cuestión de la Autoridad

Muy rápidamente, los opositores al Vaticano II se hallaron enfrentados a problemas teóricos y prácticos de importancia. Por un lado, el rechazo del Concilio y de sus reformas planteó el problema de la

legitimidad de la Autoridad que quiso ese Concilio y esas reformas. Es el problema de la Autoridad o -como se dice- del Papa. A él está conectado, por vía de consecuencia, el problema -más práctico- de la obediencia que todo católico debe a la jerarquía y, particularmente, al Papa (3). Nuestra posición es la siguiente: Pablo VI y Juan Pablo II no gozan de la Autoridad pontificia divinamente asistida (no son formalmente papas), entonces -en lo que concierne a la obediencia- el problema no se plantea, ya que solo se está obligado a obedecer a la autoridad legítima. Por el contrario, Mons. Lefebvre y su Fraternidad reconocen la legitimidad de aquellos que promulgaron el Concilio y las reformas ulteriores ("mal Papa, pero Papa"), por lo que rápidamente se vieron obligados a teorizar la licitud de la desobediencia (habitual) al Papa, tanto en lo que mira a la recepción de su enseñanza como en lo que hace a las cuestiones disciplinarias. La regla práctica adoptada fue entonces: "*Aceptamos las novedades íntimamente conformes a la Tradición y a la Fe. No nos sentimos ligados por la obediencia, respecto de las novedades contrarias a la Tradición, que amenazan nuestra Fe*" (4). Recuerdo este principio porque será aplicado por los sucesores de Mons. Lefebvre en el caso presente, especialmente en lo que mira a la recepción del nuevo código de derecho canónico.

(Continúa en pág. 22)

3) Sobre la cuestión de la autoridad ver, por ej.: B. LUCIEN, *La situación actual de la autoridad en la Iglesia. La Tesis de Cassiciacum*, Documents de catholicité, 1985. El autor señala, contra el voluntarismo, que la cuestión de la obediencia es consecuencia de la cuestión de la autoridad, pero que no constituye su esencia (pág. 37).

4) MONS. LEFEBVRE, *Carta a los amigos y benefactores*, n° 9, octubre de 1975.



### III. FORMULARIOS DE DISPENSA (Padre Pivert)

**FRATERNITE SAINT PIE X ~ DISTRICT DE FRANCE**  
**BUREAU DES AFFAIRES CANONIQUES**

**Abbé François PIVERT**  
**Le Moulin du Pin**  
**53290 Beaumont Pied de Boeuf**  
**Téléphone 43.98.74.63**  
**Télécopie 43.98.70.38**

**Nos réf. : Mariage**  
**Abbé**  
**Prieuré de**

#### AUTORISATION DE MARIAGE

Considérant les lois morales relatives au mariage chrétien, complétées par les décisions de la Fraternité St Pie X, à savoir qu'il est juste de traiter comme un mariage mixte le mariage d'un(e) catholique avec un(e) catholique baptisé(e), mais non croyant(e) ni pratiquant(e), ou avec un(e) catholique adhérent(e) au modernisme,

Considérant les garanties (cautiones) fournies par les futurs,

Considérant le grave motif invoqué à savoir .....

NOUS Abbé François Pivert soussigné,  
 au nom de M. le supérieur de District et par délégation,

AUTORISONS..... et .....  
 à contracter mariage

Scellé

A ..... le .....  
 Signature du prêtre

**FRATERNITE SAINT PIE X ~ DISTRICT DE FRANCE**  
**BUREAU DES AFFAIRES CANONIQUES**

**Abbé François PIVERT**  
**Le Moulin du Pin**  
**53290 Beaumont Pied de Bocuf**  
 Téléphone 43.98.74.63  
 Télécopie 43.98.70.38.

**Nos réf. :** Mariage  
 Abbé  
 Prieuré de

### DISPENSE DE RELIGION MIXTE

Considérant l'EMPECHEMENT de religion mixte,

Considérant qu'il n'est possible de recourir ni à l'Ordinaire du lieu ni à Rome,

Considérant que le mariage ne peut être différé sans un grave dommage pour les contractants,

Considérant les règles canoniques indiquées par Mgr Lefebvre en temps de crise,

Considérant les garanties (cautiones) fournies par les futurs,

Considérant le grave motif invoqué à savoir .....

NOUS Abbé François Pivert soussigné,  
 au nom de M. le supérieur de District et par délégation,

DISPENSONS ..... et .....  
 de l'empêchement Indiqué, afin qu'ils puissent licitement contracter mariage selon les lois de l'Eglise.

Ad cautelam nous les dispensons également de l'empêchement de disparité de culte.

Sceau

A ..... le .....  
 Signature du prêtre

Form. 102-2F

**FRATERNITE SAINT PIE X ~ DISTRICT DE FRANCE**  
**BUREAU DES AFFAIRES CANONIQUES**

**Abbé François PIVERT**  
**Cours St Thomas d'Aquin**  
**86700 Romagne**  
 Téléphone 49.87.74.28  
 Télécopie 49.87.64.21

Nos réf. : Mariage  
 Abbé  
 Prieuré de

**EMPECHEMENT DE CRIME**  
**AUTORISATION DE MARIAGE**

Considérant l'ancien EMPECHEMENT DE CRIME (adultère avec promesse de mariage ou adultère avec mariage attenté),

Considérant les prescriptions propres de la Fraternité Saint Pie X exigeant l'autorisation du Supérieur de District pour contrôle,

Considérant que les futurs époux ont les intentions requises quant aux qualités essentielles du mariage projeté,

Considérant qu'ils ont réparé ou qu'ils s'engagent sincèrement à réparer, autant que nécessaire, le scandale causé,

Considérant qu'ils offrent les garanties nécessaires quant à l'éducation des enfants éventuellement à naître de leur union,

NOUS Abbé François Pivert soussigné,  
 au nom de M. le supérieur de District et par délégation,

AUTORISONS ..... et .....  
 à contracter mariage.

A ..... le .....  
 Signature du prêtre



Form. 102-3F

**FRATERNITE SAINT PIE X ~ DISTRICT DE FRANCE  
BUREAU DES AFFAIRES CANONIQUES**

**Abbé François PIVERT**  
**Le Moulin du Pin**  
**53290 Beaumont Pied de Boeuf**  
 Téléphone 43.98.74.63  
 Télécopie 43.98.70.38

Nos réf. : Mariage  
 Abbé  
 Prieuré de

### AUTORISATION DE MARIAGE

Considérant l'EMPECHEMENT ou la DIFFICULTE suivante : .....

.....

Considérant les prescriptions propres de la Fraternité Saint Pie X exigeant  
 l'autorisation du Supérieur de District pour contrôle,

Considérant les graves motifs invoqués à savoir : .....

.....

NOUS Abbé François Pivert soussigné,  
 au nom de M. le supérieur de District et par délégation,

AUTORISONS ..... et .....  
 à contracter mariage.

A ..... le .....  
 Signature du prêtre

## La cuestión de la jurisdicción

El otro problema -el que nos interesa directamente- es el de la jurisdicción necesaria en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Por derecho e institución divina, existen en la Iglesia dos poderes: orden y jurisdicción. *“El poder eclesiástico se divide en poder de orden y poder de jurisdicción. El poder de orden está inmediatamente destinado a la santificación de las almas y al ofrecimiento del Sacrificio de la Misa y a la administración de los Sacramentos. El poder de jurisdicción, a su vez, está inmediatamente destinado al gobierno de los fieles en orden a la vida eterna. Se ejerce por la enseñanza autorizada de las verdades reveladas (sagrado magisterio); por la promulgación de leyes (poder legislativo); por la auténtica decisión de las causas surgidas entre los súbditos (poder judicial); por la aplicación de sanciones penales contra los transgresores de las leyes (poder coercitivo)”* (5). Los dos poderes (y sus jerarquías respectivas) *“son realmente distintos”*, pero están *“estrechamente ligados por una mutua relación”*, *“se diferencian por su origen; en efecto, el orden se confiere con un sacramento apropiado, mientras que la jurisdicción se otorga por la misión canónica; y [se diferencian] por su propiedad, pues el uso válido del orden, en la mayoría de los casos, no puede quitarse, mientras que la jurisdicción puede ser revocada. Sin embargo se relacionan mutuamente, pues la jurisdicción supone el orden y viceversa, el ejercicio del orden está reglado por la jurisdicción”* (6).

La publicación del nuevo misal (1969) levantó para los opositores al Vaticano II, la primera dificultad práctica: o continuar y organizar por todas partes -con los “viejos” libros litúrgicos- el ejercicio del poder de orden (Misa, Sacramentos...) incluso sin gozar del poder de jurisdicción; o abstenerse de actos de ministerio en caso de privación de la misión canónica, que viene de la “jerarquía”. En la práctica (y no sin numerosos tironeos de la regla) el *abbé* de Nantes, fue el único en elegir la segunda vía, mientras que todos los demás siguieron la primera.

## La posición de la Fraternidad de 1975-76 a 1980. Crítica

Para Ecône, si el problema no se planteaba entre 1970 y 1974, período durante el cual la Fraternidad San Pío X fue canónicamente aprobada, con la supresión de la Fraternidad el 6 de mayo de 1975, el retiro de las cartas dimisorias requeridas para ordenar a los seminaristas (27 de octubre de 1975) y la suspensión de la autorización a Mons. Lefebvre para conferir las órdenes sagradas (12 de junio de 1976), se planteó entonces de la manera más dramática: a partir de 1976, los sacerdotes ordenados en la Fraternidad estarían pues suspendidos *a divinis* (prohibición de celebrar la Misa y de administrar los sacramentos), exactamente como lo había sido su fundador (22 de julio de 1976). Una vez tomada la decisión de administrar los sacramentos sin la jurisdicción requerida -y eso fueron las ordenaciones del 29 de junio de 1976- se presentó una nueva dificultad: en esta situación, si algunos sacramentos son de todos modos administrados válidamente en virtud del poder de orden, que es indeleble, otros sacramentos (Penitencia y Matrimonio) requieren justamente -bajo pena de ser administrados inválidamente- la jurisdicción que falta. Si para el sacramento del matrimonio la solución es relativamente fácil (el canon 1098 prevé, en ciertos casos, la dispensa de la forma canónica), el sacramento de la penitencia presentaba y presenta las mayores dificultades: en efecto, la necesidad de la jurisdicción del confesor sobre el penitente es requerida por la naturaleza misma del sacramento tal como fue instituido por Cristo, y entonces no depende solamente del derecho eclesiástico (Concilio de Trento, DS 1686; Pío VI, *Auctorem fidei*, DS 2637; Santo Tomás, Supl. q. 8, a. 4). Es verdad que el derecho prevé casos en que la Iglesia suple la jurisdicción (*“Ecclesia supplet”*) faltante en el sacerdote: en caso de peligro de muerte, por ejemplo, todo sacerdote puede absolver válidamente (can. 882); de la misma manera que puede hacerlo, según la prescripción del canon 209 (6), en caso de duda positiva y probable (de poseer o no la jurisdicción), o de error común (los penitentes piensan erróneamente

5) P. PARENTE - A. PIOLANTI, *Dizionario di teologia dommatica per i laici*, Studium, Roma, 1943, pág. 95, voz “jerarquía”.

6) *“In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno”* (can. 209). El nuevo código mantiene a la letra el canon 209: *“en caso de error común o de duda positiva o probable, tanto de derecho como de hecho, la Iglesia suple la jurisdicción así en el fuero externo como en el interno”* (can. 144 § 1); aplicando también el principio (§ 2) a la administración de los sacramentos de la confirmación (can. 883), de la penitencia (can. 966) y del matrimonio (can. 1111 § 1).

7) Para esta argumentación, cf. M. LEFEBVRE, *El golpe maestro de Satanás*, Il Falco, Milán, 1978, págs. 107-108 (se trata de un texto del 24 de febrero de 1977); y también: *El ministerio sacerdotal en periodos extraordinarios de grave crisis, por un grupo de sacerdotes de la diócesis de Campos*, en *Cor Unum*, n° 16, octubre de 1983, págs. 9-26.

que el sacerdote tiene jurisdicción) (7). Sin embargo, era evidente que los cánones invocados no son suficientes para justificar la práctica de confesar habitual y constantemente sin jurisdicción, por lo que Mons. Lefebvre extendía el caso de peligro de muerte física del penitente -previsto por el código- al de peligro de muerte espiritual en que se hallan todos los católicos por la situación actual de la Iglesia. ¿No era esto razonar “como si”, de hecho, no se reconociese más la legitimidad de la jerarquía y la validez de los nuevos sacramentos? Y, en efecto, Mons. Lefebvre duda -durante el verano del ‘76- respecto de la legitimidad de Pablo VI; pero después de haber sido recibido en audiencia (11 de septiembre) opta por la legitimidad, decisión hecha oficial con la famosa declaración del 8 de noviembre de 1976, titulada: “*Posición de Mons. Lefebvre sobre la nueva misa y el Papa*” (*Cor Unum*, n° 4, págs. 1-9), la cual también tomó forma en el clima que siguió a la audiencia concedida por Juan Pablo II a Mons. Lefebvre el 18 de noviembre de 1978. Esta posición (reconocimiento teórico de la legitimidad de Pablo VI y de Juan Pablo II, pero acción práctica como si este reconocimiento no existiera) se volvió uno de los puntos débiles de su movimiento. Veamos como, en la época, el cardenal Seper, delegado por Pablo VI y Juan Pablo II para el examen de la causa tradicionalista, expuso el problema: “*Y su ‘praxis’ -objetaba el cardenal Seper a Mons. Lefebvre en carta del 28 de enero de 1978- no corrige en absoluto las cosas. En efecto, usted ordena sacerdotes contra la voluntad formal del Papa y sin las ‘litteræ dimissoriae’ requeridas por el Derecho Canónico; usted envía los sacerdotes que ordena a prioratos en que ejercen su ministerio sin la autorización del Ordinario del lugar; usted pronuncia discursos aptos para difundir sus ideas en diócesis en que el obispo le niega el consentimiento; con sacerdotes que ha ordenado y que no dependen de hecho sino de usted; usted comienza, lo quiera o no, a formar un grupo capaz de convertirse en una comunidad eclesial disidente. Al respecto hay que notar la sorprendente*

*declaración que ha hecho (Conferencia de prensa del 15/9/1976, en ‘Itinéraires’, dic. 1976, págs. 126-127) sobre la administración del sacramento de la penitencia por los sacerdotes que usted ha ordenado ilícitamente y que no están provistos de la facultad para oír confesiones. Usted consideraría que dichos sacerdotes tendrían la jurisdicción prevista por el Derecho Canónico para el caso de necesidad: ‘Pienso -afirmaría- que nos hallamos en circunstancias no físicas, sino morales extraordinarias’. ¿No es esto razonar como si la jerarquía legítima hubiera dejado de existir en las regiones en que se encuentran esos sacerdotes?’* (8). La respuesta de Mons. Lefebvre, por completo pertinente sobre las cuestiones doctrinales, contrariamente no lo fue sobre las que lo habrían conducido -lógicamente- a negar de derecho (y no solamente de hecho) la legitimidad del “Papa” y los “obispos” (9). En su respuesta del 26 de febrero de 1978, Mons. Lefebvre contesta vagamente (10), la cuestión le fue nuevamente propuesta por el cardenal Seper, en términos casi idénticos, el 16 de marzo (11), luego -de modo más difuso- en el interrogatorio del 11-12 de enero de 1979 (12). Al final del interrogatorio, Seper volvió una vez más a la cuestión: “*Un obispo -así resumió la posición de Mons. Lefebvre- juzgando en conciencia que el Papa y el Episcopado no ejercen más en general su autoridad en orden a asegurar la transmisión fiel y exacta de la fe, ¿puede legítimamente, para mantener la fe católica, ordenar sacerdotes sin ser obispo diocesano, sin haber recibido cartas dimisorias, y contra la prohibición formal y expresa del Papa, atribuir a esos sacerdotes el cargo del ministerio eclesiástico en las diversas diócesis? (...) ¿Esta tesis es conforme a la doctrina tradicional de la Iglesia a la que usted entiende atenerse?’* La reacción de Mons. Lefebvre fue inmediata: “*¡Me está tendiendo una trampa!*”. La respuesta más meditada no fue mejor. Primero el pragmatismo: “*No. No he actuado partiendo de un principio como ese. Son los hechos, las circunstancias en que me hallado, las que me han*

8) Mons. Lefebvre y el Santo Oficio, *Itinéraires*, mayo de 1979, págs. 21-22.

9) Ver, por ejemplo, la pregunta más que pertinente del cardenal Seper (“¿un fiel puede poner en duda la conformidad con la doctrina de la fe, de un rito sacramental promulgado por el Pastor Supremo?”; ibidem, pág. 111); a la cual Mons. Lefebvre inicialmente no respondió. Ante la insistencia del cardenal (“¿Sostiene Ud. que un fiel católico puede pensar y afirmar que un rito sacramental, en particular el de la Misa, aprobado y promulgado por el Sumo Pontífice, pueda no estar conforme con la fe católica o ser ‘favens heresim’?”; ibidem, pág. 146), Mons. Lefebvre responde de manera evasiva: “ese rito en sí mismo no profesa la fe católica de manera tan clara como el antiguo *Ordo Missæ* y, en consecuencia, puede favorecer la herejía. Pero no sé a quién hay que atribuirlo, ni tampoco si el Papa es el responsable de eso” (pág. 146). Mons. Lefebvre, sabiendo que para la fe católica un Papa no puede promulgar un sacramento o un rito de la misa “nocivo”, y pensando justamente eso del nuevo misal, se ve obligado a decir -rozando el ridículo- ignorar si Pablo VI era responsable del nuevo misal; y eso, para no tener lógicamente que sostener que el nuevo misal es bueno o que Pablo VI no era Papa (*tertium non datur*)...

10) “En lo concerniente a la jurisdicción, apelamos a las circunstancias extraordinarias previstas por el Derecho y a la extrema necesidad en la que se hallan las almas de los fieles” (ibidem, pág. 121).

11) Ibidem, pág. 112. Para Seper, la praxis de Mons. Lefebvre “lleva a preguntarse si no se trata de un movimiento cismático”.

12) Ibidem, págs. 144-163.

obligado a tomar ciertas posiciones (...).” Luego un argumento que lo autocondena: “Creo que la historia puede proporcionar ejemplos de actos similares realizados, en ciertas circunstancias, no ‘contra’ sino ‘*præter voluntatem Papæ*’ ” [pero justamente Mons. Lefebvre actuaba “contra” y no “más allá” de la voluntad del “papa”]. Finalmente, la reedición lógica definitiva: “Con todo, esta pregunta es demasiado importante y demasiado grave para que pueda contestarla inmediatamente. Prefiero, pues, suspender mi respuesta” (13). Los coloquios con el “Santo Oficio” continuaron y no hubo ninguna respuesta ulterior...

Hasta entonces la posición de la Fraternidad San Pío X era contradictoria -a causa de la posición sobre la autoridad del Papa-, pero se limitaba a postular una “suplencia” de la Iglesia solo para la administración de los sacramentos. De hecho, nosotros también invocamos a este respecto una suplencia (no tanto de la Iglesia sino más bien de Cristo, como veremos enseguida), para el ejercicio lícito y válido del **poder de orden** (y exclusivamente del poder de orden). La posición correcta sobre el problema y la crítica a esta primera desviación de la Fraternidad, está perfectamente explicada por el Padre Belmont en el siguiente texto publicado en los *Cahiers de Cassiciacum*:

“Admitimos perfectamente que en la situación de anarquía (en sentido propio) (14) en que nos hallamos, hay una suplencia divina en favor de los fieles en lo relativo al poder de santificación de la Iglesia (15). Pero, por lo que parece, son necesarios tres factores para la existencia de una tal suplencia (fuera de los expresamente previstos por el Derecho):

- la necesidad general y no un caso particular;
- la imposibilidad del recurso a la Autoridad.

Es la Autoridad la que juzga sobre los actos sacramentales que debemos realizar; una deficiencia accidental de la Autoridad no puede dar lugar a la suplencia. Si la deficiencia es esencial y habitual, la existencia misma de la autoridad está en causa (16);

- un fundamento real en quien debe actuar en virtud de la suplencia. Un tal fundamento no puede ser sino el Carácter impreso por el Sacramento del Orden.

Es porque el sacerdote católico posee este Carácter sacerdotal, que Nuestro Señor Jesucristo



El Padre François Pivert, miembro e inspirador de la comisión canónica

y la Iglesia suplen para hacer actuar al Carácter, cuyo ejercicio normal está impedido para ruina de las almas.

Están pues excluidos los actos de pura jurisdicción (dispensar de un impedimento de matrimonio, conceder una indulgencia), que no hacen actuar al Carácter sacramental y los actos en que el sacerdote no es sino ministro extraordinario (confirmar, conferir las órdenes menores).

En el caso del Sacramento de la Penitencia, la suplencia no confiere jurisdicción, sino que Cristo y la Iglesia suplen el defecto de jurisdicción en cada absolución, ya que el sacerdote está, por su Carácter sacerdotal, metafísicamente ordenado a dar una tal absolución. La jurisdicción normalmente necesaria no confiere al sacerdote el poder de confesar, sino que le da un súbdito sobre el cual ejercer su poder” (17).

La posición sostenida por el Padre Belmont en el último número de los *Cahiers de Cassiciacum* (1981) es también la nuestra, y se distingue tanto de la que niega absolutamente la licitud del ministerio privado de jurisdicción (abbé de Nantes, ciertos sedevacantistas...), como de la que considera lícito el ministerio “contra” la misma voluntad del “Papa”, posición que -de hecho- fue la de la Fraternidad San Pío X de 1976 a 1980.

13) Ibidem, págs. 159-160.

14) Es decir, de privación del Jefe de la Iglesia.

15) Y entonces en lo que mira al poder de Orden, y no al de Jurisdicción en el foro externo, por los poderes legislativo y judicial.

16) ...[como sostenía el cardenal Seper! La praxis (en esta época) de Mons. Lefebvre y de todos los “tradicionalistas” suponía, para estar justificada, la privación de la Autoridad.

17) H. BELMONT, op. cit., pág. 9.



## Las “Ordenanzas” de 1980: primera usurpación de los poderes de jurisdicción reservados al Papa

No es por casualidad que escribo: hasta 1980, ya que ese año tuvo lugar un hecho que agrava considerablemente la posición de la Fraternidad San Pío X, contra el cual reaccionó precisamente el citado artículo del Padre Belmont. “En un acto fechado el 1º de mayo de 1980, Mons. Lefebvre concedió a sus sacerdotes un cierto número de poderes y facultades canónicas y litúrgicas. Así justificó esta delegación:

*‘En virtud de facultades concedidas a los Ordinarios por la Carta Apostólica Pastoral Munus del 30 de noviembre de 1963, facultades concedidas a todos los Obispos de Misión y luego extendidas a toda la Iglesia, delegamos los siguientes poderes...’*” (18).

Se trataba de la primera edición de las “Ordenanzas sobre los poderes y facultades de que gozan los miembros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X” (19).

Dejando de lado toda consideración sobre las cuestiones de la legitimidad de Pablo VI (promulgador de la Carta Apostólica *Pastoral Munus*) y de la existencia canónica de la Fraternidad San Pío X (págs. 2 y 3), el Padre Belmont señalaba primeramente dos cosas:

Mons. Tissier de Mallerais



1) En 1980 Mons. Lefebvre no era un Ordinario, y menos un Ordinario de lugar; luego, las “facultades” eventualmente concedidas por Pablo VI a los Ordinarios de lugar no le estaban destinadas. El asunto era evidente, pero ahora -en la nueva edición de las “Ordenanzas”, de 1997, que publicamos parcialmente- incluso Mons. Fellay lo admite cándidamente: “Mons. Lefebvre, como obispo y como Superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, aunque no era ya Ordinario de lugar como lo era en Dakar, estimó gozar de una suplencia que le permitía, en favor de los fieles, conceder a sus sacerdotes facultades análogas. Las promulgó por sus Ordenanzas para uso de la Fraternidad, el 1 de mayo de 1980, según la fórmula *facultatum decennialium* de 1960” (págs. 8-9). La Fraternidad cambia entonces sus propios argumentos: en 1980, Mons. Lefebvre, basándose en un acto de Pablo VI, pensó poder “delegar” facultades que le correspondían en cuanto Ordinario. En 1997, Mons. Fellay afirma que estos poderes no pertenecían a Mons. Lefebvre, que ya no era Ordinario, sino que los había recibido por “suplencia”.

2) De los 51 poderes “delegados” por Mons. Lefebvre, 36 no se encuentran en *Pastoral Munus*, 4 fueron extendidos en relación a la concesión de Pablo VI, y 3 no eran delegables (cfr. Belmont, pág. 4).

El Padre Belmont concluía que “sea lo que sea de la Autoridad de Pablo VI, esta delegación de poderes a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X es nula y sin valor propio. Sobre esto no hay ninguna duda posible. No se puede alegar el hecho de que Mons. Lefebvre utiliza los amplios poderes de que gozaba como Obispo misionero, ya que (...) Mons. Lefebvre no es más Ordinario de Lugares de Misión; y si lo fuese todavía, no podría delegar más que en los límites geográficos de su jurisdicción” (pág. 5). Un sacerdote de la Fraternidad que leyó, antes de la publicación, las observaciones del Padre Belmont, admitió que Mons. Lefebvre no podía delegar estos poderes en cuanto Ordinario (“en efecto, eso sería un poco grueso”, escribió), sino en base a la suplencia de la Iglesia (pág. 8). El Padre Belmont respondió con el texto que hemos citado, recordando que una suplencia de la “Iglesia” (para el caso, de Cristo), fuera de los casos previstos por el Derecho, no es concebible sino en favor del poder de Santificación, y no para ejercer el poder de gobierno sobre las almas.

18) Ibidem, pág. 1.

19) En 1980 todavía formábamos parte de la Fraternidad y recibimos, como todos los demás miembros de la sociedad, el pequeño volumen de las “Ordenanzas”...

En base a este principio, el Padre Belmont denunciaba en particular dos facultades concedidas por Mons. Lefebvre inválidamente a la Fraternidad y a sus sacerdotes: la facultad de Confirmar y la de dispensar de impedimentos matrimoniales. Estas facultades han sido mantenidas por las Ordenanzas de 1997 y, en lo que mira a las dispensas matrimoniales, se han convertido en el “fundamento” de un desarrollo ulterior de “poderes” de la Fraternidad: los de los Tribunales canónicos para las nulidades matrimoniales (cf. el documento de Mons. Tissier que publicamos en este número, tomado de *Cor Unum*, n° 61, III, 3, pág. 42) <sup>(20)</sup>. Volveremos a esta “facultad”; sin embargo señalamos que ya desde 1980, la Fraternidad San Pío X se arrogaba poderes puramente jurisdiccionales que son privilegio del Papa y de sus delegados...

Esta era la situación de la Fraternidad -en lo relativo a nuestro tema- de 1980 a 1988, año en el cual, Mons. Lefebvre -después del fracaso de las tratativas con el Vaticano- consagra cuatro obispos “auxiliares”, junto a Mons. de Castro Mayer.

### Las consagraciones de 1988, ¿Obispos sin jurisdicción?

Previstas por lo menos desde 1983, anunciadas en 1987, finalmente las consagraciones episcopales, primero fijadas en acuerdo con Ratzinger, tuvieron lugar en 1988 sin mandato romano (no obstante, durante la ceremonia se leyó un grotesco “mandato apostólico” escrito, no por el Papa sino por la Fraternidad, en el cual se pretendía haber recibido un mandato de la “Iglesia Romana” -puesta en oposición “a las autoridades de la Iglesia Romana”- para las consagraciones) <sup>(21)</sup>.

Por el Motu proprio *Ecclesia Dei adflicta*, Juan Pablo II declara a Mons. Lefebvre excomulgado y su movimiento, cismático. Pero Mons. Lefebvre continúa reconociendo la autoridad de Juan Pablo II, lo que -en nuestra opinión- hace ilegítimas las

consagraciones episcopales de 1988, dado que fueron realizadas no “*præter*”, sino “*contra*” la voluntad del “Papa” (no más allá, sino contra la voluntad del “papa”), para retomar la expresión ya citada de Mons. Lefebvre.

Pero para seguir en nuestro tema, veamos si las consagraciones de 1988 fueron realizadas según la lógica -aunque errónea sobre la autoridad de Juan Pablo II- del primer período de la Fraternidad (1975-1980) o del segundo (a partir de 1980); o sea, si Mons. Lefebvre atribuía a sus “obispos” una suplencia exclusivamente para ejercer el poder de orden en favor de la santificación de las almas o si les atribuía también una verdadera jurisdicción -aunque de suplencia- para el gobierno de las almas. En efecto, hay que distinguir en el episcopado el poder de orden (que confiere al obispo el poder de ordenar sacerdotes y confirmar, por ejemplo) y el poder de jurisdicción; el primero proviene del rito de consagración episcopal, en cambio el segundo viene del Papa (normalmente por medio del mandato pontificio). Los obispos consagrados sin aprobación pontificia tienen entonces el poder de orden, pero no el de jurisdicción. Consagrar obispos -en la situación actual- es lícito, a condición de no atribuirles un poder de jurisdicción que solo pueden recibir del Papa, sino solamente el poder de orden. Esta es, en resumen, la línea seguida por Mons. M.L. Guérard des Lauriers y, tras él, por nosotros mismos <sup>(22)</sup>.

Mons. Lefebvre parecía también haber adoptado -en un primer momento- esta posición: no solamente dio como fin de la consagración el ejercicio del poder de orden [*“El fin principal de esta transmisión es conferir la gracia del orden sacerdotal para la continuación del verdadero Sacrificio de la Santa Misa, y para conferir la gracia del sacramento de la confirmación a los niños y a los fieles que se la pidan”*] <sup>(23)</sup>, sino que excluía explícitamente para sus obispos un poder de jurisdicción: *“Si un día fuese necesario consagrar obispos -escribía el 27 de abril de 1987-, ellos no tendrían*

20) Recuerdo lo que escribió Mons. Tissier: “*Es incluso más grave dispensar de un impedimento dirimente (lo que hace cambiar la condición de la persona, la cual de inhábil, llega a ser hábil para contraer), que declarar nulo un matrimonio (cosa que no cambia el estado de la persona, sino comprueba un estado ya existente ab initio); es un poder de jurisdicción declarativo solamente. Si entonces la suplencia nos da poder de dispensar, ella nos da a fortiori poder de juzgar*”. El argumento es fácil de revertir: si es evidente que las nulidades matrimoniales decretadas por los “tribunales” de la Fraternidad son inválidas, con mayor razón (*a fortiori*) serán inválidas las dispensas, mucho más graves, de los impedimentos dirimentes del matrimonio; por el contrario, consideradas legítimas por Mons. Lefebvre desde 1980.

21) Para el texto del falso “mandato apostólico” leído antes de las consagraciones episcopales del 30 de junio, cf. *Fideliter*, sept.-oct. 1988, n° 65, pág. 11. El canon 953 (1013 del nuevo código) prohíbe una consagración episcopal hecha sin “mandato pontificio” o “apostólico”; es decir, sin autorización del Papa. Que el “mandato apostólico”, es decir, del Papa, haya sido escrito por Mons. Lefebvre, dice mucho sobre la identificación práctica que hace la Fraternidad entre Mons. Lefebvre y el Papa... ¿Qué idea se hace entonces la Fraternidad de la “Iglesia Romana” (que habría autorizado las consagraciones), opuesta a las “autoridades de la Iglesia Romana” (que prohibieron las mismas consagraciones bajo pena de excomunión)?

22) Cf. *Sodalitium* n° 16; y también F. RICOSSA, *Las consagraciones episcopales en la situación actual de la Iglesia*, en *Sodalitium* n° 44, julio de 1997, número especial.

23) Carta de Mons. Lefebvre “a los futuros obispos”, del 29 de agosto de 1987, en *Fideliter*, número extraordinario del 29-30 de junio de 1988.

por función episcopal más que el ejercicio de su poder de orden y no tendrían poder de jurisdicción, al carecer de misión canónica” (24).

Sin embargo, aún antes de las consagraciones episcopales, se había comenzado a aplicar al caso la teoría de la “jurisdicción supletoria”, invocada precedentemente solo para la administración de los sacramentos. Los obispos eventualmente consagrados por Mons. Lefebvre gozarían de una verdadera jurisdicción, recibida no del Papa sino de la Iglesia, la cual podría actuar sin (e incluso contra) el Papa, jefe visible de la Iglesia (25). En un opúsculo sobre las futuras consagraciones, aprobado por Mons. Lefebvre, el Padre Pivert, uno de los miembros de la Comisión canónica, ya invocaba, sin ningún fundamento, el can. 20 para justificar las consagraciones episcopales y el ejercicio por esos obispos de una verdadera jurisdicción (de suplencia) (26).

En el texto del Padre Pivert (que es sin duda alguna uno de los “teólogos” inspiradores de la Comisión canónica) no se comprende si esta “jurisdicción” que él atribuye a los obispos lefebvristas subsiste únicamente para administrar lícitamente los sacramentos de Orden y Confirmación, o bien si, en enero de 1988, ya teorizaba en una autoridad de tales obispos sobre los fieles. Esta segunda hipótesis se convirtió poco a poco en la posición de la Fraternidad y del mismo Mons. Lefebvre, como ya lo habíamos denunciado en por lo menos tres artículos de *Sodalitium* (27). Dos cartas de Mons. Lefebvre (4 de diciembre de 1990 y 20 de febrero de 1991) en vista de la consagración episcopal de Mons. Rangel, atribuían al futuro obispo el carácter de sucesor de Mons. de Castro Mayer como obispo de Campos, en cuanto designado por los sacerdotes fieles y por el pueblo, de los cuales recibiría incluso una verdadera jurisdicción. Por su parte, el Padre Laguérie no dudaba en considerarse como párroco de Saint Nicolas du Chardonnet... En público, Mons. Tissier de Mallerai expresa -creo que por primera vez- la opinión de la Fraternidad San Pío X sobre la cuestión, en la conferencia sobre *Jurisdicción de suplencia y sentido jerárquico*, pronunciada en París el 10 de marzo de 1991 (Mons. Lefebvre vivía aún), para los *Círculos de Tradición Católica* (28). Veamos como

el mismo obispo lefebvrista resume la tesis que sostiene: “*Vuestros sacerdotes -porque son vuestros sacerdotes- vuestros obispos, vuestros párrocos tradicionales, no tienen una autoridad ordinaria, sino una autoridad extraordinaria, una autoridad de suplencia*” (pág. 94) que constituye una jerarquía, también de suplencia, definida por él como “*la jerarquía de la Tradición*” (pág. 106). La jurisdicción de suplencia -que Mons. Tissier atribuye a la jerarquía de la Fraternidad, la jerarquía de la Tradición- no se limita a hacer lícitos y válidos los actos sacramentales; se extiende al poder de enseñar con autoridad al rebaño de los fieles que lo requieren (págs. 96-98). De ahí a crear verdaderos Tribunales “de Tradición”, el paso es rápidamente franqueado, e incluso ya estaba franqueado, a espaldas de todos y por Mons. Lefebvre en persona... Los documentos auténticos de la Fraternidad que hemos publicado y que comentamos aquí, son la demostración sin discusión posible de lo que acabamos de decir.

### **Los Tribunales canónicos de la Fraternidad se atribuyen un verdadero poder de jurisdicción para gobernar a los fieles**

Ciertamente no es difícil demostrar esta afirmación, ya que el hecho es admitido espontáneamente por el mismo Mons. Tissier de Mallerai: “*es una verdadera jurisdicción y no una exención del derecho y de la obligación que los fieles tienen de recibir una sentencia. Así, pues, tenemos poder y deber de dar verdaderas sentencias, teniendo potestatem ligandi vel solvendi [de atar y desatar]. Ellas tienen, pues, valor obligatorio. (...) Nuestras sentencias no son simples opiniones privadas (...)*” ya que “*hay que tener un poder en el foro externo público*” (*Cor Unum*, n° 61, IV, 4, pág. 43).

La Fraternidad se atribuye entonces -aunque se trate de suplencia- el poder de jurisdicción, y más exactamente el poder de jurisdicción en el foro externo, que tiene “*efectos jurídicos públicos*” (29). Recordamos que esta jurisdicción “*está inmediatamente destinada al gobierno de los fieles*

24) Citado en F. PIVERT, *Consagraciones por Mons. Lefebvre... ¿un cisma?*, Fideliter, abril de 1988, pág. 59.

25) “*La Iglesia no es el papa, y recíprocamente*” (F. Pivert, op. cit., pág. 47). Ciertamente, la Iglesia no es el Papa, ¡pero el Papa es el Jefe visible de la Iglesia! En particular, el Padre Pivert, uno de los miembros de la Comisión canónica de la Fraternidad, en la aplicación del principio canónico “*Ecclesia supplet*”, olvida que por “*Ecclesia*” se entiende el Supremo Legislador eclesiástico, es decir, el Papa, que puede conceder la jurisdicción “a jure”, o sea, por una decisión inscripta en el derecho promulgado por él. En consecuencia, el principio “*Ecclesia supplet*” no puede ser invocado si no hay Papa, o cuando el Papa niega explícitamente esta suplencia. Volveremos sobre el asunto.

26) F. PIVERT, op. cit., págs. 28-30, 37-42 (sobre el canon 20); págs. 46-47 (sobre la jurisdicción de suplencia que se sigue).

27) *Sodalitium* n° 26, dic. 1991, págs. 4-6: *La autoridad del obispo, ¿viene del Papa o de los fieles?*; n° 33, oct. 1993, págs. 51-52: *Pequeña nota sobre la Fraternidad San Pío X*; n° 41, abril-mayo de 1996, págs. 58-59: *Debate: ¿Quién es el obispo de Campos?*

28) Las Actas fueron publicadas por Ediciones Fideliter. La alocución de Mons. Tissier está en págs. 93-114.

29) P. PARENTE, A. PIOLANTI, *Dizionario di teologia dommatica per i laici*, Studium, Roma, 1943, pág. 95, voz “jerarquía”.



en orden a la vida eterna”, y no “a la santificación de las almas por el ofrecimiento del Sacrificio de la Misa y la administración de los sacramentos”, lo cual es propio del poder de orden <sup>(29)</sup>. La jurisdicción así definida “se ejerce por la enseñanza autorizada de las verdades reveladas (sagrado magisterio); por la promulgación de leyes (poder legislativo); por la auténtica decisión de las causas surgidas entre los súbditos (poder judicial); por la aplicación de sanciones penales contra los transgresores de las leyes (poder coercitivo). Son estas tres últimas funciones las que hacen de la Iglesia una sociedad perfecta [como el Estado]” (ibidem).

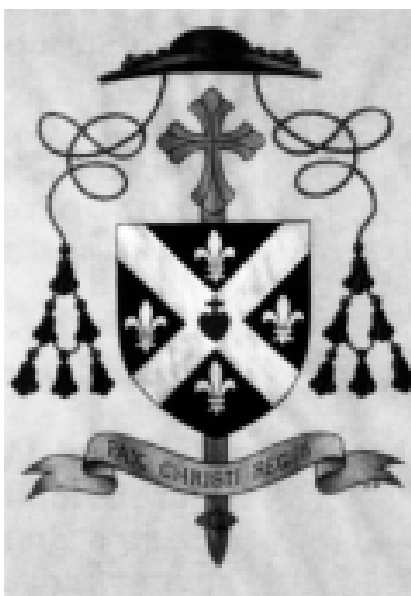
La Fraternidad, al atribuirse este poder de jurisdicción, se arroga de hecho el poder de gobernar a los fieles (*potestas regiminis*), poder que es propio de la Iglesia. No se ha privado de atribuirse los diversos poderes con los cuales se ejerce la mencionada jurisdicción.

### La Fraternidad se atribuye el poder de Magisterio propio de la Autoridad eclesiástica

En la conferencia pronunciada en París en 1991, ya citada, Mons. Tissier de Mallerais atribuía a los sacerdotes y obispos de la Fraternidad una jurisdicción de suplencia. Ahora bien, él mismo entiende por poder de jurisdicción, ante todo el poder de enseñar: “Se distingue, ustedes lo saben bien, en la Iglesia el poder de orden y el poder de jurisdicción. ‘Id por el mundo entero a predicar el Evangelio’, *docete omnes gentes*, ‘enseñad a todas las naciones’, esto es el poder de jurisdicción. ‘Enseñad’ o ‘enseñadles a cumplir todo lo que Yo os he mandado’, a guardar los mandamientos de Dios; dirigid el rebaño, este es el poder de jurisdicción” (l.c., págs. 96-97). Estas palabras en su sentido evidente significan que la Fraternidad se atribuye -aunque por suplencia- el poder de enseñar con

autoridad, lo cual depende del poder de jurisdicción, y no solamente la capacidad de exhorta al bien, lo cual puede desprenderse del poder de orden. Esta interpretación es absolutamente cierta respecto de la persona de Mons. Lefebvre, ya que en un artículo publicado en 1989 en la revista *Fideliter* (nº 72, pág. 10), Mons. Bernard Tissier de Mallerais considera a Mons. Lefebvre no solo como una voz del magisterio sino como el mismo magisterio, olvidando que no siendo más obispo residencial, Mons. Lefebvre no era más miembro tampoco de la jerarquía de jurisdicción ni un órgano del magisterio eclesiástico. “¿Qué queda del magisterio en la Iglesia? -escribía Mons. Tissier- *Es de fe que el Señor ha dotado a Su Iglesia de un Magisterio vivo y perpetuo, vale decir de voces pontificia y episcopales que, en cada época y en el presente, se hacen eco de la revelación divina, que repiten la tradición. Y bien, este magisterio, al menos en cuanto a las verdades negadas por los conciliares, lo hemos hallado de modo seguro en Mons. Lefebvre. Él es el verdadero eco de la tradición, el testigo fiel, el buen pastor, que las ovejas simples saben distinguir en medio de los lobos cubiertos con pieles de oveja. Sí, la Iglesia tiene un magisterio viviente y perpetuo y Mons. Lefebvre es su salvador. La indefectibilidad de la Iglesia es el Arzobispo inflexible (...)*”.

Si es así, ¿dónde hallar el magisterio vivo y perpetuo, así como la indefectibilidad de la Iglesia, luego del fallecimiento de Mons. Lefebvre? ¿Acaso en los obispos consagrados por él? Un teólogo de la Fraternidad San Pío X, el Padre Arnaud Sélegny, entonces profesor del seminario Santo Cura de Ars en Flavigny, lo sostuvo en la revista *Le Sel de la terre* (nº 1, págs. 39-50 y nº 3, págs. 51-61). Recordamos lo que ya hemos publicado a este respecto en *Sodalitium* (nº 33, oct. 1993, pág. 52). En nuestra opinión, “se atribuye a la Fraternidad y a sus obispos los caracteres propios de la única Iglesia Católica y de los obispos dotados de autoridad por el Papa. Para Sélegny, las consagraciones del 30 de junio de 1988 son ‘una prueba de la indefectibilidad de la Iglesia’ (*Le Sel de la terre*, nº 1, pág. 38), y además: ‘esto muestra (...) la necesidad de las consagraciones del 30 de junio de 1988; ya que, para que se pueda hablar de indefectibilidad de la Iglesia, es necesario que en todas las épocas y en todos los momentos de su historia, haya un magisterio que predique infaliblemente y fieles que adhieran del mismo modo a esta enseñanza, cualquiera sea el número efectivo de estos Obispos y fieles. Mons. Lefebvre (...) no podía dejar de dar a la Iglesia el medio de salvaguardar su indefectibilidad.



Blasón de Mons. Tissier de Mallerais, presidente de la comisión San Carlos Borromeo



*Tradidi quod et accepi: nos toca ahora, bajo la dirección del magisterio, conservar este depósito' (Le Sel de la terre, n° 3, pág. 66). El profesor de los jóvenes seminaristas de la Fraternidad (!), el Padre Sélegny, afirma por tanto explícitamente:*

*a) que solo los Obispos de la Fraternidad aseguran la indefectibilidad de la Iglesia;*

*b) que solo ellos ejercen el magisterio infalible.*

*Posiciones absurdas, ya que es exclusivamente por medio del Sumo Pontífice que el poder magisterial se transmite a los Obispos. Ahora bien, el Sumo Pontífice jamás ha concedido tal poder a los de la Fraternidad (...)*

Mons. Lefebvre, lo hemos dicho, habiendo renunciado a las diócesis de Dakar y Tulle no era más un órgano del magisterio eclesiástico; no obstante haber ejercido durante largos años -con Pedro y bajo Pedro- esta tarea. En cambio, los obispos consagrados por él (así como los consagrados por Mons. Thuc) no recibieron jamás del Papa tal oficio y no pueden ejercer de ninguna manera, y jamás han ejercido, el poder de enseñar en la Iglesia en cuanto doctores auténticos (¡y menos todavía, infalibles!).

Nos parece haber demostrado la tesis de este capítulo: *“La Fraternidad se atribuye el poder de Magisterio propio de la Autoridad eclesiástica”*. Nos parece haber probado lo infundado de esta pretensión. El problema de la indefectibilidad de la Iglesia (y por consiguiente también el de la indefectibilidad de su poder de magisterio) permanece; se trata de una cuestión vital, pero que está fuera de nuestro tema (<sup>29 bis</sup>). En todo caso, las consagraciones del 30 de junio de 1988 no son suficientes -es lo menos que puede decirse- para asegurar esta necesaria indefectibilidad.

### **La Fraternidad se atribuye el poder legislativo propio de la Autoridad eclesiástica**

Hacer leyes es lo propio de la Autoridad (cfr. *Sodalitium* n° 48, págs. 6-7). Ahora bien, la Fraternidad se atribuye la facultad de legislar en materia

eclesiástica. Luego, se atribuye la Autoridad eclesiástica.

La menor del razonamiento no es difícil de probar.

Primero, se trata de una consecuencia implícita del poder de jurisdicción en el foro externo que se atribuye la Fraternidad, como ya hemos demostrado. Ahora bien, en este poder está incluido el poder legislativo. Ergo...

También en los hechos la Fraternidad se atribuye este poder, al menos en dos casos: crear una nueva legislación canónica y atribuirse el poder de dispensar.

Examinemos el primer caso. Hubo un tiempo, quizás todavía hoy, en que los candidatos al sacerdocio en la Fraternidad debían jurar -entre otras cosas- aceptar la posición que tomaran los superiores respecto del nuevo código de derecho canónico. Hoy estas decisiones fueron tomadas, como se deduce de las *“Ordenanzas...”* de 1997, aplicando al derecho de la Iglesia el principio lefebvrista del “filtro”, “colador” o “tamiz” (<sup>30</sup>), ya evocado y aplicado precedentemente al magisterio y a la disciplina: *“aceptamos las novedades íntimamente conformes a la Tradición y a la Fe. No nos sentimos ligados por la obediencia respecto de las novedades contrarias a la Tradición, que amenazan nuestra Fe”* (<sup>31</sup>). En otras palabras, las autoridades de la Fraternidad se atribuyen el poder de elegir (“herejía”, en griego, significa justamente “elección”) en el magisterio y en la legislación de Juan Pablo II lo que se considera como “tradicional”, y descartar el resto. Así es como las *“Ordenanzas”* de 1997 (en pág. 4) aplican el mencionado principio al nuevo código de derecho canónico promulgado por Juan Pablo II: *“el nuevo código de derecho canónico, promulgado el 25 de enero de 1983, imbuido de ecumenismo y de personalismo, peca gravemente contra la finalidad misma de la ley”* (<sup>32</sup>). *Por eso nosotros seguimos en principio el código de 1917 (con las modificaciones introducidas posteriormente). Sin embargo, en la práctica y sobre*

29 bis) Después del Concilio Vaticano II y las reformas que le siguieron, el problema de la indefectibilidad de la Iglesia es ciertamente el más terrible que se plantea a las almas fieles. Dada su importancia, trataremos la cuestión aparte, reservándonos abordarla próximamente. Por el momento, propongo al lector lo que escribía al respecto, muy oportunamente, el Padre Lucien (op. cit., pág. 203): *“Incluso en la crisis, Cristo permanece con Su Iglesia, y continua haciéndola subsistir conforme a la naturaleza que le dio al instituir-la; lo creemos como verdad de Fe por la indefectibilidad de la Iglesia. Esta afirmación, para no ser puramente verbal, debe tener una realización concreta: de hecho, ¿cómo está Jesús incluso actualmente con Su Iglesia? Si se considera a la Iglesia como Cuerpo Místico, Jesús permanece con ella también hoy manteniendo vivo el testimonio de la Fe y la santificación mediante los auténticos Sacramentos; como así también la Oblación del verdadero Sacrificio. Es esto lo que prueba la existencia de quienes son llamados ‘tradicionalistas’. Pero, concretamente, ¿Jesús está todavía con Su Iglesia considerada como sociedad humana? A esta pregunta, que debe tener una respuesta, respondemos: manteniendo en su lugar la estructura jerárquica visible, mientras permite la gran prueba que consiste en el eclipse de la autoridad y de sus funciones sobrenaturales. Esta permanencia de la estructura jerárquica constituye la luz de esperanza, puesta por Dios, de la restauración de la Autoridad; y asegura la continuidad material de la sucesión jerárquica que es absolutamente requerida por la nota de Apostolicidad”*.

30) Cf. el artículo del Padre Sanborn en *Sodalitium* n° 39, pág. 35.

31) Ver la nota 4. Se trata de una idea recurrente en Mons. Lefebvre: *“estamos con Pablo VI, sucesor de Pedro, cuando cumple su función; pero nos negamos a seguir a Pablo VI, sucesor de Lutero, Rousseau, Lamennais, etc.”* (MONS. LEFEBVRE, *El golpe maestro*

puntos precisos, podemos aceptar del nuevo código lo que corresponde a un desarrollo homogéneo, a una mejor adaptación a las circunstancias, a una simplificación útil; aceptamos también en general lo que no podemos rechazar sin ponernos en una situación de disconformidad con la legislación recibida oficialmente, cuando está en juego la validez de los actos. Y en este último caso, reforzamos nuestra disciplina para aproximarla de la del código de 1917 (Cf. *Cor Unum*, n. 41, pp. 11-13)". Si el código de 1983 reemplazó al de 1917, ¿cómo pueden subsistir en la Iglesia dos legislaciones que se excluyen? Si Juan Pablo II es Papa, la única legislación en vigor es la de 1983. Si no lo es, la de 1983 no existe, y subsiste la de 1917. En cambio, para la Fraternidad San Pío X están en vigor ambos códigos de leyes, los dos. O más bien: está en vigor un tercer código, cuyo autor no es ni Benedicto XV (que promulgó el de 1917) ni Juan Pablo II (autor del de 1983) sino Mons. Fellay, superior general de la Fraternidad, y sus colaboradores; un código compuesto "en principio" de las leyes de 1917 y "en la práctica", en ciertos casos, de las leyes de 1983, cada vez por un híbrido de las dos legislaciones con el agregado de novedades creadas *ex novo* por la Fraternidad (por ejemplo -en la pág. 46 de las *Ordenanzas*- la extensión del impedimento matrimonial prohibente de religión mixta, hasta incluir, al menos en la práctica, a los "católicos conciliares"!)). Me parece entonces probado que la Fraternidad, de hecho sino de derecho, se atribuye el poder legislativo, creando una nueva legislación canónica que no es ni la preconiliar ni la posconiliar.

Pero la Fraternidad se atribuye el poder legislativo también en **las dispensas** de impedimentos, irregularidades y votos, y eso, desde 1980.

En efecto, el poder de dispensar de la ley es de competencia exclusiva de quien puede hacer leyes.

Ahora bien, la Fraternidad se atribuye el poder de dispensar de la ley.

Por consiguiente, la Fraternidad se atribuye el poder legislativo en la Iglesia, lo cual, en último análisis, es propio de la Suprema Autoridad.

La "mayor" de nuestro razonamiento está claramente expresada en el canon 80: "*la dispensa, o relajación de la ley en un caso especial, puede concederse por el autor de la ley, por su sucesor o Superior y por aquel a quien alguno de los mismos hubiera concedido la facultad de dispensar*" (32 bis). Los cánones siguientes (81-82-83) precisan que el poder ordinario de dispensar es propio del Papa para las leyes generales de la Iglesia, y del Ordinario (y no del Párroco) para las leyes particulares.

En particular, las dispensas a los impedimentos matrimoniales son competencia del Papa (canon 1040) por medio de las Congregaciones Romanas; las dispensas a las irregularidades para recibir el Orden Sagrado, del Ordinario del lugar (can. 990), y las dispensas de los votos reservados corresponden también al Papa (can. 1309). En todo caso, señalo para el lector el principio general relativo a las dispensas: la dispensa es siempre un acto de jurisdicción -y en consecuencia, de autoridad- que pertenece al legislador (o a su delegado).

La "menor" de nuestro razonamiento (la Fraternidad se atribuye el poder de dispensar de la ley) es incontestable, y está ampliamente demostrada por los documentos que publicamos. En particular, se atribuye a las "autoridades" de la Fraternidad el poder de dispensar de impedimentos matrimoniales (*Ordenanzas* de 1980, págs. 17 y 18; *Ordenanzas* de 1997, cap. 6 y 7, pág. 7: institución, desde 1991, de la Comisión canónica) y de votos religiosos (en la Fraternidad, es Mons. de Galarreta quien está encargado de la tarea, con jurisdicción no solamente sobre los miembros de la Fraternidad, sino también sobre los pertenecientes a las otras sociedades religiosas: *Ordenanzas*, págs. 36-38; *Cor Unum*, n° 61, pág. 34).

### **La Fraternidad se atribuye el poder judicial propio de la Autoridad eclesiástica**

Además del poder de hacer leyes, ¿la Fraternidad también se atribuye el poder de juzgar en base a estas leyes? La respuesta será positiva si constatamos

de *Satanás*, ed. Saint-Gabriel, Martigny, 1977; el texto citado, *Respuesta a diversas cuestiones de actualidad*, data del 24 de febrero de 1977, págs. 43-44.

32) *Sodalitium* comparte plenamente el juicio que hacen las *Ordenanzas* sobre el nuevo código. Pero este juicio debería tener -como consecuencia lógica e ineluctable- la total invalidez del nuevo código y la constatación absolutamente cierta de que Juan Pablo II no posee la autoridad divinamente asistida (no es Papa *formaliter*). En efecto, por un lado, un código de leyes que "peca gravemente contra la misma finalidad de la ley" (que es el bien común), no puede ser válido y; por otro lado, una "autoridad" que no asegura el bien común, no puede ser legítima: el mismo Mons. Tissier reconoce, con el Padre Guérard, que quien no quiere habitualmente el bien de la Iglesia, no puede ser Papa (*Fideliter*, n° 72, nov.-dic. de 1989, pág. 7). En efecto, es imposible que una autoridad auténtica promulgue un código de derecho canónico que peca gravemente contra la misma finalidad de la ley (Mons. Tissier) (sobre la infalibilidad de las leyes universales de la Iglesia, ver por ejemplo PADRE FRANCESCO PALADINO, *¿Petrus es tu?*, Delacroix, 1999, págs. 143-148, un libro que hemos criticado abundantemente -cf. PADRE FRANCESCO RICOSSA, *El Padre Paladino y la Tesis de Cassiciacum. Respuesta al libro ¿Petrus es tu?*, Centro Librario Sodalitium, Verrua Savoia, 1999- pero que en este punto particular, al fundarse en citas pertinentes, es absolutamente irrefutable; a él remitimos al lector.

32 bis) "*La dispensa es un acto de la autoridad competente que libera al sujeto de la obligación de observar la ley en un caso particular. La autoridad competente para la dispensa es la misma que promulgó la ley, o una autoridad superior*" (F. ROBERTI ET P. PALAZZINI, *Dizionario di Teologia morale*, Studium, 1968, voz "dispensa").

---

la existencia en la Fraternidad de verdaderos Tribunales, procesos, juicios y sentencias. Ahora bien, es muy fácil probarlo, puesto que, como hemos visto, la Fraternidad ha instituido Tribunales para “*juzgar las nulidades matrimoniales*” “*por diversos tribunales instituidos ad casum*” (Cor Unum, pág. 33): todo el estudio de Mons. Tissier de Mallerais que publicamos apunta a la defensa de la “*legitimidad de nuestros tribunales matrimoniales*”. Se nos podría objetar que no se trata de verdaderas sentencias, sino solamente de consejos u opiniones expresadas por teólogos de la Fraternidad para tutelar la conciencia de sus fieles. Pero no es así. Monseñor Tissier de Mallerais precisa explícitamente que “*tenemos poder y deber de dar verdaderas sentencias, teniendo potestatem ligandi vel solvendi* (...). *Nuestras sentencias no son simples opiniones privadas*” (Cor Unum, IV, 4, pág. 43). En consecuencia, es evidente e innegable que la Fraternidad se atribuye el poder judicial.

### **La Fraternidad se atribuye el poder coercitivo propio de la Autoridad eclesiástica**

Esta última tesis es un corolario de las precedentes; en efecto, el Código de derecho canónico recuerda que “*los que tienen potestad de dar leyes o imponer preceptos, pueden también añadirles penas a unas y a otros...*” (can. 2220 § 1). Si la Fraternidad se atribuye el poder legislativo, como hemos visto, ¿porqué no gozaría también del poder coercitivo? El capítulo 7 de las “*Ordenanzas*” trata justamente “*de los delitos y de las penas*”, allí se afirma seguir las penas establecidas por el nuevo código. Las “*Ordenanzas*” insisten ante todo en el “*poder*” atribuido a los sacerdotes de la Fraternidad de absolver de penas y censuras (págs. 58-61), ¡presentando el caso verdaderamente paradójal de sacerdotes “*excomulgados*” que absuelven de excomuniones! En vez de remitir a los culpables a órganos competentes tales como la Sagrada Penitenciaría o el Obispo diocesano (recordamos que la Fraternidad reconoce la autoridad de Juan Pablo II), las “*Ordenanzas*” (pág. 59) establecen el principio general de dirigirse a las autoridades de la Fraternidad, superior general o presidente de la comisión canónica, ¡incluso para los casos reservados a la Santa Sede!

Pero la Fraternidad no solamente prevé la posibilidad de absolver por sí misma de las censuras y de las penas, incluidas las reservadas al Papa, ¡también prevé la posibilidad de infligir por sí misma las penas! “*Además de las censuras latae sententiae, están las censuras ferendae sententiae, las penas vindicativas, los remedios penales y las penitencias,*



*El Padre Schmidberger, primer sucesor de Mons. Lefebvre*

*de las que se puede usar para castigar un delito*” (pág. 55). Ese “*se puede*”, ¿a qué autoridades se refiere? ¿a las de la Iglesia, o a las de la Fraternidad? Ciertamente, a las de la Fraternidad, como se prevé más adelante para la absolución de las penas (pág. 59): “*una pena infligida por un superior es sometida al mismo, pero si se trata de un superior ‘novus ordo’* [luego, está previsto también el caso de una pena infligida por el superior ‘tradicionalista’, n.d.r.], *puede ser sometida al superior de rango equivalente en la Fraternidad, por quien corre la cuenta de consultar a su cofrade ‘novus ordo’, si lo juzga útil.*

*Todas las demás penas pueden ser sometidas al superior de distrito (...) donde el delito fue perpetrado*”.

### **Al atribuirse los poderes legislativo, judicial y coercitivo independientemente de todo poder superior, la Fraternidad se constituye de hecho como una Iglesia autónoma**

Habíamos visto antes como la Iglesia posee los tres poderes -legislativo, judicial y coercitivo- en cuanto sociedad perfecta; es decir, independiente, en la prosecución de su fin, de cualquier otra sociedad. Ahora bien, la Fraternidad se atribuye de hecho los tres poderes (sin hablar del magisterial). Luego, la Fraternidad se constituye como sociedad perfecta, como Iglesia autónoma (aunque se trate de suplencia). Y esto es tanto más verdadero cuanto que la Fraternidad, mientras reconoce un poder superior, el de Juan Pablo II, lo vacía de toda eficacia y realidad, al atribuirse por un lado poderes papales y prohibir por otro, a sus propios fieles el recurso al Papa.

---



Este vaciamiento de los poderes del Papa en favor de la autoridad de la Fraternidad, es una constante en los documentos que estamos examinando <sup>(33)</sup>. El mismo Mons. Tissier admite, respecto de los Tribunales de la Fraternidad: *“es cierto que nuestras sentencias en tercera instancia reemplazan a las sentencias de la Rota Romana, que juzga en nombre del Papa como tribunal en tercera instancia”* (*Cor Unum*, IV, 5, pág. 43). El mismo Mons. Lefebvre atribuía a la Comisión canónica de la Fraternidad la tarea de *“suplir en cierto modo a la defección de las Congregaciones romanas”*. Ahora bien, las Congregaciones romanas junto a los Tribunales constituyen la Curia romana (can. 242), y sus actos son actos de la Santa Sede (can. 7 y 9) <sup>(34)</sup>. Por lo tanto, la pretensión de la Fraternidad y de Mons. Lefebvre de suplir a las Congregaciones romanas equivale, de su parte, a pretender suplir nada menos que a la Santa Sede.

Pero la Fraternidad no solamente suplanta así a la Santa Sede, sino que prohíbe a sus fieles -bajo juramento- recurrir a esta, ¡aún cuando, lo recordamos, reconoce la autoridad! Por ejemplo, quien desee recibir de la Fraternidad la anulación del matrimonio debe jurar *“no acercarme a un tribunal eclesiástico oficial para hacer examinar o juzgar mi causa”* (*Cor Unum*, pág. 45), ya que el principio es que lo fieles *“no tienen derecho a ir a los tribunales novus ordo”* (*Cor Unum*, II, 1, pág. 40) *“incluso si, por un imposible, se pudiese encontrar uno u otro tribunal oficial que juzgase los casos matrimoniales según las normas tradicionales”* (*Cor Unum*, IV, 3, pág. 43) <sup>(35)</sup>. Ahora bien, el recurso a la Santa Sede es un derecho de todo fiel **a causa del primado del Romano Pontífice** (can. 1569): prohibir este recurso es una negación práctica del primado y una clara declaración de cisma.

Una confirmación de cuanto acabo de demostrar nos es dada por la institución por la Fraternidad de una jerarquía paralela que suple y suplanta a la jerarquía “oficial” de la Iglesia, que sin embargo es reconocida como tal por Ecône...

## Confirmación de la tesis precedente: la Fraternidad -de hecho- ha instituido una jerarquía paralela

La ocupación de la iglesia parroquial de Saint Nicolas du Chardonnet, en París, ofreció a los miembros de la Fraternidad la ocasión de atribuir al sacerdote que oficia en esa iglesia el título de “párroco”. El Padre Laguérie tomó a tal punto en serio esta pretensión que en una carta al Presidente de la república, Mitterand, ¡lo calificó como su parroquiano! <sup>(36)</sup>. Es evidente para todos que no es suficiente ocupar una parroquia para ser párroco, para revestir tal cargo es necesario ser nombrado por el obispo local; así como la ocupación de la Basílica de San Pedro o de Letrán no daría al ocupante los poderes del Vicario de Cristo... Pero Mons. Lefebvre no se limitó al caso de Saint Nicolas en su pretensión de constituir “verdaderas parroquias”. El 27 de octubre de 1985, en Ginebra, durante la homilía de la Misa de Cristo Rey, pronunció las siguientes palabras: *“Creo que debemos considerar desde ahora nuestros lugares de culto como verdaderas parroquias. Son nuestras parroquias, donde hacemos bautizar a nuestros hijos, donde asistimos al Santo Sacrificio de la Misa, donde los niños reciben el verdadero Sacramento de la Confirmación, donde confesarse (...). Debemos también recibir en nuestras capillas todos los Sacramentos, incluso el Sacramento del Matrimonio”* (*Fideliter*, n° 49, enero-febrero de 1986, págs. 20-21). Más tarde, después de las consagraciones episcopales, hizo su camino la idea de una “jerarquía de la Tradición” que debería suplir, y suplanta de hecho, a la “jerarquía oficial”.

El 10 de marzo de 1991, Mons. Tissier de Mallerais resumía así esta tesis: *“vuestrós sacerdotes -porque son vuestrós sacerdotes- vuestrós obispos, vuestrós párrocos tradicionales, no tienen una autoridad ordinaria, sino una autoridad extraordinaria, una autoridad de suplencia”* (op. cit., pág. 94). Después de definir la jurisdicción como *“un poder del superior sobre su rebaño, del pastor sobre sus ovejas”* (pág. 96), Mons. Tissier

33) Están reservados a la Santa Sede, por ejemplo, los impedimentos matrimoniales (can. 1040); la *sanatio in radice* (can. 1141, *Ordenanzas*, págs. 48-50); diversas dispensas (*Ordenanzas*, pág. 29; pág. 35: dispensa de las Órdenes Sagradas; pág. 37: el indulto de secularización para los religiosos, reservado a un obispo de la Fraternidad, también pág. 38); la absolución de numerosas censuras, todas cosas que la Fraternidad atribuye a sus propias autoridades.

34) Canon 7: *“Nomine Sedis Apostolicæ vel Sanctæ Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam (...) Congregationes, Tribunalia, Officia, per quæ idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiæ expedire solet”* (ver los cánones 360-361 del nuevo código).

35) Este principio (de no recurrir a Roma) no vale solamente para las causas matrimoniales, sino que es aplicado constantemente por la Fraternidad. Se reserva al Papa -es verdad- el privilegio petrinio y la dispensa sobre el matrimonio rato no consumado, pero no sin el permiso del superior de distrito y el control de la comisión canónica (*Ordenanzas*, págs. 32-33).

36) En contradicción con lo que afirma Mons. Tissier: *“El Padre Laguérie, párroco -de suplencia- de San Nicolás de Chardonnet, no tiene jurisdicción sobre los habitantes del barrio, sobre los vecinos del distrito. Él tiene poder sobre las personas, precisemos: sobre las familias y los fieles que frecuentan su iglesia y que le requieren el socorro de su ministerio sacerdotal”* (alocución del 10 de marzo de 1991, op. cit., pág. 101).



atribuye a los sacerdotes de la Fraternidad un rebaño que no les sería confiado ni por los obispos ni por el Papa, sino por la “Iglesia”: *“en situación de crisis -decía a los fieles que lo escuchaban- es evidente que vuestros sacerdotes no pueden recibir de sus superiores de la Iglesia oficial, de los obispos diocesanos, ni del mismo papa, un rebaño, porque les es negado. Entonces, esta autoridad sobre el rebaño les va a ser dada de otra manera: por suplencia. Es la Iglesia que va a dar a los sacerdotes un poder, como el poder del pastor sobre su rebaño”* (pág. 97).

Este texto de Mons. Tissier encierra ya algunas contradicciones. Primero y principal, opone los obispos diocesanos y el Papa (la Iglesia jerárquica) a la Iglesia (en cuanto Cuerpo Místico de Jesucristo, pág. 99): la Iglesia podría conceder lo que el Papa rechaza. Además, parece ignorar o negar que quien otorga la jurisdicción de suplencia es justamente el Papa: dado que Mons. Tissier admite que el Papa niega la jurisdicción a los sacerdotes de la Fraternidad, no se ve como el mismo Papa podría concederla al mismo tiempo. Finalmente, atribuye a la jurisdicción de suplencia la capacidad de confiar al sacerdote un rebaño a gobernar: lo cual implica una pluralidad de personas confiadas de manera estable a un pastor. Ahora bien, el mismo Mons. Tissier explica poco después como la jurisdicción de suplencia se ejerce en cambio caso por caso, sobre simples individuos (pág. 99) <sup>(37)</sup>. ¿Cómo se puede hablar en este caso de rebaño?

La ambigüedad de la tesis de Mons. Tissier de Mallerai -tal como la expuso en 1991- se verifica igualmente cuando habla -por primera vez, que yo sepa- de una “jerarquía de la Fraternidad” o “jerarquía de la Tradición” (pág. 106). No es la jerarquía de la Iglesia (pág. 104), aunque “se parece” (pág. 105). La Fraternidad -lo sabemos- no acepta el sedevacantismo, se considera siempre en comunión con la jerarquía de aquella que llama “Iglesia conciliar” o “Iglesia oficial”: Papa y obispos

diocesanos (pág. 104). Sin embargo, a esta jerarquía ella añade una jerarquía “de suplencia”, la “jerarquía de la Tradición”. Pero en la práctica el fiel no deberá dirigirse a la jerarquía “oficial”, sino siempre y solamente a la de la “Tradición”. Ya que “la jerarquía (cf. can. 108 § 3) se aleja en gran parte de la fe católica, los fieles no pueden generalmente recibir de ella los socorros espirituales sin peligro en la fe” (Ordenanzas, pág. 5). Por eso, “incluso en el caso en que, de hecho, no haya necesidad” (ibidem, pág. 6), los fieles deberán recurrir a la “jerarquía de la Tradición”, que por lo demás en la práctica no está constituida por todos los sacerdotes fieles a esa tradición, sino por los de la Fraternidad. Y como la Fraternidad posee ya una jerarquía (simple sacerdote, prior, superior de distrito, superior general), también la jerarquía de la Tradición estará estructurada del mismo modo. “En sí mismo, respecto a los fieles, los simples sacerdotes no tienen menos poder de suplencia que un prior o que un superior de distrito. Pero por disposición práctica, a fin de conservar el sentido jerárquico que pertenece al espíritu de la Iglesia, y de remitir los casos más graves a una instancia más elevada, ciertos poderes son reservados a la autoridad superior, en virtud de una analogía con la jerarquía normal, según las reglas siguientes:

\* Los priores y sacerdotes responsables de capillas son equiparados a párrocos personales, como los capellanes militares [no se trata entonces de una verdadera jurisdicción de suplencia, caso por caso, sino de una prelatura personal, que es una jurisdicción ordinaria, n.d.r.].

\* Los superiores de distrito, seminario y de casa autónoma, como el Superior general y sus Asistentes, aunque no tengan en principio jurisdicción sino sobre sus súbditos (sacerdotes, seminaristas, hermanos, oblatas, familiares), son equiparados a Ordinarios personales, como los Ordinarios militares, en relación a los fieles

37) Esta contradicción ha sido señalada incluso por algunos miembros de la Fraternidad: “La jurisdicción de suplencia -escribe, por ejemplo, el Padre Mercury-, definida como un poder concedido caso por caso, ha sido correctamente calificada como ‘personal’. Mons. Tissier de Mallerai ha explicado en su alocución que ‘es una jurisdicción personal y no territorial. Y esto es muy importante que lo comprendamos: los sacerdotes tienen jurisdicción personal sobre ustedes y no sobre un territorio. Los sacerdotes de la Tradición poseen jurisdicción sobre cada uno de los fieles que frecuentan las capillas, las iglesias de la Tradición, los prioratos o los conventos de la Tradición, y no sobre un territorio determinado como es, por ejemplo, el territorio de una parroquia’ [págs. 100-101]. Probablemente engañados por los términos utilizados, algunos asimilaron la jerarquía de suplencia a la de una prelatura personal, que es evidentemente [una jurisdicción] de tipo ordinario. (...) Esta restricción impuesta por la misma definición de jurisdicción de suplencia, presenta evidentemente una grave dificultad en el plano social. Ahora bien, el poder de los sacerdotes de la Tradición que concierne a las personas individualmente tomadas, no se extiende a las personas morales; como por ejemplo una comunidad. Concretamente, esto significa que nuestra jurisdicción no se ejerce sobre nuestras comunidades como sobre un rebaño. (...) Cuando Mons. Lefebvre dice: ‘vuestras iglesias son vuestras parroquias’, hay que entenderlo en un sentido analógico y no en sentido estricto, como si la jurisdicción de suplencia nos autorizase a constituir entidades canónicas en sentido pleno. La creación de estructuras de derecho eclesiástico (...) pertenece propiamente al ejercicio del poder ordinario. Reivindicar un tal poder es exponerse a la acusación de cisma más o menos latente, porque es arrogarse prerrogativas que sobrepasan los límites de un poder extraordinario admitido para un período de crisis” (H. MERCURY, *La obra de Mons. Lefebvre: una teología de la excepción*”, Edición de la petite croix, agosto de 1999, págs. 59-61). Recordamos que son las mismas Ordenanzas las que confunden jurisdicción de suplencia y prelatura personal, al equiparar la “jerarquía de la Fraternidad” a un ordinariato militar (pág. 7).

cuya cura de alma tienen sus sacerdotes [misma observación que la anterior, n.d.r.].

\* *Los obispos de la Fraternidad, desprovistos de toda jurisdicción territorial, tienen sin embargo la jurisdicción supletoria necesaria para ejercer los poderes ligados al orden episcopal y a ciertos actos de la jurisdicción episcopal ordinaria* [se sigue que ellos reivindican la jurisdicción no solo para la santificación de las almas mediante el poder de orden, sino también para el gobierno de las almas, n.d.r.]” (*Ordenanzas*, págs. 6-7).

Además de esta estructura jerárquica paralela, la Fraternidad ha creado igualmente en 1991 la “Comisión canónica” y un “obispo encargado de los religiosos” “para continuar después de su muerte el oficio que Monseñor Lefebvre cumplió de manera supletoria, en estas materias, desde 1970 hasta 1991” (*Ordenanzas*, pág. 7), para suplir a la defeción de las Congregaciones Romanas (en particular, las dispensas y sentencias de los tribunales de la Fraternidad reemplazan -y usurpan- los poderes del Santo Oficio, de la Sagrada Penitenciaría, de la Propaganda Fide, de la Congregación para los Religiosos, de los Sacramentos y de las Iglesias Orientales).

La Fraternidad ha creado entonces, de hecho sino de derecho y en principio, una estructura jerárquica estable que reemplaza, para el fiel, al párroco, al obispo diocesano y a la Santa Sede (Congregaciones y Tribunales). No falta a la jerarquía de la Fraternidad más que el Papa, pero no por eso Juan Pablo II -reconocido de palabra como tal- cumple esta función, ya que normalmente está prohibido recurrir a él.

Señalemos finalmente que los poderes de esta jerarquía “de la tradición” no se ejercen solamente

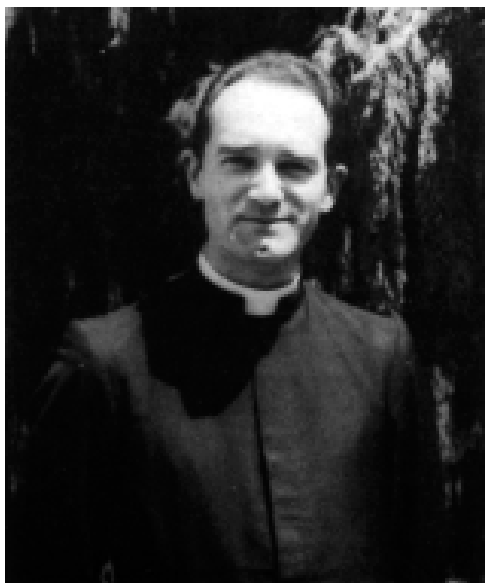
sobre los miembros de la Fraternidad y sobre sus fieles, sino también sobre las otras realidades “tradicionales” que existen fuera de la Fraternidad. Si existiese una jurisdicción de suplencia tal como la concibe la Fraternidad, esta debería lógicamente corresponder -de igual manera- a “*todos los obispos y todos los sacerdotes fieles a la tradición*”, como lo reconocen las *Ordenanzas* (pág. 6). No se ve entonces porqué todos deberían someterse a los Tribunales de la Fraternidad, y no a los que podrían crear -con la misma autoridad- otros Institutos tradicionalistas<sup>(38)</sup>; ni tampoco porqué los “religiosos” extraños a la Fraternidad deberían someterse -por ejemplo, para la dispensa de los votos- al “obispo para los religiosos” instituido por la misma Fraternidad, cuando los miembros de la Fraternidad deben dirigirse al superior general (*Ordenanzas*, pág. 37). Nos preguntamos en virtud de qué, el obispo para los religiosos, Mons. de Galarreta, tendría más poderes que el superior de los dominicos de Avrillé o que el de los capuchinos de Morgon, por ejemplo, para conceder un “indulto de secularización” a los frailes de dichos conventos (en realidad, ninguno de ellos tiene poder para concederlo). La única respuesta posible es que la Fraternidad San Pío X, aunque lo niegue de palabra y en los principios<sup>(39)</sup>, de hecho considera su propia jerarquía interna como la verdadera jerarquía de la Iglesia.

### **La Fraternidad intenta justificar la posición propia con la autoridad de Mons. Lefebvre, presuponiendo falsamente su infalibilidad**

Hemos visto como la institución de una jerarquía paralela y de verdaderos tribunales eclesiásticos

38) Esta objeción es expuesta por Orlando Fedeli, de la siguiente manera: “Pregunto: ¿porqué este sacerdote, si es un sacerdote fiel, ¿no tendría la misma autoridad de suplencia que el sacerdote superior de distrito? Las condiciones serían las mismas, e incluso podría estar más capacitado, si fuese experto en cuestiones canónicas o estuviese mejor informado. Si se admite la argumentación y se es consecuente, algunos sacerdotes podrían igualmente constituirse para suplir la autoridad de la Rota, que depende directamente del Papa. ¿Qué autoridad se los impedirá? Ya se ha abierto la puerta, quizás sin darse cuenta, al subjetivismo, al establecer autónomamente las nuevas autoridades de suplencia; el camino está abierto para que cualquier persona que se considere fiel pueda organizar su propio tribunal supletorio, siguiendo este ejemplo y apoyándose en los mismos argumentos”. E incluso: “Finalmente, ¿porqué solo la Fraternidad tendría ahora el derecho de instituir un tribunal con los poderes de la Rota? Y quien haya concedido este derecho y poder a la Fraternidad, ¿porqué no lo conferiría a otros? ¿Quién nombró a los miembros de la Comisión canónica San Carlos Borromeo, dándoles un derecho y poder que solo el Papa puede dar? Ya que los jueces eclesiásticos son vicarios del Papa, como hemos visto, hablan y emiten sentencias en nombre del Papa; ¿en nombre de quien emiten sus sentencias los jueces de la Comisión canónica San Carlos Borromeo?”.

39) Hay que reconocer que Mons. Tissier rechaza, en principio, esta tesis: “El error por exceso -dice en la alocución del 10 de marzo de 1991-, es decir: todos los obispos o casi todos han apostatado de la fe católica, de manera que ellos no la predicán más, entonces no hay una jerarquía legítima; no hay Papa, ni obispos legítimos en la Iglesia. Y entonces la verdadera jerarquía católica, la única, es Monseñor Lefebvre, los cuatro obispos, los superiores de distrito, los priores y sus vicarios. ¡Esa es la jerarquía de la Iglesia! Es el clero de la Tradición en esa organización jerárquica aparente. ¡Será necesario por lo demás que algún obispo sea elegido Papa, y esto completará la apariencia jerárquica! Es lo que ciertas sectas no han dudado en hacer, chocando contra este obstáculo. Y esto es falso por cierto, nosotros rechazamos este análisis y sus consecuencias” (pág. 104). Sin embargo, si la Fraternidad San Pío X siempre rechazó el sedevacantismo (y, a fortiori, el conclavismo) en teoría, en la práctica se comporta no solo como si la jerarquía de la Iglesia no existiera más; sino también como si tuviese el poder de suplantarla. En este sentido, tiene razón la Fraternidad San Pedro al escribir: “Esta actitud presupone un sedevacantismo práctico. (...) Sería bueno que las autoridades de la Fraternidad San Pío X admitiesen en público lo que otros (¡y no de menor importancia!) reconocen en privado, naturalmente, solo entre íntimos” (*Sobre la consagración episcopal contra la voluntad del Papa, con aplicación a las consagraciones conferidas el 30 de junio por Mons. Lefebvre, ensayo teológico colectivo de miembros de la Fraternidad San Pedro, bajo la dirección del R.P. Bisig*, pág. 23. Citado por Mercury, pág. 39). Es lo que decía Mons. Guérard des Lauriers cuando definía al Papa tal como es reconocido por la Fraternidad, como un “maniquí de Papa” (*Sodalitium* n° 13).



Mons. Fellay, actual superior general  
de la Fraternidad San Pío X

por la Fraternidad, son cosas de extrema gravedad; no pocos han hablado, con razón, de cisma. Ahora bien, ante una cuestión tan grave, ¿cuál es el primer argumento propuesto por Mons. Tissier de Mallerai en *Cor Unum* para demostrar la legitimidad de los tribunales de la Fraternidad? “Monseñor Lefebvre (...) -escribe- ha previsto la creación de la Comisión canónica, para resolver en particular los casos matrimoniales después de un primer juicio hecho por el Superior de Distrito. La autoridad de nuestro Fundador es suficiente para que nosotros aceptemos estas instancias, de la misma manera que aceptamos las consagraciones episcopales de 1988” (*Cor Unum*, pág. 37, *Status quaestionis*). No es la primera vez que Mons. Tissier hace declaraciones de este género, y justamente respecto de consagraciones episcopales. Ya hemos dicho en *Sodalitium* lo que hay que pensar de tales “cándidas admisiones”<sup>(40)</sup> de Mons. Tissier, o de otros representantes de la Fraternidad<sup>(41)</sup>. Ellos restringen al extremo la infalibilidad del Papa, mientras que no ponen límites a la de Mons. Lefebvre. Así, Mons. Tissier -como ya hemos escrito- “sustituye como criterio de catolicidad un obispo al Papa. (...) De ese modo, Mons. Tissier revoluciona totalmente la divina constitución de la Iglesia, oponiendo el carisma de una (supuesta) santidad al de la autoridad papal”. El texto de Mons. Tissier que estamos comentando -contemporáneo del que denunciábamos en su momento, son ambos de 1998- confirma desgraciadamente la tendencia “carismática”

de la Fraternidad, pero ciertamente no aporta un argumento suficiente para legitimar sus tribunales, a pesar del respeto y la estima que se pueda tener por Mons. Lefebvre.

### **La Fraternidad intenta justificar la posición propia negando usurpar los poderes del Papa. En realidad, esta se opone al primado de jurisdicción del Papa**

En su artículo publicado en *Cor Unum*, Mons. Tissier intenta justificar la “legitimidad (...) de nuestros tribunales matrimoniales”. Pero, ¿cómo no sorprenderse de las pocas líneas consagradas a la que parece la primera e insuperable dificultad: haciendo esto, la Fraternidad no usurpa un poder que corresponde al Papa por derecho divino? Mons. Tissier se limita a responder: “Es cierto que nuestras sentencias en tercera instancia reemplazan a las sentencias de la Rota Romana, que juzga en nombre del Papa como tribunal en tercera instancia. Pero no es una usurpación de poder de derecho divino del Papa, ya que la reserva de esta tercera instancia al Papa es solamente de derecho eclesiástico!” (*Cor Unum*, IV, 5, pág. 43).

El entusiasmo de los signos de exclamación no puede ocultar la debilidad de la respuesta del presidente de la Comisión canónica de la Fraternidad. Puede ser que, históricamente, la Santa Sede se haya reservado tardíamente el último grado de juicio en los procesos matrimoniales, y entonces por derecho eclesiástico; exactamente como impuso poco a poco la obligación del mandato romano para las consagraciones episcopales, *transeamus*. El punto en cuestión es más bien el siguiente: atribuyéndose poderes puramente jurisdiccionales y de gobierno fuera del Papa (e incluso contra él, suponiendo la legitimidad de Juan Pablo II), ¿la Fraternidad no viola el primado de jurisdicción del Papa, que es de derecho divino? La respuesta no puede ser sino afirmativa.

Ante todo recuerdo lo que ya se dijo respecto del canon 1569 § 1, conservado tal cual por el nuevo código (canon 1417 § 1). Dice: “**Por razón del Primado del Romano Pontífice, puede cualquier fiel en todo el orbe católico llevar o introducir ante la Santa Sede una causa, para que la juzgue, sea contenciosa o criminal, en cualquier grado del juicio y cualquiera que sea el estado del pleito**” (cf. Concilio Vaticano I, Const. dogmática *Pastor aeternus*, Denz. Sch. 3063).

40) *Sodalitium* n° 47, diciembre de 1998, pág. 83. Ver también lo que Mons. Tissier escribió al Padre Berger el 25 de septiembre de 1993, en *Sodalitium* n° 38, pág. 70.

41) *Sodalitium* n° 50, junio-julio 2000, págs. 40-41.



Ahora bien, al reemplazar las sentencias de la Fraternidad el juicio en tercera instancia <sup>(42)</sup>, en las causas matrimoniales, de la Rota Romana (es decir, el tribunal de la Santa Sede), se impide a los fieles llevar su causa al juicio de la Santa Sede.

Por consiguiente, la institución de los tribunales de la Comisión canónica de la Fraternidad para reemplazar a los de la Santa Sede, atenta contra el primado del Romano Pontífice.

Ahora bien, el primado de jurisdicción corresponde al Romano Pontífice por derecho divino (Denz. Sch. 3059).

**Luego, la institución de los tribunales de la Fraternidad es contraria al derecho divino y no solo al derecho eclesiástico, por lo que no puede ser justificada ni siquiera en caso de necesidad.**

Es posible llegar a la misma conclusión a través de un razonamiento todavía más radical; es decir, haciendo abstracción de la cuestión del recurso a la Santa Sede. En efecto, la Fraternidad podría renunciar a suplantar a la Rota y limitarse a reemplazar a los tribunales diocesanos: ¿sería posible hacerlo sin negar de hecho el primado de jurisdicción del Sumo Pontífice (aunque la sede esté vacante o, con mayor razón, ocupada)? Pensamos que no.

En efecto, *“El Romano Pontífice, Sucesor de San Pedro en el primado, posee no solamente un primado de honor, sino también un supremo y pleno poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, tanto en lo que concierne a la fe y a la moral, como en lo que concierne a la disciplina y al gobierno de la Iglesia dispersa en el mundo entero. Este poder es verdaderamente episcopal, ordinario e inmediato, tanto sobre todas las iglesias y cada una de ellas, como sobre todos los pastores y fieles y cada uno en particular, (poder) independiente de cualquier autoridad humana”* (can. 218; cf. Vaticano I, Const. dogmática *Pastor æternus*, Denz. S. 3059-3064). En consecuencia, él es *“juez supremo en todo el mundo católico”* (can. 1597; cf. Denz. Sch. 3063).

Ahora bien, los jueces de la Fraternidad pretenden tener una jurisdicción -aunque de suplencia- fuera, e incluso contra quien detenta el pleno poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, y juzgar haciendo abstracción del juez supremo, e incluso contra su juicio. En consecuencia, los tribunales de la Fraternidad,

sus jueces, sus sentencias, hacen vano y reducen a una vana palabra el primado de jurisdicción del Papa.

Para comprender mejor este argumento, señalaré que si los obispos diocesanos o metropolitanos son jueces en la Iglesia, es porque han recibido del Papa una diócesis o arquidiócesis para gobernar. Instituir tribunales que suplanten a los tribunales diocesanos independientemente de una autorización del juez supremo, el Papa, equivale a atribuirse la autoridad del obispo diocesano: *“en la Iglesia (es dogma de fe) el Papa tiene la plenitud de la jurisdicción: no existe otra jurisdicción fuera de la suya; todo acto jurisdiccional, en cualquier nivel, no es sino una parte del todo que es ejercido en su nombre y, en última instancia, en nombre de Jesucristo que se la ha conferido (al Papa), y debe ejercerse en armonía con el todo y de la manera establecida. La autoridad viene de Dios al Papa y, a través de él, a los obispos y, a través de ellos, a los jueces; es por eso que, en última instancia, toda jurisdicción es papal”* (O. Fedeli). Análogamente, las sentencias civiles son dictadas por el juez en nombre de la autoridad pública. Un tribunal y sentencias dictadas por particulares -individualmente o asociados entre ellos-, son inconcebibles e inadmisibles. Ahora bien, es justamente lo que hace la Fraternidad en la Iglesia, como lo subraya Orlando Fedeli: *“ni la Escritura ni el Magisterio han enseñado que personas privadas puedan instituir una justicia ad hoc...”*

**Una instancia. La Fraternidad intenta justificar su posición afirmando que la jurisdicción no viene del Papa (sino de la consagración episcopal). Pío XII refuta este error**

Los teólogos de la Fraternidad podrían objetar a nuestro razonamiento que, aunque el Papa goza del primado de jurisdicción por el que todos deben estarle sometidos, es posible recibir la jurisdicción sin pasar por el Papa. Es lo que sostiene, por ejemplo, quien es a la vez el inspirador de la Comisión canónica y uno de sus tres miembros (con Mons. Tissier y el Padre Laroche): el Padre François Pivert. En efecto, él ha escrito: *“en vez de decir que en la Iglesia todo poder deriva del papa, sería más verdadero decir que todo poder debe estar sometido al papa”* <sup>(43)</sup>. El autor de esta afirmación no parece -al menos en su artículo- darse cuenta realmente de lo que ha escrito,

42) El juicio en primera instancia corresponde al ordinario del lugar (normalmente el obispo diocesano: can. 1572, can. 1419 n.c.). El juicio en segunda instancia corresponde normalmente al metropolitano (can. 1594, can. 1438 n.c.) del cual el obispo es sufragáneo. El juicio en tercera y última instancia corresponde al Papa (can. 1597, can. 1442 n.c.): *“El juez supremo para todo el orbe católico es el Romano Pontífice, quien administra justicia ya por sí mismo, ya por los tribunales por él constituidos, ya por sus jueces delegados”*.

43) F. PIVERT, *Obispos de adopción*, en *Fideliter*, n° 123, mayo-junio de 1998, págs. 13-17. La frase citada se halla en la pág. 16 de este número de *Fideliter*, dedicado al décimo aniversario de las consagraciones episcopales realizadas por Mons. Lefebvre y Mons. de Castro Mayer. *“El autor de este artículo -escribe Fideliter-, el Rdo. Padre François Pivert, jurista, es miembro de la Comisión canónica de la Fraternidad Internacional (sic) San Pío X”*. La posición del Padre Pivert parece ser la de la Fraternidad San Pío X, aún si algunos de sus miembros no la aceptan (cf. Padre Mercury, op. cit., págs. 32-32, 35-38).



ni parece justificar su posición. Me contentaré con probar que es falsa.

Los Padres del Concilio de Trento discutieron largamente para decidir si el poder de jurisdicción del obispo venía directamente de Dios (por la consagración episcopal), o bien a través del Papa. En el primer caso, tendría razón el Padre Pivert (en la Iglesia todo poder de jurisdicción no deriva del Papa, aunque le debe estar sometido); en cambio en el segundo, estaría equivocado. En mi respuesta al Padre Belmont ya he tratado ampliamente la cuestión; a ella remito entonces al lector <sup>(44)</sup>.

En lo que respecta a este estudio, bastarán dos citas; una en favor de la tesis de Pivert, la otra en contra. En favor, y siguiendo a los galicanos de todo género, está la enseñanza del Concilio Vaticano II (*Lumen gentium*, n° 21): “*La consagración episcopal confiere, además del oficio de santificar, el de enseñar y gobernar; los cuales no obstante, por su naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con el jefe del colegio y sus miembros*” (cf. también el can. 375 § 2 del nuevo código). El poder de jurisdicción, a pesar del primado, no vendría entonces del Papa, ¡exactamente como sostiene el Padre Pivert! Pero, contra su posición (y del Vaticano II) existen numerosos textos del magisterio ordinario. Citaré solo uno, la Encíclica *Ad apostolorum principis*, del Papa Pío XII (29 de junio de 1958): “***Pues la jurisdicción viene a los Obispos únicamente por medio del Romano Pontífice, como ya hemos tenido ocasión de recordar en la Carta Encíclica ‘Mystici Corporis’: ‘Los Obispos... en lo que mira a sus propias diócesis, son verdaderos pastores, que guían y rigen en nombre de Cristo el rebaño asignado a cada uno. Sin embargo, no son plenamente independientes, ya que están sometidos a la legítima autoridad del Romano Pontífice y si gozan de la potestad ordinaria de jurisdicción, es porque les es comunicada inmediatamente por el mismo Sumo Pontífice’. Doctrina que hemos también tenido ocasión de recordar en la Carta, a vosotros destinada, ‘Ad sinarum gentem’: ‘La potestad de jurisdicción, que es conferida directamente al Sumo Pontífice por derecho divino, les viene a los Obispos del mismo derecho, pero solamente a través del Sucesor de San Pedro’...***”. En consecuencia, el Papa no solo tiene el primado de jurisdicción

en el sentido de que nadie puede usar de la jurisdicción sin su consentimiento, sino que tiene el primado de jurisdicción también en el sentido de que todo poder de jurisdicción deriva de él. Ahora bien, el Papa (dejando de lado la cuestión de la legitimidad de Juan Pablo II) nunca ha concedido jurisdicción a los Obispos consagrados por Mons. Lefebvre y como la jurisdicción del Obispo no puede pasar sino por el Papa, se sigue que estos Obispos no tienen jurisdicción y todavía menos, entonces, la Comisión canónica de la Fraternidad San Pío X. Por lo tanto, atribuirse una jurisdicción -como hace la Comisión canónica en cuestión- equivale a negar en la práctica el Primado y realizar un acto cismático.

### **Otra instancia. La Fraternidad intenta justificar su posición afirmando que la jurisdicción no viene del Papa sino de la Iglesia, por suplencia. Refutación de esta tesis**

Acabamos de demostrar que “*el Romano Pontífice es la fuente de todo poder de jurisdicción en la Iglesia*” <sup>(45)</sup>. Pero, ¿no podemos hallar en la doctrina de la jurisdicción de suplencia una excepción a este principio? Toda jurisdicción -ordinaria o delegada- viene del Romano Pontífice, de acuerdo; pero no la jurisdicción de suplencia, que viene de la Iglesia: *¡Ecclesia suplet!* Y es justamente a la jurisdicción de suplencia que se refiere la Fraternidad, para justificar el poder de jurisdicción que se atribuye.

Hemos visto dentro de cuales límites y en qué sentido se puede recurrir a la jurisdicción de suplencia en la actual situación de la Iglesia, valiéndonos de un excelente artículo del Padre Belmont. En el can. 209 (nuevo código, can. 144), el código de derecho canónico prevé explícitamente la suplencia de jurisdicción en los casos de error común y en la duda positiva y probable, a los cuales puede agregarse el peligro de muerte (can. 882; nuevo código, can. 976). “*Así, en todo el código de derecho canónico -admite un sacerdote de la Fraternidad-, solamente dos cánones tratan de la jurisdicción de suplencia*”; “*la jurisdicción de suplencia nos coloca en una situación muy particular: el sacerdote al que el fiel se dirige no goza de la jurisdicción ordinaria [en nuestro caso, tampoco existe una duda positiva y probable de que tuviera la jurisdicción, n.d.r.]. El acto sacramental entonces realizado*

44) F. RICOSSA, *Las consagraciones episcopales en la situación actual de la Iglesia. Respuesta al artículo del Padre H. Belmont (Sodalitium n° 44, Centro Librario Sodalitium, Verrua Savoia)*. El Padre Belmont sostenía inicialmente la misma tesis que el Padre Pivert, pero sacaba una conclusión completamente opuesta: si la jurisdicción viene al obispo de la consagración episcopal, una consagración sin el consentimiento del Papa implica entonces la atribución de una jurisdicción sin sumisión al Papa; por lo tanto, cisma. Después el Padre Belmont abandonó esta postura, pero oponiéndose todavía doctrinalmente a las consagraciones.

45) *Enciclopedia Cattolica*, Cité du Vatican, 1953, vol. X, col. 18, voz *Primado de San Pedro y del Romano Pontífice*, por Mons. Antonio Piolanti.

es sin embargo lícito, sea porque el fiel no conoce la situación del ministro: es el error común; sea porque hay una necesidad urgente e imperiosa del sacramento: es el peligro de muerte". Al admitir que el error común no existe normalmente en nuestro caso ("las personas que se dirigen habitualmente a nosotros saben que los obispos nos niegan todo poder"), no queda entonces más que el peligro de muerte<sup>(46)</sup>. ¡Pero ningún sacerdote tradicionalista limita su ministerio a las salas de reanimación! Mons. Lefebvre invocaba entonces, lo hemos visto, el peligro de muerte espiritual en el que se hallan todos los fieles a causa del modernismo. Que la situación actual justifica el ministerio sacerdotal sin jurisdicción, estamos perfectamente de acuerdo; pero que uno pueda basarse en el derecho canónico para legitimar este ministerio, sea extrapolando totalmente el can. 882 (peligro de muerte... espiritual), sea invocando el can. 20<sup>(47)</sup>, ¡nos parece absolutamente infundado! ¿Y qué decir, además, cuando la suplencia no es invocada para hacer lícitos (o incluso válidos) los actos sacramentales, sino

para reemplazar el poder legislativo o judicial de la Iglesia, considerado no fiable? Con razón, Fedeli (op. cit.) objeta: "si se aplica el criterio empleado en la creación de las comisiones, no habría en la práctica ningún organismo de gobierno en la Iglesia que sea legítimo y que no deba ser suplido, sería necesario reemplazar a la misma Iglesia. ¿Adonde iremos a parar?"; "si esto [el estado de necesidad en el que se hallan los fieles] nos da el derecho de constituirnos como alternativa de un juicio válido asumiendo una autoridad supletoria, no veo porqué no podríamos igualmente, y con mayor razón, asumir todos los órganos de gobierno, especialmente litúrgicos y doctrinales, ya que en este caso la necesidad y el derecho en justicia a estar seguros incluye no solamente a las personas que tienen problemas matrimoniales, sino a toda la Iglesia y a la humanidad, que tiene el derecho de conocer la verdadera doctrina católica que no es profesada por la autoridad, que sin embargo reconocemos como tal. Las nulidades [de matrimonio] no son más que un aspecto parcial

46) H. MERCURY, op. cit., págs. 41-42.

47) El Padre Pivert, seguido por Mons. Tissier de Mallerais (punto III de su artículo publicado por *Cor Unum*), invocan el can. 20 (nuevo código, can. 19) como "base doctrinal de nuestros poderes de suplencia". El can. 20 serviría, de hecho, para extender casi hasta el infinito los casos bien limitados de jurisdicción supletoria previstos por el código: "Cuando sobre una materia determinada no existe prescripción expresa de la ley, ni general ni particular, la norma debe tomarse, a no ser que se trate de aplicar alguna pena, de las leyes dadas para casos semejantes; de los principios generales de derecho aplicados con equidad canónica; del estilo y práctica de la Curia Romana; del parecer común y constante de los doctores" (n. can. 19). ¿Se puede apoyar en este canon la institución de tribunales eclesiásticos no reconocidos por Roma? Es lo que pretende Mons. Tissier (*Cor Unum*, pág. 41, punto III), apoyándose: a) en los lugares paralelos y la analogía legal; b) en la jurisprudencia de la Curia Romana; c) en la epiqueia y la opinión de los juristas. En cuanto a los "lugares paralelos" y la "analogía legal", Mons. Tissier invoca "el caso del recurso imposible al obispo para dispensar de un impedimento dirimente de derecho eclesiástico: ante el 'peligro de muerte' o 'quando omnia sunt parata ad nuptias', el párroco o el confesor pueden dispensar (can. 1044-1045). Lo que significa que la Iglesia les da, por suplencia, jurisdicción ad casum" (*Cor Unum*, pág. 41, III, 2, a). Orlando Fedeli le responde: "Para poder aplicar la analogía legal y para que los casos sean realmente paralelos, es necesario que haya similitud de materia (...) entre la norma que se supone contenida implícitamente en el Código, y aquella a la que se hace referencia. En los cánones 1044 y 1045 la dispensa concedida por el obispo está directa e inmediatamente ordenada al ejercicio de la 'potestas sacra' (en el caso urgente para recibir la gracia sacramental y morir en estado de gracia o recibir válidamente el sacramento, cuando es imposible esperar sin grave inconveniente la demora causada por el recurso a la autoridad: 'ad casum', el legislador en uso de su poder, concede la facultad necesaria para obrar válidamente). Por el contrario, en el caso de los tribunales se trata de un acto judicial de la 'potestas regiminis', del poder de gobierno, en el cual no está implicada directa e inmediatamente la recepción de la gracia sacramental o el ejercicio de la 'potestas sacra'. Las personas implicadas en un juicio canónico pueden estar y permanecer en estado de pecado mortal, pueden también quedarse célibes o cambiar de estado, y el juez puede ser un laico. El proceso ante un tribunal es un acto jurídico sin conexión necesaria con la recepción de la gracia urgentemente para salvar un alma, o con un sacramento; el código establece una suplencia ordenada a los actos sacramentales: 'potestas sacra'; suplencia que permite, a favor de terceros, actualizar una potencia que el titular poseía ya al menos radicalmente. Los actos propios de la 'potestas regiminis', de gobierno, son muy diferentes: no están directamente ligados al ejercicio sacramental, ni este poder se adquiere sin haber sido designado para ser capaz de obrar en nombre del Juez Supremo; ser ministro sagrado no habilita al ejercicio del poder judicial. El ejercicio válido de este poder no sacramental requiere, según el derecho, una designación por parte del único que lo posee ipso jure en plenitud; de hecho, existen jueces laicos y su poder, a causa del nombramiento, es ejercido ipso jure en nombre de quien los nombró y dentro de los límites establecidos por el derecho (...) Al obrar como juez, no se actualiza una potencia que se posee habitualmente, sino [que se obra] por designación, y solamente por designación de quien es el único que posee la plenitud del poder en la Iglesia (...). Para saber si en los actos de un tribunal canónico se puede hallar una analogía con aquella suplencia que la Iglesia ejerce en los actos de los que hablan los cánones 1044-1045, es necesario guiarse por un verdadero lugar paralelo, que se halla en cuanto estipula el canon 144, que regla la suplencia en el ejercicio de la jurisdicción y que no prevé ninguna suplencia posible para ejercer el poder legislativo o judicial. (...) Resumiendo: no existe lugar paralelo, legalmente hablando, ya que no hay semejanza de materia (...) Por lo tanto, este presunto lugar paralelo para poder obrar como tribunal canónico de suplencia es inaplicable, ya que se pasa de una suplencia para el ejercicio de un poder (potestas sacra) en el foro interno, que se posee radicalmente, a una suplencia por analogía del ejercicio de la potestas regiminis de gobierno en el foro externo; la cual no puede poseerse de ningún modo sin designación (...)". El Sr. Fedeli opone el mismo argumento a aquel tomado de la jurisprudencia de la Curia Romana (entre otras cosas, *Cor Unum* equivoca la fecha al citar un documento de interpretación del código). El último argumento está fundado en la epiqueia y la opinión de los doctores. La inconsecuencia del razonamiento salta a la vista de cualquier lector: después de haber demostrado, citando al Padre Capello, que en la situación actual no estamos obligados a recurrir "a los tribunales modernistas", Mons. Tissier concluye abusivamente: "pero si esta obligación cesa, ¿no cesa la obligación de recurrir a algún tribunal!" (*Cor Unum*, III, 2, c, pág. 42). A condición, agregamos nosotros, ¡de que ese otro tribunal exista realmente! Sin que estemos autorizados a crear tribunales ilegales, no teniendo autoridad...

del problema. Hay muchos derechos en justicia de muchas personas que piden ser protegidas de los errores, no solo personalistas, sino en todos los dominios; pero de ahí a sentirse llamado e investido de poder judicial para satisfacer y resolver este vacío real” ¡hay distancia!

Pero esta crítica de la posibilidad de aplicar la jurisdicción de suplencia para legitimar la Comisión canónica de la Fraternidad, puede ser sostenida con un argumento más radical. En efecto, ¿cuál es el verdadero sentido de la frase *Ecclesia supplet*, la Iglesia suple? Veamos como explica este adagio jurídico Mons. Tissier de Mallerais, en su conferencia del 10 de marzo de 1991: “se trata de suplir el defecto de jurisdicción del sacerdote o del obispo, *Ecclesia supplet*. No será ni el Papa, ni la jerarquía diocesana que otorgará el rebaño, sino la misma Iglesia, Nuestro Señor Jesucristo, como cabeza de su Cuerpo Místico, que va a sancionar, que va a declarar en suma el caso de necesidad de los fieles” (op. cit., pág. 100). Y también: “es el caso en que la iglesia va a conceder directamente la jurisdicción al sacerdote, sin pasar por los diversos grados de la jerarquía; será el mismo Cuerpo Místico de Nuestro Señor, Nuestro Señor mismo en cuanto jefe de su Iglesia, que va a otorgar en los casos particulares, jurisdicción a los sacerdotes”; y después de citar los tres casos previstos por el código (error común, duda positiva y peligro de muerte), el obispo de la Fraternidad repite: “en ese caso, la Iglesia abre todas las puertas de su misericordia y otorga jurisdicción al sacerdote. Es la misma Iglesia, sin pasar por la jerarquía” (op. cit., pág. 95). Según el presidente de la Comisión canónica la “Iglesia”, que en ciertos casos particulares concede la jurisdicción al sacerdote desprovisto de la misma, es totalmente distinta de la Jerarquía en cuanto tal y debe identificarse, sea con el Cuerpo Místico de Cristo (Nuestro Señor unido a todos los fieles), sea con Cristo Jefe de la Iglesia. Esta interpretación del término “Iglesia” empleado por el código de derecho canónico, es completamente falsa (<sup>48</sup>).

Hablando de jurisdicción de suplencia, el cardenal Staffa escribe, por ejemplo, en la *Enciclopedia Católica*: “el canon 209 elimina, en efecto, toda incertidumbre [sobre la posibilidad de una suplencia], declarando que **la Iglesia (es decir, el Legislador Supremo)** suple la jurisdicción, tanto para el foro externo como para el foro interno: a) en caso de error común; b) en la duda positiva y probable tanto de derecho como de hecho” (<sup>49</sup>). El cardenal Palazzini no se expresa de otro modo: la jurisdicción de suplencia, escribe, “es la jurisdicción que no se posee por revestir un cargo, ni es conferida por delegación del Superior, sino que es dada por el derecho mismo, o sea por la Iglesia y por el Supremo Legislador eclesiástico, en el mismo momento en que ella se ejerce (ad modum actus), por el bien de las almas, que de otra manera, sin culpa de su parte, sufrirían perjuicio” (<sup>50</sup>). Por lo tanto, cuando el código atribuye la jurisdicción *in abstracto* a la Iglesia, *in concreto* la atribuye al Supremo Legislador eclesiástico; es decir, al Papa. Y es lógico, ya que las disposiciones del código (al menos las de derecho eclesiástico) ¡solo tienen valor en cuanto promulgadas justamente por el Supremo Legislador, el Papa! En consecuencia, la jurisdicción de suplencia de que habla el código no tiene nada que ver con la “suplencia” imaginada y descripta por Mons. Tissier de Mallerais, el cual le da como característica particular el hecho de obrar “sin pasar por la jerarquía”, y entonces no más por el Papa. La razón por la que Mons. Tissier se obstina en negar que el Papa sea la fuente de la jurisdicción de suplencia reivindicada por la Fraternidad, es evidente: Juan Pablo II, reconocido como Papa por Ecône, les niega toda jurisdicción, como el mismo Mons. Tissier admite. Por lo tanto, si es el Papa quien concede la jurisdicción de suplencia, incluso mediante el derecho promulgado por él mismo, ciertamente no se puede pretender que Juan Pablo II concede a la Fraternidad San Pío X, exco-mulgada por él mismo, poderes tan exorbitantes que además les niega explícitamente (<sup>51</sup>). También esta instancia de la Fraternidad queda entonces refutada:

48) Lo reconoce también el Padre Mercury, de la Fraternidad San Pío X (op. cit., pág. 44).

49) DINO STAFFA, voz *Jurisdicción*, en *Enciclopedia Cattolica*, Ciudad del Vaticano, 1951, vol. VI, col. 786.

50) F. ROBERTI Y P. PALAZZINI, *Dizionario di teologia morale*, Ed. Studium, Roma, 1968, vol. I, pág. 740.

51) Según el Padre Mercury, el poder de jurisdicción supletoria “es otorgado tácitamente por la autoridad legítima de la Iglesia” (pág. 49), aunque niega que sea concedido en el caso de “comisiones canónicas”. No ignora la objeción que se le podría formular: “no faltarán personas que objetan que el actual poseedor de la Sede Apostólica podría, en consecuencia, quitarnos esta jurisdicción, ya que depende de él”. El Padre Mercury responde a esta objeción -que es también la nuestra- en forma discutible: “El Espíritu Santo asiste a la autoridad, para evitar toda decisión tiránica opuesta a la obligación de cada uno, de tomar los medios indispensables para salvarse” (op. cit., pág. 46). No es el principio aquí afirmado lo contestable, sino su aplicación a Juan Pablo II; el cual, de hecho, no solo niega la jurisdicción a la Fraternidad, sino que también niega a los fieles los medios de salvación (y esto, según el mismo juicio de la Fraternidad que aquí compartimos: es justamente este rechazo objetivo de realizar el bien/fin de la Iglesia, la salvación de las almas, el motivo por el cual Juan Pablo II no es y no posee la autoridad).



los sacerdotes de la Fraternidad no gozan de la jurisdicción de suplencia que les atribuyen Mons. Tissier de Mallerais y el Padre Pivert <sup>(52)</sup>.

### Una última posibilidad: ¿la jurisdicción podría venir de los fieles?

Si la jurisdicción que la Fraternidad pretende poseer no viene de arriba (Cristo, Iglesia, Papa), se podría emitir la hipótesis de que tiene su origen abajo, en los fieles. Si la Fraternidad no lo afirma explícitamente, no faltan frases infelices que lo hacen creer, como lo reconoce con honestidad un sacerdote de la misma Fraternidad: *“en su carta circular del 30 de junio de 1994 <sup>(53)</sup>, el Padre Berger señalaba con razón esta imposibilidad: ‘la tesis sobre la jurisdicción que hace autoridad en la Fraternidad San Pío X es la de Mons. Tissier, expresada en su conferencia de París, en marzo de 1991 (...) Jurisdicción de suplencia en que, finalmente, es el pedido de los fieles que nos da jurisdicción, caso por caso. (...) Muy embarazosa por su lado democrático, no veo como conciliarla con la estructura jerárquica de la Iglesia, en la que el apostolado está necesariamente fundado en la misión que no puede venir sino de arriba’. Este recuerdo no es inútil. (...) Es claro que la jurisdicción de suplencia no tiene su origen en el fiel. En la alocución mencionada por nuestro ex-colega [o sea, el Padre Berger,*

*que salió de la Fraternidad San Pío X y aceptó el Vaticano II, n.d.r.], Mons. Tissier de Mallerais usaba entonces de expresiones impropias cuando afirmaba: ‘es una jurisdicción que depende esencialmente de los fieles y no del sacerdote’ y ‘se puede decir que ustedes ‘dan’ al sacerdote la jurisdicción necesaria’ <sup>(54)</sup>. Sodalitium (nº 26, dic. 1991) ya había denunciado también estas “expresiones impropias”, en un artículo (que ya he citado) con título significativo: “La autoridad del obispo, ¿viene a través del Papa o de los fieles?”. Me parece oportuno transcribir tal cual una parte de este artículo, que refería expresiones de Mons. Lefebvre todavía más impropias que las de Mons. Tissier: “Cuando, en junio de 1988, Mons. Lefebvre consagra cuatro obispos sin mandato romano, viola la primera condición de licitud (declarar que Juan Pablo II no es Papa verdaderamente); pero no la segunda: no atribuye a sus Obispos ninguna jurisdicción ordinaria. Por eso, la lectura de tres documentos póstumos de Mons. Lefebvre, publicados en ‘Fideliter’ (nº 82, julio-agosto de 1991, págs. 13-17) nos ha dejado estupefactos. Se trata de una carta a Mons. de Castro Mayer del 4 de diciembre de 1990 y de otra, al Padre Rifán del 20 de febrero de 1991 con una ‘Nota respecto del nuevo obispo, futuro sucesor de Mons. de Castro Mayer’. En ellas, Mons. Lefebvre precisa los poderes de que gozará el futuro consagrado (Mons. Licinio Rangel, efectivamente*

52) El lector podría preguntarse cual es nuestra postura al respecto. En efecto, no solo los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X sino también todos los opositores al Vaticano II, están privados de jurisdicción ordinaria y delegada. Si tampoco podemos invocar la jurisdicción supletoria -que viene del Papa-, ¿cómo defender la licitud de nuestro ministerio? El Padre Guérard des Lauriers ha examinado varias veces este problema, particularmente en *Consacrer des évêques?* (suplemento de *Sous la bannière*, nº 3, enero-febrero de 1986, citado por *Sodalitium* (nº 16, pág. 16 y ss.). Podemos resumir esta posición en los siguientes puntos:

- a) En la Iglesia existen el poder de orden y el poder de jurisdicción.
- b) Estos dos poderes, que están íntimamente vinculados por una mutua relación y que normalmente deben ejercerse conjuntamente, son sin embargo realmente distintos y pueden excepcionalmente ejercerse por separado.
- c) La Sede Apostólica está actualmente formalmente (pero no materialmente) vacante.
- d) Del hecho de la vacancia formal de la Sede, se deduce que, faltando el Papa en acto, fuente de la jurisdicción eclesiástica (y también el resto de la jerarquía dotada de jurisdicción ordinaria o delegada), nadie es actualmente depositario de jurisdicción, ordinaria, delegada o suplida por el derecho; no solo entre los fieles del Vaticano II sino también entre sus oponentes. Subsiste todavía la jerarquía según la jurisdicción, pero potencial y materialmente, lo cual asegura la continuidad de la Iglesia.
- e) El poder de orden (para la gloria de Dios con el ofrecimiento del Sacrificio, y la salvación de las almas con la administración de los sacramentos, la evangelización, etc.) no puede y no debe desaparecer; puede entonces ser lícitamente ejercido incluso por sacerdotes privados del poder de jurisdicción, según el rito (tradicional) de la Iglesia. Negar este punto, lleva a negar la continuidad de la Iglesia tal como ha sido querida por Cristo. Los obispos consagrados a este fin no gozan sin embargo del poder de jurisdicción, sino solamente del poder de orden.
- f) Se puede admitir que los obispos y los sacerdotes que ejercen de este modo el poder de orden, reciban de Cristo -*per modum actus*, es decir, de manera transitoria y para cada acto sacramental ejercido singularmente- un poder de jurisdicción supletoria. Esto vale ante todo para el sacramento de la penitencia, para el cual la jurisdicción es necesaria no solo de derecho eclesiástico sino también de derecho divino, por la naturaleza misma del sacramento.
- g) Pero esta jurisdicción supletoria se supone concedida únicamente para los actos que tienen un fundamento en el poder de orden (o para lo que es absolutamente indispensable para la continuidad de la Iglesia, cf. *Sodalitium* nº 48, págs. 14-16, nota 7, donde se cita a los teólogos Billuart y Zapelena), y no para actos de pura jurisdicción, en los que, por otra parte, no hay ningún fundamento para recibir esta jurisdicción. Como el lector puede comprobar, nuestro punto f) no difiere mucho de la posición de Mons. Tissier: en efecto, es posible admitir una suplencia de parte de Cristo. Sin embargo, negamos que sea posible admitir una tal suplencia si se reconoce en acto la autoridad de Juan Pablo II (Cristo obraría entonces por medio de Su Vicario y nunca sin él); y también negamos, incluso en la hipótesis de vacancia de la Sede Apostólica, que Cristo pueda conceder autoridad a organismos jurisdiccionales compuestos por personas privadas y desprovistos de toda autoridad, aún material (como la Comisión canónica de la Fraternidad o los cónclaves sedevacantistas; en esto, sedevacantistas y lefebvristas son movidos por la misma lógica y los mismos argumentos).



consagrado en Campos el 28 de julio de 1991). Esto es lo que escribe Mons. Lefebvre: ‘... el caso de la diócesis de Campos es más simple, más clásico, porque se trata de la mayoría de sacerdotes diocesanos y de fieles, que con el consejo del antiguo obispo, designan al sucesor y piden a otros obispos católicos que lo consagren. Es así como la sucesión de los obispos se realizó durante los primeros siglos en unión con Roma, como nosotros también lo estamos, con la Roma católica y no con la Roma modernista’ (págs. 13-14). Pueblo y clero designan al Obispo, y todo bien. Pero, ¿también le dan la autoridad y jurisdicción? Nos surge la sospecha: ‘Son el clero y el pueblo fiel de Campos, quienes se procuran un sucesor de los Apóstoles, un Obispo católico y romano, porque no pueden obtenerlo de la Roma modernista’ (pág. 14). Ya hay en Campos un ‘obispo’ nombrado por el ‘papa’ y entronizado, en su momento, por Mons. de Castro Mayer. El nuevo ‘sucesor de los Apóstoles’, ¿recibe solamente el poder de orden (para ordenar sacerdotes, confirmar, etc.) o también la jurisdicción? El poder de orden lo dan los Obispos; ¿qué dan entonces ‘el clero y los fieles de Campos’, la autoridad? Sí, la autoridad; Mons. Lefebvre habla de ‘autoridad episcopal’ (pág. 15). El nuevo obispo no es obispo residencial (pág. 16), pero tiene una jurisdicción que viene... del clero y de los fieles: ‘no tiene otro título de jurisdicción [luego, hay uno! n.d.r.] que aquel que le viene del llamado de los sacerdotes y de los fieles... que le han pedido de aceptar el episcopado’ (pág. 16). ¿Se trata de una simple autoridad de hecho, del simple poder de dar los sacramentos y guiar las almas, incluido en el poder de orden? Se puede dudar, ante la insistencia de Mons. Lefebvre (pág. 17) en hablar de ‘autoridad jurisdiccional del Obispo, que no le viene de una nominación romana sino de la necesidad de la salvación de las almas’. A este ‘sucesor de los Apóstoles’, fieles y sacerdotes deben ‘facilitarle el ejercicio de su autoridad por una generosa obediencia’ (pág. 17). Finalmente, viene una afirmación más explícita: ‘La jurisdicción del nuevo obispo no es territorial, sino personal, y tiene por fuente el deber de los fieles de salvar el alma. Si un grupo de fieles en diócesis vecinas recurre al obispo para tener un sacerdote, ellos dan -por el hecho mismo- poder al obispo para velar por la transmisión de la fe y de la gracia en ese grupo, por



Monseñor Licinio Rangel: en Campos, él anulaba los matrimonios

medio del sacerdote que les envía’ (pág. 17). ‘Un grupo de fieles da entonces poder, autoridad, jurisdicción al Obispo. Distinguir entre jurisdicción territorial y personal, no cambia la gravedad de la afirmación: un obispo castrense, por ejemplo, que tiene jurisdicción personal sobre todos los militares de una nación; y un obispo residencial, que tiene jurisdicción sobre los residentes en la diócesis, se hallan en la misma relación, respecto a la jurisdicción, ante el Papa que la da’ (Sodalitium n° 26, págs. 5-7). A esta tesis (la jurisdicción viene del pueblo), no puedo responder sino con el argumento utilizado ya hace nueve años: “Nadie da lo que no tiene: si el pueblo (o la Iglesia distinta del Papa) da el poder, es porque el pueblo o la Iglesia son la autoridad. Es la tesis jansenista del Conciliábulo de Pistoya, según la cual el poder es dado por Dios a la Iglesia (o comunidad de fieles) y por ella, a los Pastores, que son ministros de la Iglesia para la salvación de las almas. Esta tesis fue condenada como herética por Pío VI (DS 2603)” (ibidem, pág. 6).

La solución “jurisdicción de los fieles” se revela entonces todavía peor que las precedentes; no creo que sea realmente sostenida por la Fraternidad. Cuanto he escrito en este párrafo basta para evitar la tentación de seguir esta peligrosa ruta.

**Consecuencias prácticas: muchos fieles de la Fraternidad vivirán en una continua incertidumbre sobre el estado de su alma**

Cuanto hemos escrito hasta aquí es ya ampliamente suficiente para justificar la tesis de este párrafo: muchos fieles de la Fraternidad vivirán en una continua incertidumbre sobre el estado

53) Este documento fue publicado en Sodalitium n° 38, págs. 68-76, con el título *Carta circular a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X*.

54) H. MERCURY, op. cit., pág. 43.

55) Ver al respecto F. RICOSSA, 1994: *¿Año de la familia o del Andrógino primitivo?*, publicado en Sodalitium n° 36, págs. 63-66; n° 37, págs. 55-64; n° 38, págs. 42-56.

-y la salvación- de su alma. En efecto, hemos demostrado que la Fraternidad está ya estructurada, y sigue estructurándose cada vez más, de hecho, como una Iglesia independiente que debe suplir y suplantar a la Iglesia “oficial” (reconocida sin embargo como la auténtica Iglesia Católica). Para fieles que se enorgullecen -con razón- de defender el dogma “*fuera de la Iglesia no hay salvación*”, el temor de adherir a una estructura cismática no puede sino provocar una continua turbación de conciencia. Y de hecho algunos, escandalizados por el descubrimiento de la existencia de estos Tribunales, sino secretos al menos reservados, han retirado su confianza en la Fraternidad para seguir, desgraciadamente, a las “autoridades” fieles al Vaticano II. El problema de conciencia que esta evolución de la posición de la Fraternidad plantea a los fieles de Mons. Lefebvre, está agravado por el hecho de que la turbación no deriva solo ni tanto de una doctrina puramente abstracta, posiblemente fuera de la capacidad de comprensión de los fieles y privada de consecuencias prácticas, como de una posición que implica hasta la validez de los Sacramentos.

Si un simple sacerdote de la Fraternidad administra la Confirmación fundándose en los “poderes” concedidos en las “*Ordenanzas*”, por ejemplo, ¿el sacramento es válido? El confirmado y su familia pueden preguntárselo legítimamente. Pero hay más: un religioso, una religiosa, un subdiácono, “secularizados” y dispensados de sus votos por un “decreto” del obispo para los religiosos de la Fraternidad, o por Mons. Fellay, ¿están verdaderamente liberados de sus votos ante Dios? Un eventual sucesivo matrimonio, por ejemplo, ¿estará bendecido por el Señor, o se tratará de un sacrílego concubinato?

Pero el caso más grave y más corriente, es ciertamente el de las anulaciones matrimoniales “decretadas” por la Comisión canónica de la Fraternidad San Pío X...

Se trata, lo admitimos, de un problema pastoral extremadamente grave, que no nos deja indiferentes, y cuya solución es difícil sino imposible. Las críticas que formula Mons. Tissier de Mallerais a los nuevos principios teológicos y canónicos aceptados luego del Vaticano II, las hacemos nuestras y compartimos plenamente. Nuestra postura teológica no hace sino agravar, si es posible, las consecuencias deducidas por Mons. Tissier de su análisis (cf. todo el primer capítulo del estudio publicado en *Cor Unum*) de la nueva doctrina matrimonial personalista condenada bajo Pío XII, y vuelta doctrina “oficial” bajo Juan Pablo II<sup>(55)</sup>. Según Mons. Tissier, que reconoce a Juan Pablo II, las sentencias de sus Tribunales “*no pueden ser ni admitidas ni rechazadas a priori sin ser examinadas*”; y en el plano práctico se impide a los fieles “*ir a un tribunal novus ordo, por temor a que la sentencia sea nula*” (*Cor Unum*, cit., pág. 44, reglas prácticas 1 y 2). Para nosotros, que no reconocemos la autoridad de Juan Pablo II, la imposibilidad de recurrir a sus tribunales no es solamente práctica sino una cuestión de principios: no solo sus sentencias son ciertamente nulas, sino que el recurso a estos tribunales implicaría un reconocimiento práctico de la autoridad en cuestión, reconocimiento que consideramos, a la luz de la fe, inadmisibles<sup>(56)</sup>. Nos damos cuenta de todas las graves dificultades pastorales que comporta nuestra postura para los fieles cuyo matrimonio es efectiva o dudosamente nulo, y que no tienen los medios para demostrarlo legalmente<sup>(57)</sup>; pero la solución adoptada

56) Juan Pablo II, escribía el Padre Belmont en 1990, “*no habiendo roto con el estado de cisma*” instaurado por Pablo VI, “*permanece, en consecuencia, privado de la autoridad pontificia. Por lo tanto, el testimonio de la fe exige que se evite todo acto que comporte, de cualquier modo, un reconocimiento de su autoridad: nombrarlo en el Canon de la Misa o en las oraciones litúrgicas previstas por el Sumo Pontífice, aprovechar sus leyes o reconocerles valor jurídico, recurrir a los tribunales de la curia, etc.*” (Padre H. BELMONT, *El ejercicio cotidiano de la fe*, in *Brimborions. Contribution a la vigilance de la foi*, Grâce et vérité, Bordeaux, 1990, (pág. 68). Compartimos plenamente esta postura.

57) No se trata de casos puramente hipotéticos, desgraciadamente... A causa de esta dificultad, no pocos sacerdotes y fieles, incluso sedevacantistas, reconocen (en contradicción con sus propios principios) la validez de las sentencias de los tribunales de Juan Pablo II; o bien admiten la posibilidad de conceder nuevas nupcias, luego de que sacerdotes “tradicionalistas” hayan examinado el dossier y concluido, por opinión privada, que el matrimonio precedente era efectivamente nulo. A esta segunda hipótesis, Mons. Tissier, fundándose en la naturaleza social del matrimonio, responde correctamente cuando escribe que “*esto [las opiniones privadas] no es suficiente en el caso que el bien público esté en juego; pues el bien público está en juego en cada causa en la que el lazo matrimonial está en discusión. Para zanjar esta duda, hay que tener un poder en el foro externo público*” (*Cor Unum*, cit., IV, 4, pág. 43; Mons. Tissier escribe, por otra parte: también en caso de “*matrimonio realmente nulo*”, “*para comprobar el libre estado de una persona (para que pueda volver a casarse) es necesario un juicio válido, ¡no la apreciación privada más un juicio inválido!*”, *Cor Unum*, ibidem, I, 3, b, pág. 40): esta manera de proceder sería quizás admisible, solamente en casos evidentes (nulidad de matrimonio por ligamen precedente, consaguinidad en el primer grado, orden sagrado, etc.). Se podría invocar una suplencia, no de la Iglesia sino de Dios, que haría válidas sentencias de nulidad en sí mismas inválidas, pronunciadas en nombre del ocupante material de la Sede Apostólica. Pero esta suplencia está prevista por los teólogos -para quien posee algún título en nombre del cual recibirla- solo para el caso en que la misma existencia de la Iglesia estuviera en juego, lo que no es el caso. *Salvo meliore iudicio*, no vemos entonces solución a esos casos de conciencia espinosos y dolorosos que tocan a algunos fieles, sino la de eliminar las causas de nulidad del primer matrimonio, volviéndolo así válido; o si esto fuera imposible, aceptar la difícil, pero no imposible, situación de vivir separado sin volver a casarse (en cuanto a los fieles solteros, hay obligación -para todos los que son concientes del problema- de no contraer matrimonio con personas que han estado casadas anteriormente y que fueron beneficiados luego con una declaración de nulidad).

a partir de un cierto período <sup>(58)</sup> por la Fraternidad San Pío X para obviar este grave inconveniente, nos parece -como acabamos de demostrar- absolutamente infundada e ilusoria.

Cuanto acabamos de afirmar puede parecer duro al lector, pero las citas que siguen lo ayudarán a aceptar la triste realidad, ya que, sin darse cuenta, las mismas autoridades de la Fraternidad confirman nuestra conclusión.

De hecho, Mons. Tissier de Mallerais cree demostrar la licitud de sus tribunales partiendo del derecho que tienen los fieles de saber con certeza si su propio matrimonio está, sí o no, válidamente celebrado: los fieles, escribe, *“tienen el derecho en justicia de estar seguros de la validez del sacramento recibido una segunda vez y, por lo tanto, de la validez de la sentencia de nulidad... (...) pues (...) en esta situación, los obispos fieles (Mons. Rangel en Campos) y nuestra Comisión canónica (...) tienen los poderes de suplencia para juzgar los casos matrimoniales”* (Cor Unum, cit., II, 4, pág. 41). Si las palabras tienen un sentido, las sentencias de los “tribunales tradicionalistas” son válidas **porque** no hay otro modo para los fieles de tener la certeza de la nulidad de su primer matrimonio. Pero Mons. Tissier se contradice, al quitar a las sentencias en cuestión toda certeza, haciendo así recaer al fiel lleno de dudas en la más grande angustia y perplejidad sobre el estado de la propia alma: *“Por fin -escribe el presidente de la comisión canónica-, nuestras sentencias, como todos nuestros actos de jurisdicción de suplencia, y como las mismas consagraciones episcopales de 1988, 1991, etc. <sup>(59)</sup>, deberán ser confirmadas ulteriormente por la Santa Sede”* (Cor Unum, IV, 6, pág. 43). Si la Santa Sede <sup>(60)</sup> no confirma en el futuro las sentencias dictadas por la Fraternidad, ¿qué sucederá? Sucederá que todas las sentencias deberán ser tenidas por nulas y sin efecto, y eso, desde el principio. Así, permaneciendo siempre válido el primer matrimonio, las nupcias sucesivas eventualmente celebradas,

¡serán nulas y sin efecto desde el principio! Ahora bien, si esta hipótesis no puede ser excluida, ya que el mismo Mons. Tissier la contempla y cree posible, se puede deducir que hasta aquí todos los fieles que han recibido la anulación del matrimonio por los tribunales de la Fraternidad ignoran -la misma Fraternidad lo admite- si esta anulación es válida o no. Ignoran entonces si son válidas las primeras o las segundas nupcias y si la persona con la que viven es el cónyuge legítimo o un amante y, en consecuencia, si están o no en regla ante Dios. Pero hay más: como el mismo Mons. Tissier sostiene que si la jurisdicción es concedida a los tribunales de la Fraternidad, es porque solo ellos darían a los fieles aquella certeza a la que todo fiel tiene derecho; y constatado por admisión misma de Mons. Tissier, que no hay ninguna certeza hasta declaración ulterior de la Santa Sede, se deduce que los tribunales de la Fraternidad no tienen jurisdicción en ningún caso, y que sus sentencias son no solamente dudosas sino nulas. Por lo tanto, los fieles que contrajeron nuevo matrimonio basándose en la validez de estas sentencias, serían en realidad concubinos y no cónyuges legítimos.

### **Consecuencias prácticas: ¿cuál es el deber de los fieles y de los miembros de la Fraternidad? Un llamado de *Sodalitium* a la unidad en la verdad**

La grave conclusión del capítulo anterior, así como de todo nuestro escrito, debería plantear a nuestros lectores, fieles o miembros de la Fraternidad, otro caso de conciencia: ¿puedo todavía sostener a la Fraternidad San Pío X si verdaderamente continúa constituyéndose como Iglesia independiente y si llega al punto de administrar a sus propios fieles sacramentos (como el matrimonio) que pueden ser inválidos y sacrílegos? ¿Un fiel puede todavía seguir con confianza a guías que yerran tan gravemente? Los sacerdotes -aún en desacuerdo con sus propios superiores-, ¿pueden ser cómplices, aunque sea solo con

58) En efecto, tuvo lugar una evolución en la posición de la Fraternidad al respecto. En 1983, nueve sacerdotes pertenecientes al distrito de Estados Unidos de la Fraternidad San Pío X abandonaron la sociedad, entre otras cosas porque esta reconocía las sentencias de nulidad matrimonial emanadas por la Rota Romana e incluso las de los tribunales diocesanos de Estados Unidos, notoriamente laxos.

59) Mons. Tissier no se da cuenta que los dos casos -consagraciones episcopales y sentencias de un tribunal- no pueden ser puestos en un mismo plano. *“Un acto válido en sí mismo, como las consagraciones -observa Orlando Fedeli- es algo muy distinto del ejercicio del poder de gobierno, que precisa de jurisdicción para tener existencia legal, como las sentencias de un juez. Si un día las consagraciones debieran ser confirmadas por la Santa Sede, no sería para hacerlas válidas (lo cual nadie pone en duda); se trató de un acto de transmisión del poder de orden, el único poder que podía transmitir Mons. Lefebvre, y no del poder de jurisdicción, que solo el Papa posee por derecho propio y puede entonces comunicar”*. Para explicarnos mejor: si en el futuro -una vez que la Iglesia vuelva a la normalidad- la Santa Sede declarase ilegítimas las consagraciones episcopales realizadas por Mons. Lefebvre y por sus sucesores, los obispos consagrados, los sacerdotes ordenados, los fieles confirmados, estarán todos siempre válidamente consagrados, ordenados y confirmados, aunque ilícitamente. En cambio, si la Santa Sede no confirma las sentencias de los tribunales de la Fraternidad (y verdaderamente no se ve como podría confirmarlas), los matrimonios contraídos sobre la base de estas sentencias, serían desde el comienzo, completamente inválidos; y los presuntos esposos descubrirían de improviso que son concubinos.

60) Hay que notar que para Mons. Tissier, Juan Pablo II es el Papa legítimo, por lo cual no se ve porqué no le correspondería juzgar la validez de las sentencias dictadas por la Fraternidad, y se deba esperar en cambio el juicio de un Papa futuro. El hecho es que el reconocimiento de Juan Pablo II por parte de la Fraternidad, es más verbal que real.



su silencio, de una doctrina y de una praxis con consecuencias tan importantes?

Los miembros del Instituto *Mater Boni Consilii* salieron de la Fraternidad San Pío X ya en 1985, considerando que no se podía, en conciencia, sostener más la obra de Mons. Lefebvre. Esta decisión nos pareció y nos parece válida todavía, prescindiendo de la cuestión que hemos tratado en este dossier. Pero la creación de la “Comisión canónica San Carlos Borromeo” en 1991, es cosa tan grave que plantea este problema incluso a quien no consideró oportuno seguirnos en 1985. Y, en efecto, no han faltado los sacerdotes que abandonaron la Fraternidad San Pío X por no avalar el cisma de hecho, realizado con la creación de esta Comisión, verdadero embrión de una nueva Iglesia. Sabemos -es verdad- que muchos fieles ignoran totalmente la institución o naturaleza de estos tribunales; que muchos sacerdotes y miembros de la Fraternidad no están de acuerdo con esta institución; que de hecho, en algunos distritos, entre los cuales probablemente Italia, los “tribunales” son ignorados e inutilizados. Sin embargo, permanece el hecho de que estos tribunales y la doctrina que pretende justificarlos, no son una iniciativa personal y la opinión privada de algunos miembros de la Fraternidad; sino que son, respectivamente, un órgano (por ignorado y poco conocido por el público que sea) y un punto de doctrina oficial de la Fraternidad. Creemos entonces poder concluir que no sostener más la Fraternidad San Pío X, es objetivamente una obligación en conciencia, al menos para aquellos que están al corriente de esta triste cuestión (salvo buena fe de particulares, solo por Dios conocida).

No obstante, ¿no habrá un medio de evitar una conclusión tan amarga, y que parece no tener en cuenta el bien innegable que dicha Fraternidad -que reúne la casi totalidad de los católicos que permanecieron fieles a la Tradición- realiza, un poco por todos lados sobre la tierra? ¿Debemos verdaderamente abandonar a la Fraternidad a su destino?

Me parece que para continuar sosteniendo a la Fraternidad San Pío X a causa del bien que todavía podría hacer en el futuro, es necesario obtener de sus responsables una revisión de su postura doctrinal. Es decir, que la Fraternidad San Pío X debería, ante todo, reexaminar su posición sobre la jurisdicción supletoria y -luego de este serio examen de la cuestión- llegar a la supresión de la Comisión canónica San Carlos Borromeo, o al menos a su transformación de tribunal eclesiástico en simple órgano consultivo sobre cuestiones morales y canónicas; así como revisar las “Ordenanzas” de 1997 (y 1980).

Pero sería ilusorio corregir efectos erróneos, sin revisar simultáneamente la causa de tales efectos. La larga introducción histórica que hemos hecho preceder al examen de la doctrina difundida en la Fraternidad San Pío X desde 1991, exponiendo la evolución de la postura de la Fraternidad sobre el problema de la jurisdicción, tenía justamente por fin hacer comprender al lector que las desviaciones hallables actualmente en la Fraternidad, hunden sus raíces en la posición que Mons. Lefebvre consideró deber adoptar ante el “problema de la autoridad” (o “del Papa”), por lo menos desde 1979. Solo una postura clara y teológicamente correcta sobre la autoridad del Concilio, de Pablo VI y de Juan Pablo II, puede permitir luego todas las aplicaciones particulares que la crisis actual plantea a los católicos fieles.

Mons. Lefebvre, es verdad, rechazó siempre la solución sedevacantista y ciertamente no podemos sostener que, en este rechazo, no esté incluida también la Tesis de *Cassiciacum* elaborada por el Padre Guérard des Lauriers O.P., el teólogo más prestigioso que haya tomado -desde el comienzo- la defensa de la Tradición Católica. La marginalización, luego la “diabolización”, finalmente la misma eliminación de la memoria del Padre Guérard des Lauriers, autor del *Breve Examen Crítico del novus ordo Missæ*, atribuido a los Cardenales Ottaviani y Bacci que lo suscribieron, privó a Mons. Lefebvre y su Fraternidad de un guía seguro y con autoridad, para las decisiones doctrinales y teológicas que se impusieron ineluctablemente.

Desgraciadamente, la posición del Padre Guérard fue rechazada prácticamente sin examinarla y asimilada al sedevacantismo completo, del cual, por el contrario, el Padre Guérard se diferenció siempre. Algunos de los motivos por los que la Fraternidad y Mons. Lefebvre rechazaron el sedevacantismo, son compartidos plenamente por nuestra postura: ausencia de prueba sobre la herejía formal; impracticabilidad de las “vías” clásicas de la hipótesis del Papa herético y de la Bula de Pablo IV para demostrar la vacancia de la Sede; necesidad de una continuidad de la Iglesia, de la jerarquía y de los electores de un cónclave (los cardenales); rechazo de los “cónclaves” convocados por personas privadas... Por otro lado, la Tesis de *Cassiciacum* comparte con los sedevacantistas sus posiciones esenciales: Juan Pablo II no puede gozar de la autoridad pontificia; no está divinamente asistido; no se puede estar en comunión con él (entre otras cosas, en el Canon de la Misa); no se plantea, a su respecto, el problema de la obediencia e infalibilidad del Papa

61) Lo señalaron antes que nosotros dos sedevacantistas pasados a la Tesis de *Cassiciacum*, Mons. McKenna y el Padre Barbara.



(verdades de fe, ambas, vigorosamente defendidas en la Tesis y generalmente también en el sedevacantismo, a diferencia de la Fraternidad). No hemos abrazado la Tesis porque sea más cómoda o porque pueda ser un punto de unión de todos los antimodernistas, sino únicamente porque es verdadera. Sin embargo, en nuestra opinión, a menudo es considerada como un factor de división (somos acusados de “sedevacantismo” por los adeptos de Mons. Lefebvre, y de “lefebvrismo” por los “sedevacantistas”!); cuando, por el contrario, como lo señalaron algunos raros observadores <sup>(61)</sup>, ella podría convertirse en un poderoso factor de unidad entre nosotros, poniendo fin a interminables y peligrosas divisiones que no aprovechan sino a nuestros enemigos, debilitan nuestras fuerzas y escandalizan a los fieles.

Invitamos entonces a las personas más competentes y mejor intencionadas de los dos campos (sedevacantismo y discípulos de Mons. Lefebvre) a tomar en seria consideración la Tesis llamada de

*Cassiciacum*: es la única tesis sedevacantista que, por una parte, responde a las críticas de los adversarios; y por otra, no elude las objeciones planteadas por Mons. Lefebvre y los suyos al sedevacantismo, presentando una solución suficiente para calmar sus perplejidades y temores. Para los adeptos de las posturas que nos son adversas, la Tesis sería también un poderoso antídoto contra la tentación de crear, explícita o implícitamente, una “pequeña Iglesia” tradicionalista; pues ella rechaza -de igual manera y por iguales motivos- tanto los “cónclaves” sedevacantistas, como la “jerarquía de la Tradición” sostenida por la Fraternidad San Pío X. Una posición intransigente, cierto, pero equilibrada; la única que toma en cuenta, simultáneamente, tanto la increíble situación que vivimos, como los dogmas de fe (infalibilidad, primado, indefectibilidad, apostolicidad, etc.) en los que debemos creer para permanecer católicos. ¡Pueda realizarse finalmente, al menos entre todos los que tenemos en común la lucha contra la herejía modernista, la unidad en la verdad y en la caridad!

## Apéndice

*Este dossier sobre la “Comisión canónica San Carlos Borromeo” ya estaba terminado y enviado a la redacción, cuando recibimos de un lector una copia del editorial que el Padre Michel Simoulin, superior del distrito de Italia de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, publicó en el número de noviembre de 2000, de “Roma Felix”.*

*Es la primera vez desde 1991, fecha en la cual fue instituida la “Comisión canónica San Carlos Borromeo”, que la Fraternidad San Pío X habla a los fieles italianos de este organismo (aunque sin revelar el nombre); casualmente, solo después de que “Sodalitium” anunció, en su editorial de julio (nº 50), la publicación de un dossier “sobre los ‘tribunales canónicos’ de la Fraternidad San Pío X”. “Desde 1991 -viviendo Mons. Lefebvre- la Fraternidad San Pío X se arroga sobre sus fieles (y potencialmente sobre todos los católicos) el ‘poder de atar y desatar’, usurpando poderes exclusivos de la Santa Sede. Un tribunal con sede en la casa generalicia de la Fraternidad, en Suiza, concede dispensas para los impedimentos matrimoniales (que harían inválido el vínculo), anula matrimonios, dispensa los votos religiosos, levanta censuras eclesásticas, incluso excomuniones...”. Esto es lo que habíamos escrito en la pág. 4 del último número de Sodalitium. En su editorial de noviembre,*

*el Padre Simoulin, aunque sin citar nuestra revista, reaccionó a cuanto habíamos escrito al respecto; o, más bien, respondió a las reacciones de sus fieles, perplejos e inquietos ante lo que habíamos revelado.*

*En lugar del Padre Simoulin nos habríamos anticipado a Sodalitium, publicando todos los documentos sobre la “Comisión canónica” para justificar y defender canónicamente su existencia; no todos habrían estado de acuerdo con esta posición, pero todos habrían apreciado la honestidad intelectual de las autoridades de la Fraternidad en Italia. También habría perdido gran parte de su interés el dossier de Sodalitium.*

*El Padre Simoulin (o sus superiores) eligió el camino contrario: negar la verdad; es lo que demuestra de modo evidente la confrontación entre su editorial -que publicamos a continuación- y los documentos auténticos, pero reservados, de la Fraternidad que se acaban de leer. Sodalitium se contentará con señalar, en un breve comentario, el contraste entre el editorial de “Roma Felix” y el artículo de Mons. Tissier extraído de “Cor Unum”.*

*A la Fraternidad solo le pedimos una cosa -lo piden sobre todo los fieles que hasta ahora tuvieron plena confianza en ella-, que diga la verdad, ya que Dios es la Verdad.*

*Sodalitium*



# Roma felix



Lettera mensile di informazioni della Fraternità Sacerdotale San Pio X in Italia  
Anno II - n. 11  
Novembre 2000

## Editorial

del Padre Michel Simoulin

Queridos fieles:

No sé que sucede, pero hace un cierto tiempo que varios amigos de la Fraternidad me preguntan sobre supuestos “tribunales” constituidos por la Fraternidad para disolver matrimonios, votos religiosos, etc.. Parece que hubiera gente sembrando dudas y cizaña, haciendo creer así que la Fraternidad ha usurpado los poderes del Papa y de la Curia Romana; con lo cual confesaría no creer que el Papa posea todavía el Primado de jurisdicción y se comportaría de hecho como si la Sede estuviera vacante.

Sin embargo, Mons. Fellay lo repitió con fuerza en la Basílica de San Pedro, el 8 de agosto próximo pasado, invitándonos a rezar por el Vicario de Cristo y Sucesor de Pedro. Esta peregrinación ha proclamado ante todos nuestra fidelidad a la Sede de Pedro, y no comprendo como se puede dudar.

Cuando se habla de “tribunales” instituidos por la Fraternidad, lamento tener que decir que es el fruto de una imaginación bastante desordenada. Es cierto que Mons. Lefebvre había pedido que se instituyeran comisiones, compuestas por sacerdotes doctos y expertos en teología moral y derecho canónico, para responder a las dudas de sacerdotes, religiosos y fieles. Dado que frecuentemente no se puede confiar en las respuestas

venidas de los tribunales diocesanos, todos pueden proponer cuestiones y casos de conciencia a estas comisiones; cuyos miembros, una vez examinado el caso, dan una respuesta que no es más que una opinión o un consejo, ¡nunca una sentencia declaratoria con fuerza de ley! Las comisiones no son en absoluto un órgano permanente, sino que se reúnen cada tanto, cuando se le formulan preguntas por parte de quienes no se consideran satisfechos con las respuestas de las diócesis. Eso es todo.

Se puede decir todo lo que se quiera, pero está fuera de duda que la Fraternidad reconoce la autoridad de Roma, que no pretende para nada usurpar la suprema jurisdicción de Roma y que solo usa de aquella *facultad de suplencia*, prevista por el derecho canónico, para el bien de las almas; como también lo hace, por otra parte, para las confesiones y matrimonios.

Es verdad que -como en toda sociedad humana- puede suceder que uno diga algo incorrecto, que otro cometa un error, que otro también escriba una palabra fuera de lugar... Pero no sería honesto fundar en estos errores un discurso para probar que “la Fraternidad” yerra gravemente. Eso es hacer la obra del demonio.

Entonces, que todos permanezcan en paz. A pesar de sus enemigos y de sus falsos amigos, la Fraternidad anda bien, ¡e incluso cada vez mejor! No es el momento de permitir al diablo destruir nuestra mutua confianza.

Juntos venceremos, con la Virgen y todos los Santos.

## RESPUESTA AL EDITORIAL DEL PADRE SIMOULIN

### Un editorial de *Roma felix*

Lo que acaban de leer es el editorial del número de noviembre de *Roma felix*. Su autor es el Padre Michel Simoulin, ex-rector del Instituto universitario San Pío X de París, ex-director del seminario de Ecône, y actualmente superior del distrito italiano de la Fraternidad San Pío X, cuyo “*boletín mensual de información*” es *Roma felix*: una revista oficial.

Motivo del editorial, las preguntas que “*varios amigos de la Fraternidad*” plantean al Padre Simoulin sobre “*supuestos ‘tribunales’ constituidos por la Fraternidad para disolver matrimonios, votos religiosos, etc.*”. El Padre se dirige directamente a los amigos de la Fraternidad que tienen dudas, pero también responde indirectamente a quienes siembran “*dudas y cizaña*” con la difusión de estas versiones...

### ¿Una acusación contra *Sodalitium*?

Es difícil pensar que el Padre Simoulin no se refiera al editorial del nº 50 de *Sodalitium* (junio-julio de 2000). En efecto, la Fraternidad, al menos en Italia, siempre ha silenciado la existencia de la “Comisión canónica San Carlos Borromeo”, instituida en 1991; es llamativo que hable solo después de la publicación de este editorial, en el cual se anunciaba la publicación inminente del presente dossier (no excluimos, naturalmente, que *Roma felix* se dirija igualmente a otras personas que no conocemos). Las acusaciones que hace son graves: ser sembradores de dudas y cizaña, tener una imaginación bastante desordenada, falta de honestidad, y finalmente hacer la obra del demonio. Como sabemos, el diablo es el “*padre de la mentira*”. Al escribir que han sido “*constituidos tribunales por la Fraternidad para disolver [¡sic! Léase: para anular] matrimonios, votos religiosos, etc.*”, ¿*Sodalitium* mintió o dijo la verdad? Y si no mintió, ¿quién lo hizo?

## Lo que *Roma felix* admite diciendo la verdad

El editorial en cuestión debe admitir que “*Mons. Lefebvre había pedido que se instituyeran comisiones (...) no son en absoluto un órgano permanente, sino que se reúnen cada tanto...*”. En estas pocas líneas se halla todo lo que *Roma felix* admite (9 años después) respecto de las Comisiones, afirmando la verdad.

## Lo que *Roma felix* niega

Pero el fin del editorial no es tanto admitir, como negar. Ahora bien, en particular, esto es lo que niega:

1) que la Fraternidad haya constituido “*supuestos tribunales*”;

2) que las comisiones instituidas por la Fraternidad den respuestas que sean “*sentencias declaratorias con fuerza de ley*”, tratándose solo de órganos consultivos que dan “*no más que una opinión o un consejo*”;

3) que estas comisiones hayan “*usurpado los poderes del Papa y de la Curia Romana*”.

Estas tres negaciones son tres mentiras que *Roma felix* dice a sus propios lectores, y la Fraternidad italiana a sus propios fieles.

## *Roma felix* no dice la verdad. Las pruebas

En cuanto al primer punto, *Roma felix* escribe: “*cuando se habla de ‘tribunales’ instituidos por la Fraternidad, lamento tener que decir que es el fruto de una imaginación bastante desordenada*”. Cada vez que el Padre Simoulin habla de los tribunales de la Fraternidad, para negar su existencia, escribe “*tribunales*” entre comillas y los llama “*supuestos*”, como fruto de nuestra fantasía.

Mons. Bernard Tissier de Mallerais, uno de los cuatro obispos de la Fraternidad, Presidente de la Comisión canónica, ha utilizado sin embargo por lo menos doce veces las palabras *tribunal* y *tribunales* en *Cor Unum* (la revista oficial de la Fraternidad) sin comillas, en referencia a la Comisión que preside; y eso, en oposición a los de Juan Pablo II, definidos como tribunales “*novus ordo*”, tribunales “*modernistas*”, tribunales “*oficiales*”. El mismo título del artículo de Mons. Tissier es “**Legitimidad y estatuto de nuestros tribunales matrimoniales**”. La finalidad del artículo es “**justificar doctrinalmente la existencia de nuestros tribunales matrimoniales**”. Para Mons. Tissier “**la institución de los tribunales matrimoniales en el orbe de la tradición, está especialmente justificada**” por cuatro argumentos que cita en el punto III, 4, pág. 42. El fiel de la Fraternidad que recurre a la Comisión canónica

suscribe una “*promesa*” jurada, en la cual se compromete a conformarse “**con la sentencia del tribunal**” de la Fraternidad. Estas citas bastan para demostrar que, en cuanto al primer punto, *Roma felix* no dice la verdad.

En cuanto al segundo punto, el editorial de *Roma felix* afirma: “*Dado que frecuentemente no se puede confiar en las respuestas venidas de los tribunales diocesanos, todos pueden proponer cuestiones y casos de conciencia a estas comisiones; cuyos miembros, una vez examinado el caso, dan una respuesta que no es más que una opinión o un consejo, ¡nunca una sentencia declaratoria con fuerza de ley!*” Aparte de que una sentencia no es nunca una ley sino la aplicación de una ley, veamos lo que escribe Mons. Tissier, siempre en *Cor Unum*: “**Es una verdadera jurisdicción y no una exención del derecho y de la obligación que los fieles tienen de recibir una sentencia. Así, pues, tenemos poder y deber de dar verdaderas sentencias, teniendo potestatem ligandi vel solvendi. Ellas tienen, pues, valor obligatorio.** La razón próxima es que nosotros debemos poder decir a los fieles lo que deben seguir, quod debent ‘servare’. **Nuestras sentencias no son simples opiniones privadas...**” (IV, 4, pág. 43). En efecto, como hemos visto, el fiel de la Fraternidad que recurre a la Comisión canónica suscribe una “*promesa*” jurada, en la cual se compromete a conformarse “**con la sentencia del tribunal**” de la Fraternidad (Mons. Tissier emplea ocho veces el término *sentencia* al referirse al juicio de su Comisión, puestas en oposición a las sentencias “*novus ordo*”). Estas citas bastan para demostrar que, también en cuanto al segundo punto, *Roma felix* no dice la verdad.

En cuanto al tercer punto, *Roma felix* escribe: “*Parece que hubiera gente sembrando dudas y cizaña, haciendo creer así que la Fraternidad ha usurpado los poderes del Papa y de la Curia Romana*”, mientras que “*se puede decir todo lo que se quiera, pero está fuera de duda que la Fraternidad reconoce la autoridad de Roma, que no pretende para nada usurpar la suprema jurisdicción de Roma y que solo usa de aquella facultad de suplencia, prevista por el derecho canónico, para el bien de las almas; como también lo hace, por otra parte, para las confesiones y matrimonios*”. Finalmente, *Roma felix* admite que “*frecuentemente no se puede confiar en las respuestas [¿también los tribunales diocesanos dan solo respuestas, y no sentencias? n.d.r.] venidas de los tribunales diocesanos*”; como si la autoridad puesta en duda por la Fraternidad fuese únicamente la de los tribunales diocesanos, y no la de la Santa Sede (la Rota Romana, por ejemplo).





El Padre Simoulin

Por cierto que la Fraternidad reconoce (desgraciadamente) -al menos en teoría- la autoridad de Juan Pablo II, nunca hemos dicho lo contrario. Por cierto que la Fraternidad no admite *usurpar* los poderes de la Santa Sede, porque el término “usurpar” indica ya abuso.

Pero la Fraternidad pretende reemplazar y suplir “los poderes del Papa y de la Curia Romana” (y no solamente los de los obispos diocesanos), en las materias en cuestión.

El mismo Mons. Lefebvre escribía, en su carta del 15 de enero, que las Comisiones deberían suplir “*en cierto modo a la defeción de las Congregaciones romanas*”, y Mons. Tissier reconoce: “*Es cierto que nuestras sentencias en tercera instancia reemplazan a las sentencias de la Rota Romana, que juzga en nombre del Papa como tribunal en tercera instancia. Pero no es una usurpación de poder de derecho divino del Papa, ya que la reserva de esta tercera instancia al Papa es solamente de derecho eclesiástico!*” (IV, 5, pág. 43). Hemos demostrado que la prohibición de recurrir al Papa (el fiel de la Fraternidad se compromete a no dirigirse “a un tribunal eclesiástico oficial para hacer examinar o juzgar” su causa) implica la negación del primado de jurisdicción del Papa, que posee por derecho divino. En todo caso, Mons. Tissier admite que la Fraternidad, si no usurpa un poder de derecho divino del Papa, ¡usurpa al menos un poder que posee por derecho eclesiástico! Estas citas bastan para demostrar que tampoco en cuanto al tercer punto, *Roma felix* dice la verdad.

### Una escapatoria inútil

Al término de su editorial, el P. Simoulin reconoce que “*como en toda sociedad humana*”, también

en la Fraternidad puede suceder que “*uno diga algo incorrecto, que otro cometa un error, que otro también escriba una palabra fuera de lugar... Pero no sería honesto fundar en estos errores un discurso para probar que ‘la Fraternidad’ yerra gravemente. Eso es hacer la obra del demonio*”.

Aparte de que no se comprende porqué la Fraternidad -como también el Instituto Mater Boni Consilii y cualquier institución no directamente fundada por Dios y por Él dotada de infalibilidad, como la Iglesia- no pueda errar gravemente, estas líneas transparentan un extremo intento de defensa: eventuales errores presentes en escritos de sacerdotes de la Fraternidad, no implicarían a la Fraternidad en sí misma...

Este argumento -en especie- es vano. Los documentos que hemos citado son efectivamente documentos oficiales de la Fraternidad: las *Ordenanzas*, promulgadas primero por Mons. Lefebvre y después por Mons. Fellay; una exposición doctrinal sobre la Comisión canónica de la Fraternidad, redactada por su Presidente, Mons. Tissier, y publicada por el boletín oficial *Cor Unum*; finalmente, una carta del mismo fundador de la Fraternidad, Mons. Lefebvre, al superior general en el momento, el Padre Schmidberger.

Atribuir estos documentos oficiales a la Fraternidad y no a sus autores materiales, no es hacer la obra del demonio sino hacer obra de verdad.

### ¿Porqué esta actitud?

Lamentamos haber tenido que demostrar que las afirmaciones de *Roma felix* no son verdaderas, tanto más porque el autor del editorial es un sacerdote celoso que sin embargo no podía no estar al corriente; **¡tanto más porque como superior de distrito sería juez en segunda instancia de los tribunales cuya existencia niega!**

No solo lo lamentamos y no podemos creerlo, sino que también estamos sorprendidos. *Roma felix* ciertamente no ignoraba -puesto que lo habíamos anunciado- que *Sodalitium* preparaba un “voluminoso dossier” sobre la Comisión canónica. Debíó entonces suponer que entre tantos sacerdotes que salieron de la Fraternidad, probablemente hubiera uno que nos transmitiese los documentos reservados que hemos publicado. Ahora bien, *Roma felix* no podía ignorar que estos documentos iban a revelar de manera incontestable que el editorial en cuestión no es verídico.

No solo mintió, sino que lo hizo inútilmente: ¿porqué? No nos corresponde a nosotros juzgar, aún cuando probablemente haya forzado la mano de *Roma felix* el amor por su congregación religiosa; por noble





Los cuatro obispos de la Fraternidad en San Pedro de Roma, con ocasión del jubileo del 2000 (foto Fideliter)

que sea el sentimiento, no puede aprobarse el medio utilizado...

Los silencios, las reticencias, las omisiones y desgraciadamente también las falsificaciones, demuestran sin embargo al menos una cosa: que en este punto, el superior del distrito italiano de la Fraternidad San Pío X duda de la doctrina de la Fraternidad. Si fuese tan cierto lo del “estatuto y legitimidad” de los tribunales canónicos, ¿porqué negar su existencia y naturaleza, cuando Mons. Lefebvre escribió en cambio que “no hay inconveniente en que los fieles conozcan la existencia de esta Comisión”?

Invitamos entonces a *Roma felix* a seguir esta directiva del fundador de la Fraternidad, diciendo finalmente toda la verdad a sus propios lectores. *Errare humanum est, perseverare diabolicum*.

**Nota:** A decir verdad, Mons. Tissier fue en cambio más sincero en una circunstancia análoga. Cuando, en 1996, Orlando Fedeli tomó conocimiento -por una nota de la revista de la Fraternidad argentina, *Jesus Christus*- de la existencia de la Comisión canónica y se dirigió por aclaraciones a los sacerdotes de Campos (Brasil), recibió, según dice, respuestas “evasivas o contradictorias”: “a veces nos decían que los tribunales no existían, a veces que era solo una oficina para las causas matrimoniales (...). Más tarde nos dijeron y garantizaron que no había tribunales. Después confesaron que existían, pero que solo eran conocidos por los sacerdotes cuyos fieles tuvieran un problema jurídico matrimonial. Dom Licinio [Mons. Licinio Rangel, obispo consagrado por Mons. Tissier] nos escribió que la oficina de Campos daba solamente opiniones de expertos (...) y no sentencias. (...) Siendo así las cosas, escribí a Mons. Fellay, actual superior de la Fraternidad San Pío X, respecto de la existencia de los tribunales. Recibí de Mons. Tissier de Mallerai, presidente de la Comisión canónica San Carlos Borromeo, una respuesta que, en lugar de calmar mis dudas, las agravó. En su carta del 9 de octubre de 1996, Su Excelencia nos informaba que, además de los tribunales eclesiásticos de primer y segunda instancia, la Fraternidad San Pío X había instituido un tribunal con los poderes de la Rota Romana: ‘para las sentencias que pronunciamos en tercera instancia, aplicamos, por analogía, a nuestra Comisión canónica, los poderes de la Sacra Rota Romana; por las mismas razones de la situación de necesidad, ya que la misma Rota está imbuida de falsos principios personalistas. También en este caso vale el principio: *Ecclesia supplet*!’. Mons. Tissier no convenció a Orlando Fedeli, como tampoco a nosotros. Pero fue sincero y defendió la legitimidad de la Comisión que preside. *Roma felix* no se ha comportado de la misma manera.

